



UNIVERSIDAD DE CHILE  
Instituto de la Comunicación e Imagen  
Escuela de Periodismo

# **LLEGAMOS PARA QUEDARNOS**

## **Crónica de la revuelta estudiantil**

Memoria para Optar al Título de Periodista

Francisco Figueroa Cerda  
Profesora guía: Faride Zerán Chelech

**Santiago, Chile**  
**2013**

*A mis padres*

*A Helena*

# ÍNDICE

<b>Agradecimientos .....</b>	<b>4</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>6</b>
<b>CAPÍTULO I</b>	
<b>La antesala.....</b>	<b>12</b>
“Salió la copia y entró el original” .....	12
Dios es facho... y brasileño.....	15
La unidad nacional se desvanece en el aire .....	18
El primer revés.....	21
<b>CAPÍTULO II</b>	
<b>Raíces del descontento.....</b>	<b>26</b>
Contra los autocomplacientes .....	26
Ricos, la alegría ya vino .....	28
Tiempos de incertidumbre .....	30
<b>CAPÍTULO III</b>	
<b>Un primaveral otoño .....</b>	<b>34</b>
El ejemplo centralino.....	34
Primera escalada.....	38
La apatía, primera víctima del invierno.....	46
<b>CAPÍTULO IV</b>	
<b>El negociado de la esperanza .....</b>	<b>53</b>
Y volvió .....	53
El accidentado camino a 2011 .....	54
Una fábrica de frustraciones.....	62
Promesas incumplidas .....	68

## **CAPÍTULO V**

<b>El presidente no tiene quien lo escuche .....</b>	<b>72</b>
Gokú y la educación gratuita .....	72
Enredos internos .....	75
El evangelio según San Lucro .....	83

## **CAPÍTULO VI**

<b>La política aturdida .....</b>	<b>91</b>
La pataleta de Bitar .....	91
El recetario de la transición .....	95
Esa autoritaria tecnocracia.....	98

## **CAPÍTULO VII**

<b>El segundo round .....</b>	<b>102</b>
“Están jugando con fuego” .....	102
Vuelcos inesperados .....	110
En el lodo del área chica.....	117
A las trincheras .....	125
<b>Epílogo .....</b>	<b>131</b>
<b>Referencias y bibliografía .....</b>	<b>136</b>

## **Agradecimientos**

Este trabajo, como toda creación humana, tiene un origen colectivo. Las personas que me acompañaron durante su realización son, en una medida mucho menos indirecta de la que creen, coautores de estas páginas. Sin su apoyo este trabajo no habría sido posible. A ellas quiero agradecer. A todos los profesores que aportaron a mi formación, en especial a Faride Zerán, por motivarme a emprender este proyecto y orientarme durante su elaboración. A cada uno de mis compañeros, anónimos constructores de historias como la aquí relatada y muchas más. En particular a Francisco, Víctor y Carlos, por sus desinteresados aportes y consejos. A mis espectaculares padres y hermanos, por su cariño y apoyo incondicional. Y, muy especialmente, a Helena, por la fuerza entregada, por su adorable y paciente compañía.

*A veces, perdidos en los hoyos de los caminos, sólo se han visto nuestros brazos deslujando amenazas otras, nuestros pendones, como un montón de proclamas rojas, han ondeado sin que se vieran nuestros brazos, y otras, sólo se han oído nuestros gritos lanzados con fuerza de peñascos, contra la frente de alguna injusticia.*

*Pero hemos salido de los hoyos y subidos ahora en la roca de nuestra locura, alumbrados por el sol de nuestro triunfo, extendiendo nuestras miradas más allá de las cuevas y de las hondonadas, vemos surgir la ciudad blanca de nuestro ensueño.*

*Queremos llegar pronto, una ansia de impulsión nos echa hacia delante, estiramos nuestros brazos... pero ¡ay! Nuestros anhelos se quiebran como flechas de cristal en las rocas del camino. No podemos volar, somos humanos. Para llegar, hay que atravesar los hoyos, las cuevas, las repechadas...*

MANUEL ROJAS, La Batalla 1912-1914

## Introducción

Este texto es el trozo de una historia tal como la viví. Es un relato de la revuelta estudiantil de 2011, ese conjunto de movilizaciones sociales por la educación que, encabezadas por los estudiantes -en especial universitarios a través de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech)-, remecieron a un país completo, encantando a su sociedad y aturdiendo a su clase dirigente. Pero también pretende ofrecer algunas claves interpretativas sobre las condicionantes sociales y políticas que contribuyeron a su gestación, así como una mirada sobre los desafíos que la situación actual le plantea a las fuerzas y aspiraciones que la hicieron posible.

Se refiere principalmente a lo que ocurrió en Santiago, escenario de las movilizaciones más grandes y hechos políticos más significativos. Pero el lector debe tener en cuenta que lo que sucedió en la capital ocurrió también, con intensidades distintas y en intervalos más o menos largos, en todo Chile. Lo escribo habiendo sido parte del movimiento, no mero espectador, como vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y militante del colectivo estudiantil Izquierda Autónoma. Intervine y lo analizo a posteriori, por lo tanto, desde un punto de vista comprometido, no neutral.

A ratos crónica, a ratos ensayo, el texto relata la gestación, el desarrollo y el desenlace del proceso, sus altos y bajos, no siempre considerados o derechamente desvirtuados en el relato construido por los medios de comunicación. Cuento hechos de los que fui parte, testigo directo o conozco de fuente segura, pero también algunas consideraciones más subjetivas. En otros momentos se proponen lecturas para entender la relación entre las variables sociales, políticas y educacionales que le dieron forma a la revuelta, articulando aproximaciones propias con análisis de terceros más entendidos.

Un buen número de preguntas se puede hacer quien lea estas páginas. ¿Cómo fue que en un país tan fracturado socialmente, presentado por sus autoridades al mundo como modelo de gobernabilidad y progreso, se produjo una revuelta de tan amplia aceptación social y tan profundo impacto político? ¿Acaso Chile no había alcanzado sorprendentes

estándares de reducción de la pobreza y acceso a los bienes y servicios de la modernidad? ¿No era que, de acuerdo a los discursos políticos y los *papers* de los expertos, Chile avanzaba sin contratiempos al edén del desarrollo primer-mundista, de la mano de un pujante neoliberalismo?

Otros lectores, menos distraídos, se harán otras tantas. ¿Cómo pudo un movimiento que estaba sumido en un pantanoso reflujo, desmantelado en una mitad y preso de luchas intestinas en la otra, recomponerse y encabezar una movilización social que acabó siendo histórica? ¿Por qué las contradicciones del Chile actual terminan reventando a través de la educación y no de las relaciones laborales, la salud o la previsión, sometidas a las mismas humillaciones del imperio del dinero? ¿Hubo finalmente algo novedoso en esta revuelta estudiantil, en términos de ideales y formas de acción, que la hiciera portadora de una potencia histórica de cambio?

Estas preguntas no encuentran, porque no pueden, una respuesta aquí. Pero son las que vengo escuchando desde los días de la revuelta y las que yo mismo me hice entonces y a la hora de sentarme a escribir. Espero arrojar a lo menos pistas. De todas formas, el mero ejercicio de hacérselas e intentar responderlas constituye un imperativo básico para nuestra generación y los que anhelan y trabajan por un Chile justo y para todos. No para quedar bien con nuestras conciencias y tener la mejor opinión que compartir en la sobremesa. Simplemente porque otros ya comenzaron a responderlas, reescribiendo el pasado inmediato para hacerse con el futuro.

Los intelectuales y opinólogos de las elites dominantes ya han comenzado a asegurarle a la sociedad que su descontento es propio de una nación que avanza al desarrollo. En sus programas de televisión, editoriales dominicales y entrevistas en *cuché*, nos dicen que nuestra infelicidad es evidencia de lo bien que han hecho las cosas. Disfrazados con credenciales académicas que les dan un pretendido linaje de superioridad, como antes la gracia divina al oscurantismo, intentan demostrarnos con gráficos y estadísticas que nuestra rebeldía no se justifica.

Los señores de la vieja política, por su parte, pasaron con la velocidad que les es característica del sobajeo más oportunista a todo lo que hiciera el movimiento –so pena de bajar en las encuestas hasta los números negativos-, al chantaje de sus elementos más conscientes y politizados, planteando que *llegó la hora de ponerse serios*. Lo que ahora



corresponde, dicen, pasada la ola y ad portas de la liturgia electoral, y si queremos hacer realidad las banderas que levantamos, es que o le dejemos el trabajo a ellos o demostramos nuestra *madurez* haciendo fila y méritos para ingresar al reino de “lo político”: su política.

Hacer un relato de esta gran revuelta estudiantil, de cuáles fueron sus factores de avance y diques de contención, es también combatir las condiciones de surgimiento e impunidad de estas voces. Si algo derrumbó la movilización estudiantil de 2011 (y no fue, lamentablemente, el modelo) fue el *mito* de Chile como país de exitoso neoliberalismo y pulcra transición política a la democracia. Pero así como dañamos ese discurso de legitimación -mito fundacional de esta política mezquina y elitista-, pueden construir otro, con el mismo fin, sobre el origen y el devenir de la revuelta, para terminar haciendo, como decían Los Prisioneros, *de lo bonito algo imbécil*.

El levantamiento estudiantil de 2011 no tiene su origen en las multitudinarias y mediáticas Marchas de Junio, ni tampoco en los errores de la gestión Piñera para contener el conflicto. Fue la continuidad lógica de una marcha que tiene su antecedente más próximo en 2006, cuando en el cénit de la gran movilización estudiantil entonces encabezada por los secundarios, los sectores más reaccionarios de la Concertación, secundados por la Derecha, lograron imponer a través del gobierno Bachelet una salida de muy cuidada imagen democrática pero certera efectividad autoritaria a un conflicto que había logrado denunciar las deudas más sentidas de la transición.

Tras la llamada “revolución pingüina” de 2006, las organizaciones de los estudiantes secundarios fueron desmanteladas y los partidos políticos tradicionales iniciaron una ofensiva para recuperar presencia en el movimiento universitario, a fin de darle un lugar en la corroída institucionalidad del régimen. Se acumuló desde entonces un profundo sentimiento de desconfianza hacia el sistema político, no sólo entre el activo militante más radicalizado, sino entre amplias franjas de las propias bases estudiantiles. Flacos favores a sí mismos se hicieron en el intertanto los partidos, promulgando una nueva ley orgánica de educación general, la LGE, idéntica en lo esencial a la de la dictadura, la LOCE, y negándose a las más tímidas reformas en la educación superior.

Nada nuevo brillaba bajo el sol para el movimiento estudiantil cuando la derecha asumida recuperó La Moneda. Su programa era de absoluta continuidad. En educación, además, era más nutrido, aunque igual de negativo, que el del gobierno anterior. Su primer

año fue una verdadera luna de miel. Pero la aprobación de leyes con el concurso de gran parte de la oposición –como la de “calidad y equidad de la educación”- no les garantizó paz social. Por el contrario. Bastó un puñado de errores administrativos en la asignación de ayudas estudiantiles y la pésima gestión de las expectativas instaladas para que, en el camino señalado por las movilizaciones ambientalistas, se abriera paso con vehemencia la demanda por el derecho a la educación.

Muchos querían que la movilización respondiera al llamado de “todos contra la derecha”, para arrinconar al Gobierno y facilitarle a la ahora opositora Concertación capitalizar el descontento. Pero esos mismos habían aplastado los años anteriores la posibilidad de que tal alianza se fraguara. Los estudiantes no se prestaron para hacerle el trabajo a los mismos que les habían negado hasta las más sensatas exigencias e impulsado las políticas contra las cuales ahora luchaban. Podían asumir la consigna, siempre que se modificara por “todos contra *toda* la derecha”, cosa que hicieron. Fue esta experiencia colectiva, y no el domicilio político de tal o cual dirigente, lo que moldeó el contestatario *ethos* de la revuelta.

Quienes se le enfrentaron, saliendo a trancar el avance y combatiendo las ideas del movimiento, se ubicaban en la Derecha, pero también en las filas de la Concertación. La revuelta se estrelló con el acuerdo transversal entre estas fuerzas, activadas cuando la movilización tocó la médula del sistema educativo y uno de los consensos de la transición: la libertad de lucrar con la educación y el imperativo indiscutible de financiarla respetando el sacrosanto principio de la subsidiariedad; y cuando se presentaron en el Parlamento los primeros proyectos de ley motivados por el conflicto. El desarrollo y desenlace del levantamiento -proceso éste último que vale consignar no está resuelto todavía- está cruzado así por la tensión entre los intentos por reeditar y los esfuerzos por resistir la *política de los acuerdos*; ese modo excluyente y elitista de concebir la democracia que ha estado en la base del *modus operandi* de la transición.

Este relato es también un aporte para identificar esas fuerzas y dinámicas que han buscado, con más o menos éxito temporal, impedir que tanto nuestra generación como los excluidos asumamos con cabeza propia el desafío de la transformación de nuestra sociedad. Teniendo en cuenta, por cierto, que dichas fuerzas y dinámicas no siempre han sido externas a los movimientos sociales, y que muchas veces han avanzado gracias a nuestros

errores e insuficiencias, colándose por los flancos abiertos de nuestro desarme y juvenil inmadurez.

En determinados círculos, se ha puesto de moda la idea de que las revueltas estudiantiles de los últimos años no han sido más que llamativas pero al final efímeras “aventuras”. Menospreciar al adversario suele ser indicio de inseguridad y desconfianza en las propias convicciones y posiciones. Algo de eso hay en este caso. Las élites y los arribistas que revolotean a su alrededor mendigando reconocimiento, como las polillas a las ampolletas, se niegan a ver que la impunidad que protegía sus abusos está hoy fracturada. Los chanchos huelen peor que antes, el retraso de la micro motiva protesta, ya no resignación, y los robos de bancos, casas comerciales y universidades indignan y sacan a la calle. Una derecha que venía con aspiraciones refundacionales salió trasquilada y los rituales de la política tradicional toda han devenido verdaderas huelgas ciudadanas contra su insensatez.

Si es necesario hablar de aventura, es justo decir que ha sido una de las más maravillosas en las que se ha embarcado la juventud chilena. Sumió a los políticos en un tartamudeo crónico del que todavía no salen y sembró la histeria en los pasillos de la durante mucho tiempo -¡demasiado!- cómoda oligarquía criolla. Abriendo por unos meses la esperanza en millones de que todo podía depender de su voluntad y justas aspiraciones, lo que no es poco en un pueblo al que se le ha inculcado un implacable conformismo y desconfianza en sí mismo.

Pero dejar pasar la crítica cínica sería igual de nocivo que hacer una apología de la revuelta estudiantil. No hay peor favor que se le pueda hacer a los ideales e intereses que defendió. Los anhelos mayoritarios siguen excluidos de la política. Es más: sus secuestradores, aún después del colosal acoso estudiantil, han podido reordenarse y entrampar la proyección política del ímpetu transformador de la revuelta. Como decía un compañero, golpeamos a la vieja política en el estómago, la dejamos sin aliento, pero no tardará en recuperarlo. Un relato comprometido con sus razones no puede evadir esa verdad.

La cosa es que la revuelta estudiantil de 2011 es uno de los acontecimientos más importantes en la historia reciente de Chile y aún no es claro si su potencial es cultivado o ahogado. De ahí el interés por contar qué se discutía en el seno de sus organizaciones, cómo

y por qué se tomaban las decisiones y cuál era el ánimo de los miles de movilizados. Durante su desarrollo, insisto, mis adhesiones no fueron neutrales ni individuales. Pero he procurado explicitar siempre el punto de vista ocupado y contar los hechos tal cual se dieron, asumiendo el papel de un cronista involucrado. Lo narrado y lo interpretado tiene eso sí una columna vertebral: destacar el potencial de estas luchas y, por consiguiente, la responsabilidad que cargamos todos los que hemos sido parte de esta historia.

# CAPÍTULO I

## La antesala

### “Salió la copia y entró el original”

En Chile, como es sabido, la vida pública se desenvuelve del modo más arcaico y gracioso. Un ladrón de cuello y corbata lo suficientemente astuto puede alcanzar la estatura de prohombre, mientras que un obediente matón puede llegar a ser considerado un estadista. Los cínicos han adquirido una suerte de nuevo título nobiliario, el de “expertos”, mientras que los aprovechadores viven como *playboys* gracias al cartel de emprendedores con el que han sido ungidos. Parece el mundo al revés, pero es el mundo tal cual es. Es un orden naturalizado. No es objeto de polémica ni de crítica. Así, ladrones y matones, cínicos y aprovechadores, se hacen impunemente con las riendas del país. Y borrachos de exitismo lo conducen al imperio de la incertidumbre.

Nada hacía pensar que en 2011 este cuadro pudiera alterarse. La noche neoliberal parecía extenderse sin contratiempos. Densa, poderosa, incontrarrestable. Que los extraterrestres nos invadieran parecía más probable que se alzara una revuelta social contestataria y anhelante de un Chile distinto. La desazón era norma, sobre todo después del año negro que fue 2010, marcado por el retorno de la derecha asumida a La Moneda y los embates de un terremoto de proporciones gigantescas.

El estado de ánimo con el que comenzamos el que más tarde se convertiría en el año de la mayor revuelta social en democracia, y que muchos catalogaran como el “nuevo amanecer” de los movimientos sociales y del “derrumbe” del modelo, no era de los mejores. Vale la pena repasar por qué. Ayuda a evitar los mareos con los superficiales síntomas de coyuntura, a comprender lo frágil que es aún lo nuevo que emerge y lo sólidas que son todavía las raíces de lo viejo que agoniza.

2010 me tocó vivirlo como vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH. En ese minuto no lo sabía, pero iba a ser la primera vez de

dos. Lo que sí sabía era que vivíamos un año distinto a los anteriores: nos enfrentábamos al primer gobierno de derecha electo en urnas en más de 50 años.

En marzo tomó posesión de la Presidencia Sebastián Piñera Echeñique. Lo logró no tanto gracias al triunfo de la derecha como a la derrota de la Concertación. Pero a las pocas semanas, el panorama ya era distinto. La derecha estaba barriendo con todo. Con sus flamantes chaquetitas rojas y eficiente gestión comunicacional, el Gobierno de Piñera lograba imponer la imagen de un equipo fresco, jugado, creativo. Y llegaba con una impronta mucho más llamativa: la de una derecha con voluntad de y fuerza para reinventarse.

Era un gobierno que no se limitaba a los temas tradicionales de la derecha, léase seguridad pública, promoción de valores del medioevo y privatizaciones desatadas. A poco andar comenzó a incursionar de formas impensadas en cuestiones laborales, impositivas, valóricas y hasta de regulación. No de modo progresista, por cierto (aunque si Bachelet es la vara con que se mide el progresismo, la derecha merecería con creces el apelativo), pero sí de manera poco ortodoxa para la derecha chilena, quizá la más ortodoxa y poderosa de América Latina.

Era la puesta en práctica del sueño de Piñera: una derecha que se desplegara para superar las ataduras del pinochetismo, atraer al centro político y constituir una nueva mayoría. De esta forma le robó las banderas a la Concertación hasta aguarle los colores del arcoíris y dejarla desnuda en sus vacías peleas internas. Pero también acorralaba a la derecha más regresiva, que alegaba traición desde las gargantas más sueltas de la UDI y los escritorios-trinchera de Libertad y Desarrollo, su principal centro de “pensamiento”.

Asomaba gateando -con más verborrea que sustancia, sabríamos después- un intento de “nueva derecha”, que se empinaba hasta cubrir con su sombra los discursos y la iconografía concertacionista e incluso de la izquierda. Jamás olvidaré la que para mí fue la imagen más demostrativa de este impulso: la conmemoración oficial de ese 18 de septiembre.

Estaba en Viña del Mar, junto a mi familia. Hacía zapping para esquivar la programación patrioter, pero me topé con una escena que no pude ignorar. Sonaba un tema de la nueva canción chilena, creo que de los Inti, aunque también podían haber sido Los Jaivas. Y sobre la fachada de La Moneda, proyectados con luces de todos los colores y

siguiendo con rigor los códigos de la estética muralista de los '60, los perfiles de Violeta, Víctor y Neruda. Los íconos culturales del pueblo subsumidos en la campaña de reinvencción de la derecha.

No era una imagen aislada ni tampoco improvisación. Era síntoma de algo mucho más grande, de una política.

Claro que en el fondo, más allá del ruido mediático, no todo era novedad. Muchos pusieron el grito en el cielo con esto de que la derecha recuperara el poder por las urnas después de medio siglo. En realidad no había por qué. Desde su comienzo y hasta la fecha, el de Piñera ha sido un gobierno de continuidad. Es que el ideario en el cual se inspiraron las políticas sociales que la Concertación aplicó durante la transición siempre ha sido de derecha.

La principal de ellas es la concepción de Estado subsidiario, que naturaliza la aplicación focalizada de las políticas sociales del Estado, negando la existencia de derechos sociales universales, es decir, acabando con los derechos mismos. La otra, en lo político-institucional, es la idea de “governabilidad”, concebida y pactada como castración de la facultad ciudadana de incidencia en la política, rasgo heredado de la dictadura.

La polémica entre el entonces ministro de Planificación Felipe Kast y el ex presidente Ricardo Lagos Escobar, respecto a quién aplicaba mejor la metodología para medir la pobreza y asignar los subsidios, graficó de forma espléndida ese fenómeno. ¡Había sido ideada en dictadura por el padre del ministro en cuestión, Miguel Kast! Parecía una pelea de hermanos tratando de llamar la atención de sus padres.

2010 fue, en resumen, un monólogo de la derecha. Pero también, el año en que se evidenció la total incapacidad de la Concertación para levantar una genuina oposición al proyecto histórico de la derecha.

La Concertación venía desconcertada desde antes de perder con Piñera. De hecho, por eso perdió. Y un año después de la derrota, seguía sin entenderlo. Pero el tema era más complejo: no encontraba, y sigue sin hacerlo, un proyecto que la identifique y diferencie de esta derecha envalentonada. Su avance desdibujó lo que solía definirla. La épica democracia versus dictadura ya no explicaba nada de lo que pasaba en Chile.

Pero encontrar alguna bandera tampoco le garantizaba relegitimación. La Concertación padecía entonces y padece todavía, de otra enfermedad, la de ignorar el por

qué de la lapidaria crítica que le hace la ciudadanía. La extrema despolitización inducida produjo una ciudadanía de baja intensidad, al decir de Tomás Moulian. Y eso terminó por pasarle la cuenta y demostrar que para esas condiciones había otro jugador mejor, la derecha, arquitecta original de esa cancha.

En agosto, Carlos Ruiz lo diría con lúcida sencillez: salió la copia y entró el original<sup>1</sup>.

### **Dios es facho... y brasileño**

Pero lo negativo en 2010 no vino sólo de la política. El 27 de febrero, a eso de las 3 de la madrugada, un devastador terremoto azotó la zona centro-sur del país. Fue el segundo más fuerte en la historia de Chile y el séptimo en la del planeta. Lo sucedió un maremoto, que arrasó pueblos completos, llevándose en su repliegue al océano cientos de vidas. Murieron 525 personas, 2 millones quedaron damnificadas y 500 mil hogares sufrieron daños severos.

Las consecuencias del terremoto dejaron al descubierto no sólo la impotencia de un Estado jibarizado, sino las negativas implicancias de la desarticulación social. La ausencia de sólidas y enraizadas organizaciones sociales puso serios obstáculos al ordenamiento racional y eficiente de la solidaridad que espontáneamente brotó entre la gente. “Primera vez que intercambio palabras con mis vecinos”, se escuchó decir a muchos en las ciudades afectadas.

Ante la catástrofe, a los estudiantes no nos quedó otra que postergar nuestra arremetida en el ámbito educacional para poner todas nuestras fuerzas y recursos al servicio de la reconstrucción. En ese instante nos lamentamos. Muchos pensaron que era un año perdido. Que la derecha aprovecharía su impulso y nuestra dedicación a la reconstrucción para empujar su agenda privatizadora.

Desde la FECH montamos en cuestión de un par de días una plataforma interdisciplinaria de voluntarios y uno de los centros de acopio más grandes de la Región Metropolitana. Estudiantes partieron a distintos puntos del país para remover escombros, evaluar infraestructuras, prestar atención médica, psicológica y veterinaria, fortalecer la asociatividad y la comunicación, entre muchas otras tareas.



El voluntariado es una actividad clave de la Federación. Era ya una de sus principales preocupaciones en los tiempos de su fundación en 1906 y lo siguió siendo durante todo el siglo pasado. Fue clave como colaboración para la obra social de la Unidad Popular y para la recuperación de la dignidad en el contexto de la dictadura.

Muchas de las fortalezas del levantamiento de 2011 provienen precisamente de nuestra experiencia con la reconstrucción el año anterior. Las federaciones estudiantiles universitarias llevaban años sumidas en el letargo, consumidas en la repetición de rituales que no conseguían combatir la apatía de las bases. La reactivación del voluntariado, ahora como preocupación permanente, comprometida con un desafío colosal, permitió ensayar formas de trabajo que revivieron la participación estudiantil.

La reconstrucción forzó a la FECH a organizar y desplegar creativamente a una nueva y amplia camada de estudiantes con grandes dosis de energía y voluntad. Afrontarla nos permitió ampliar su poder de convocatoria y reposicionarla como actor relevante ante la sociedad. El trabajo se extendió todo el año y ayudó a ampliar los márgenes del activo social más allá de "los convencidos", es decir, de los vinculados de manera identitaria u orgánica a alguna de las fórmulas de la alicaída izquierda.

La Moneda, por su parte, optó por hacer de las tareas de reconstrucción una oportunidad de negocio para el gran empresariado. Sólo una semana después del terremoto intentó asignar, sin licitación, 8 mil millones de pesos a las tres empresas más grandes del rubro de la construcción para que proveyeran a los municipios de insumos para la reconstrucción<sup>2</sup>. Las PYMES quedaron con cuello y la discusión sobre cuánto de "nueva" tenía esta derecha comenzó a cerrarse de forma prematura.

Rápidamente, la capacidad de las entrantes autoridades fue puesta en tela de juicio. No por la oposición, tampoco por un movimiento social, sino por los mismos damnificados. A medida que fueron pasando los meses, se colaron varios reclamos sociales. Al del trato digno a los damnificados se sumó con renovados bríos la cuestión mapuche, esta vez con una extensa huelga de hambre de cuatro comuneros entre julio y octubre. Y luego, con más ganas que fuerza, la demanda por desmercantilizar la educación.

Para todos estos reclamos Piñera tenía una respuesta estándar que repetía robóticamente, y mientras más insistía, menos creíble se hacía: "No es momento de *divisiones*, Chile debe enfrentar *unido* la catástrofe". Fue así como encontró eso que llaman

el *relato* para la primera mitad de su gobierno. En nombre de la *unidad nacional* ninguneó y desactivó los reclamos sociales e intentó acelerar el (fracasado) ensanchamiento de la alianza gobernante hacia el centro político.

Pero en estas tierras, el único lugar donde algo así como la unidad nacional es posible es en el fútbol. En todos los demás ámbitos de la vida común Chile es un país fracturado. Nos divide de por vida el barrio en que nacemos, el colegio en que estudiamos y el lugar donde trabajamos. Pero nuestra cultura está llena de llamados a la unidad y a la identificación con los valores y objetivos de la Nación, que no son otros que los valores y objetivos de los que van ganando. Y hay momentos en que esos llamados tienen cierta efectividad. Ahora no era el caso. Al acentuarse las desigualdades, los discursos unitarios flotan y se desvanecen en el aire.

Piñera tuvo varias oportunidades para ensayar este relato. La primera fue a propósito del terremoto, pero como optó por hacer de la reconstrucción una oportunidad de negocio salió para atrás. La segunda fue con la clasificación de Chile, después de 12 años, al Mundial de Sudáfrica. Pero duró poco. Jugamos como nunca en las eliminatorias, hicimos una digna primera ronda, pero en los octavos de final nos pillamos con Brasil y hasta allí nos duró la esperanza. No pudimos con la historia. Y la tercera, su clímax, con el rescate de los 33 mineros sepultados en la mina San José.

El accidente enlutó al país y el rescate concentró su atención durante un mes, desatando el júbilo cuando los trabajadores lograron salir vivos a la superficie. El Gobierno montó a partir de la desgracia una estrategia comunicacional para subir su popularidad en las encuestas. Y lo logró. Incluso se inventaron una nueva carta presidencial: el ministro de Minería –luego de Obras Públicas- Laurence Golborne, hasta entonces conocido sólo por esa gente que se levanta todos los días pensando en el progreso del país y el bienestar de sus trabajadores: los empresarios del *retail*.

Al finalizar el año, el Gobierno gozaba con su popularidad en las encuestas, pero entre la gente común y corriente se acumuló un desencanto. El mejor resumen de ese sentimiento no se lo escuché a un sociólogo, ni a un político. Se lo escuché a un amigo, una noche poco antes del año nuevo. Con unas copas de más (un decir, porque eran vasos, de plástico), me dijo con la cabeza gacha y los ojos perdidos en el suelo:

- *Hueón*, parece que Dios sí existe. Pero es facho... y brasileño.

## **La unidad nacional se desvanece en el aire**

El 2011 lo comencé, al igual que 2010, como vicepresidente de la FECH. Esta vez asumí la responsabilidad con algo de amargura, porque nos habían faltado sólo 79 votos, de un total de casi 9 mil, para ganar la presidencia. Desde fuera de la universidad no se le toma mucho el peso, pero para el colectivo estudiantil en el que participo, Izquierda Autónoma, era mucho lo que estaba en juego. En breve: la posibilidad de proyectar al país desde el descontento y la energía estudiantil una nueva identidad política transformadora.

En la escena nacional, en tanto, el circo de la "unidad nacional" comenzaba a decaer. Pero ya no sólo por su inconsistencia interna. Contra todo pronóstico, inesperados reclamos sociales provocaron los primeros tropiezos del arrogante gobierno de Piñera. El primero entre los más significativos vino de la región más austral de Chile y el mundo, Magallanes, y pasó a la historia como el "Segundo Puntarenazo". El primero había ocurrido en 1984, como protesta contra la dictadura de Pinochet.

Su origen tuvo lugar el 29 de diciembre del año anterior, cuando el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) decidió aumentar el precio del gas natural para la región. Los ministros de Energía y Minería, Ricardo Ranieri y Laurence Golborne, participaron de la impopular decisión. La ciudadanía reaccionó de inmediato. Multitudinarias manifestaciones rompieron la gélida rutina de la Patagonia y el 11 de enero la Asamblea Ciudadana de Magallanes decretó un paro indefinido de actividades.

Esa noche dos mujeres murieron atropelladas en medio de las protestas. Punta Arenas y Puerto Natales acogieron el llamado esa misma medianoche y al día siguiente el paro se extendió a los poblados fronterizos. El 14, La Moneda anunció la salida de Rainieri y su reemplazo por Golborne, ahora biministro. El sentido de la maniobra era evidente: regalarle al flamante presidenciable una nueva oportunidad para posar para la foto con la solución del conflicto y así escalar en las encuestas. Un día después cayó la Intendente de la región.

Pero el plan no salió como esperaban. El 17, tras dar una entrevista para una radio local en medio de las negociaciones con la Asamblea, Golborne fue acorralado por un centenar de manifestantes. El ex gerente de Cencosud tuvo que salir escoltado por Fuerzas

Especiales de Carabineros. No lo increpaban encapuchados, ni se veían banderas rojinegras. Sólo rostros de gente común y corriente iluminados por una rabia y frustración genuinas. Vecinos, trabajadores y dueñas de casa.

Al día siguiente La Moneda tuvo que ceder y firmar un acuerdo con la Asamblea. Así el paro de 7 días llegaba a su fin, pero su impacto político recién comenzaba. Las mismas encuestas que meses antes citaban para jactarse, ahora indicaban un declive en la popularidad del Gobierno, y lo que era más sorprendente, un significativo respaldo a la movilización social por fuera de los canales institucionales que habían fracasado en encauzar el conflicto.

Si en octubre de 2010, tras el rescate de los mineros, la encuesta Adimark le daba un 63 por ciento de aprobación, en enero de 2011 había caído al 41.

El segundo golpe de un sector movilizado de la ciudadanía al Gobierno se lo propinó el mundo del ambientalismo. ¿Su motivación? El rechazo del megaproyecto HidroAysén, hoy ya aprobado, que construirá una enorme represa para la generación de energía eléctrica en la austral región de Aysén.

Si bien la serie de masivas y espontáneas protestas que en todo el país se desarrollaron en mayo contra la hidroeléctrica no lograron doblarle la mano al Gobierno como el Puntarenazo, su impacto fue muy significativo. Ir a una marcha y ver a quienes acudían bastaba para notar que las motivaba algo mucho más amplio que la cuestión ambiental. Lo que indignaba no tenía que ver sólo ni principalmente con el atropello a la naturaleza, así en genérico, sino más bien con el hecho de que ese atropello tenía lugar por la subordinación cada vez más grotesca de la política al dinero.

Con todo, las protestas contra HidroAysén todavía no eran expresivas de fenómenos verdaderamente extendidos en la sociedad chilena. Dieron cuenta sí de una disposición distinta entre grupos de la sociedad civil que el decaimiento de la izquierda y la crisis de la Concertación tenía hasta entonces en la pasividad y la desazón, como el activismo verde, el activismo por las libertades individuales y públicas, los académicos progresistas y los estudiantes universitarios.

El Puntarenazo y las protestas contra HidroAysén lograron desgastar los intentos de ganar gobernabilidad por la vía de convocar a la "unidad nacional". Mientras tanto, el único

terreno donde alguna posibilidad de materialización tenía todavía, se transformó también en escenario de polémica: el fútbol.

Todo comenzó con las desconocidas de Marcelo Bielsa a Piñera. Lo dejó con la mano extendida en Pinto Durán, luego en la misma Moneda y en varias charlas dio a entender que no era un tipo de su agrado. No era una actitud azarosa, torpe o maleducada. Era, como sostuvo mi amigo Víctor, una defensa férrea contra la posibilidad de que Piñera utilizara políticamente su proceso a la cabeza de la Selección.

El loco tenía sus razones. Ambos encarnan paradigmas antagónicos. Bielsa cree que el dinero corrompe el deporte cuando es su motivación, que la deportividad, el juego mismo, debe imponerse al mercado. Sus desavenencias con Piñera se terminaron transformando, más allá de las intenciones de cada uno, en la representación de una pugna trágica. Y en la medida que Bielsa logró que Chile jugara más lindo que nunca, siempre al ataque, con tres adelante y sacándoles un increíble rendimiento a los jugadores, se transformó en héroe nacional.

La pugna recrudeció tras la eliminación de la Roja en Sudáfrica. La derrota causó una profunda desazón en el pueblo chileno. A muchos nos secuestró una tristeza durante semanas. Pero no hizo más que acrecentar el cariño popular hacia Bielsa. Todos sabíamos que el loco había dado lo mejor de sí, y que si lo seguía haciendo, la Roja se haría más poderosa todavía.

En medio de esa frustración se abrió el conflicto sobre la renovación de la directiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). La intención de su presidente, Harold Mayne-Nicholls, de regular el mercado del fútbol para introducirle más competitividad chocó con la intransigente defensa que el empresariado más retardatario del fútbol hizo de sus privilegios. No consiguió los votos para su reelección y fue sucedido por los nobles Jorge Segovia y luego Sergio Jadue, títeres tanto de las grandes concesionarias detrás del fútbol como de La Moneda.

En febrero de 2011 Bielsa renunció. Se negaba a trabajar bajo el mando de Jadue. Y la aparente intervención en su contra del Subsecretario de Deportes, accionista de Blanco y Negro S.A. y militante de la UDI Gabriel Ruiz-Tagle, lo ponía todo más difícil todavía. Es así que un año después del terremoto del 27F se desata una nueva tragedia nacional.

Cientos de miles pasan a engrosar las filas de los viudos de Bielsa y al mismo tiempo las de la oposición a su alter ego, Piñera.

Hasta marchas se convocaron en repudio al Gobierno y por la “repatriación” de Bielsa. La mayoría de los dirigentes de la izquierda estudiantil miraron en menos el problema y se negaron a que la FECH tomara postura y dijera algo. Era un asunto demasiado frívolo, decían. De todas formas fuimos varios los que acudimos a las espontáneas convocatorias bielsistas.

Así, en cosa de unas cuantas semanas, la clase dirigente, personificada toda ella en Piñera, quedó como responsable ante el país de una inminente catástrofe ambiental, del deterioro en la calidad de vida de zonas extremas y de la renuncia del tipo que mejor había hecho jugar al fútbol a nuestros seleccionados. Todo de un paraguazo.

Lo que hasta entonces era desencanto y frustración, sentimientos pasivos, tras un año negro, mutaba con inusitada rapidez en fastidio y rabia. La impunidad de ladrones y matones, de cínicos y aprovechadores, sufría un percance que la dejaba desnuda e indefensa. Así fue como el *relato* de la unidad nacional quedó como lo que era, un ridículo intento de unificar un país fracturado, y un año que anunciaba ser normal comenzó a dar un giro que terminaría siendo un vuelco.

La revuelta estudiantil, en tanto, comenzaba a dar sus primeros latidos en universidades y liceos. Las primeras contracciones no tardarían en hacerse sentir. En los lugares más impensados, como si intentara burlar su aborto a manos de las fuerzas que por tanto tiempo frustraron su nacimiento, se agitaba un profundo descontento ante la que para nuestra generación era la madre de todos los embustes: una educación cara, mala y desigual.

Pero no comenzamos con el pie derecho.

### **El primer revés**

Enero de 2011. Al Congreso sólo te dejan entrar si vas con pantalones largos. Me enteré recién en la puerta, cuando el carabinero apostado en el primer control nos detuvo a dos de una fila de diez. Como no nos explicó por qué no podíamos ingresar, sólo nos quedó intentar adivinarlo.

Con el otro tipo rechazado no teníamos nada en común. Él no formaba parte del grupo de dirigentes de la Confech en el que venía yo. Era un joven evangélico, que visitaba el Congreso junto a otros activistas de su credo para manifestar su rechazo al proyecto de ley que buscaba legalizar las uniones de hecho entre homosexuales. Nos miramos, y claro, la razón estaba a la vista: los dos andábamos con *shorts*.

Nataly, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, se dio cuenta del inconveniente antes que yo, y en un abrir y cerrar de ojos le ordenó a nuestro compañero Luciano que trajera un pantalón. Llegó a la media hora, con un pedazo de trapo arrugado y maloliente. Se disculpó por el retraso y el estado de la prenda, alegando que tuvo que sacarla de la ropa sucia. A juzgar por el olor, debió haber llevado allí semanas.

Logré entrar, me encontré con los demás dirigentes y nos dirigimos a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Íbamos a exponer las razones de nuestro rechazo al proyecto de Ley para la Calidad y Equidad de la Educación, enviado el mes anterior por el Ejecutivo a través de su entonces flamante ministro de Educación, Joaquín Lavín.

El edificio del Congreso Nacional, como casi todo lo hecho en la década de los '80, es horrible. Entonces la arquitectura se tenía tan en consideración como la democracia y los derechos humanos. En rigor, su construcción comenzó a fines de 1988, en la transición. Pero el dato no le suma puntos al edificio; se los quita a la democracia.

Es enorme pero no tiene diálogo con su entorno. Por el contrario, lo interrumpe con torpeza. Como un gran balbuceo sin importancia. Como un bulto gigantesco y sin carácter. La displicencia de sus formas y colores, su falta de personalidad, parece decirnos que lo que allí sucede da lo mismo. Y tal cual, más o menos así ha sido desde que se levantó. Quizás en ello resida su lado bueno. Es un edificio honesto.

Su interior comunica algo parecido, aunque trata de aparentar lo contrario. Mucho mármol y madera. Amplitud y profundidad. Pero no funciona. La apariencia de baratija de su exterior lo inunda también por dentro.

Nos siguen un fotógrafo y un periodista del Congreso, ambos con cara de no querer estar ahí. Tampoco de querer estar en otro lado. Simplemente de no querer estar ahí. Y nos guía una asesora de la comisión. Habla sobre el estado de la discusión en la instancia, pero en realidad nadie le presta mucha atención.

Recién cuando nos sentamos puedo concentrarme en el tema que nos trae al Parlamento. Venimos a argumentar por qué el proyecto de ley estrella de Lavín no sólo no aborda el problema de la calidad de la educación general sino que lo profundiza.

El proyecto consiste en tímidos incrementos de la subvención escolar, incentivos a la competencia entre docentes y establecimientos, mayores atribuciones administrativas para los sostenedores (facilidades para despedir profesores) y un sistema de premios y castigos para los docentes, supuestamente para promover un mayor compromiso con la enseñanza.

Pocos meses antes Lavín había inaugurado los semáforos, mecanismo mediante el cual se le asigna a cada colegio un color según el rendimiento de sus estudiantes en la prueba del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE). Y luego intentó reducir las horas de Historia y Ciencias Sociales para la educación básica y media. El Gobierno catalogó el paquete de medidas como “la mayor reforma educacional realizada en democracia”. El ministro llegó incluso a calificarla de “auténtica revolución educativa”.

Antes de nosotros expone Juan Eduardo García-Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. El caballero había presidido el Consejo Asesor Presidencial de Bachelet, creado como respuesta a la “revolución pingüina” de 2006. Lo terminó abandonando al cabo de un año de trabajo, con duras críticas al ninguneo de sus conclusiones. García-Huidobro nunca ha sido un tipo de izquierda, vale precisar. Ha diseñado muchas de las políticas de la propia Concertación.

Con ritmo pausado y tono de experimentado profesor, empuña una simple presentación en *powerpoint*. Fondo de un color, letra Arial grande, sin efectos. Su contenido, en cambio, es contundente.

- El proyecto no aborda el problema de fondo, a saber, el estado de la educación pública municipalizada, el hecho de que hayan escuelas para ricos y escuelas para pobres.

Los diputados le hacen algunas preguntas, la mayoría para que repita cosas que ya dijo. Responde seguro. Unos mueven sus cabezas de arriba hacia abajo, otros hacia los lados. Ninguno con mucha convicción. Nadie le rebate. Lo despiden y nos invitan a presentarnos.

Somos cuatro. Por la FEUC: Giorgio Jackson, presidente, y Pedro Glatz, segundo vicepresidente. Y por la FECH, Camila Vallejo, presidenta, y yo, vice. Nos hemos repartido



los contenidos de la exposición, y sobre todo, los roles y tonos. Giorgio y Pedro serán los más duros, de manera que se entienda que el rechazo de la Confech al proyecto es tan transversal que incluye a su sector más moderado. Camila y yo nos encargaremos de ir punto por punto rebatiendo el texto.

Nuestras expectativas son simples. No esperamos convencer a los diputados. No somos ingenuos, sabemos que es imposible. Vamos con la tarea de tensionar a los parlamentarios de oposición para alargar lo más posible la discusión en la Cámara y así entrapar la tramitación del proyecto hasta que pasen las vacaciones de verano. La idea es evitar un acuerdo por fuera de la única cancha en la que podemos jugar: el debate público y la movilización social. En ello reside nuestra fuerza, recién ahí nuestros argumentos comienzan a valer.

Los diputados están aburridos. Comienzan las preguntas inútiles, para quebrar el hielo. Parte Gustavo Hasbún, de la UDI, preguntándonos qué estudiamos. Sabía que Hasbún, al igual que yo, había estudiado periodismo. Pensé decirle “comunicación social”, para hacerle el quite al comentario obvio que se venía, pero lo deseché de inmediato al sospechar que podía alargar más el innecesario diálogo.

- Periodismo -respondí comiéndome las vocales, para pasar rápido a lo que nos convocaba.

- Ah, mira tú, yo también –contestó de inmediato-. Está difícil la pega... Pero igual es entretenida, me han contado. ¡Mira cómo la pasan en la farándula! ¿Tú vas por ese lado, cierto? Jajaja.

Nuestras expectativas, que ya eran bajas, bajaron aún más. De todas formas el resultado se vería unas semanas más tarde, cuando el proyecto fuera votado en la sala. En ese punto nos contentábamos con poder exponer y sostener una discusión racional.

La presidenta de la Comisión, María José Hoffmann, también de la UDI y más conocida como “Pepa”, prende su micrófono para reiniciar la sesión. El secretario de la comisión la presenta con solemnidad.

- Ay, diputado, -lanza Pepa con una risa nerviosa- no me mire así. Yo sé muy bien que lo hace para ponerme nerviosa, y usted sabe que lo logra.

Se refiere al entonces diputado del Partido Socialista, Sergio Aguiló, que sonrío con travesura al otro lado del mesón. No puedo sacarme de la cabeza la idea de que haber

entrado con *shorts*, chalas, sudadera y *jockey* sería lo de menos. Por el contrario, me encontraría más ad hoc al ambiente. Me preguntaba, de hecho, cómo era que a uno se lo prohibieran pero Hasbún fuera diputado.

De ahí en adelante nuestra exposición fluyó con normalidad. Los honorables escucharon con atención. Al terminar, los de oposición nos bañaron en elogios que sabíamos de utilería, mientras que los oficialistas sacaron su batería de contra-argumentos para defender el proyecto del Gobierno.

La primera en disparar fue Hoffmann. Según la Pepa, al Gobierno lo movían puras “buenas intenciones”, en particular, la de entregar una mejor educación a todos los niños de Chile. No correspondía que fuéramos tan duros, “¿o acaso no quieren una mejor educación para los niños de este país?”, remató con contundencia.

La sucedió su correligionario José Antonio Kast. Su pinta de alemán y actitud desconfiada inspiran miedo. Reconozco que al mirarlo se me vinieron a la mente, primero, un oficial de las SS, luego, un reptil, y después, las dos al mismo tiempo. Nos dijo con voz pausada pero firme, escogiendo muy bien sus palabras, que nuestra visión de la educación era “ideológica” y que nos inspirábamos en “un modelo pasado de moda”. No se refirió por supuesto a los reparos que le hicimos al proyecto y sus consecuencias; su impacto regresivo en el rendimiento escolar, la precarización del trabajo docente y el abandono de la educación pública lo tenían sin cuidado. Nuestros argumentos eran “ideológicos y anticuados”.

Volvimos a Santiago con la sensación de haber perdido el tiempo.

La votación por suerte se aplazó, pero un grupo transversal de parlamentarios concertacionistas, encabezados por el presidente de la DC Ignacio Walker, impulsó una propuesta de acuerdo con el Gobierno que permitió que el 19 de abril la Ley de Calidad y Equidad para la Educación fuera votada y aprobada en la sala de la Cámara. Lo mismo había ocurrido ya en el Senado.

## CAPÍTULO II

### Raíces del descontento

#### Contra los autocomplacientes

Hay algo en las protestas que han sacudido al país durante el gobierno de Piñera que, aunque encabezado por los estudiantes, parece extenderse mucho más allá en la sociedad y provenir de mucho antes. Un malestar que por mudo parecía ausente, pero estaba allí, rebasando el problema de los jóvenes con la educación para abarcar diversas dimensiones del orden económico, político y cultural vigente.

Desde todas las veredas se reconoce, de buena o mala gana, que la irrupción de dicho descontento marcó un punto de inflexión en nuestra historia reciente. Pero allí donde se llega a acuerdo, de inmediato se diverge. Es que sobre las causas del malestar no hay acuerdo. Más bien, convoca lo contrario; una enconada disputa por ponerle el cascabel al gato.

La batalla comenzó y litros de tinta se han vertido en libros, editoriales, columnas de opinión y discursos políticos para ganarla. Es que no es una discusión trivial. Todo diagnóstico sobre el estado de salud de nuestra sociedad y su educación lleva consigo, de modo más o menos explícito, un conjunto de valoraciones y propuestas para su tratamiento, y por lo tanto, una idea sobre su estado de salud *ideal*. Es una discusión, aunque no lo parezca, sobre la sociedad que queremos.

El descontento que está en la base de la revuelta estudiantil lleva años germinando en un Chile marcado por la convergencia de dos procesos. Por un lado, el agotamiento de los términos e instrumentos del equilibrio político de la transición y la consolidación de su incapacidad de procesar demandas sociales; y por el otro, la maduración de las transformaciones económicas y sociales introducidas por la dictadura, al amparo de un avanzado “capitalismo de servicio público”<sup>3</sup>.

El principal rasgo de este tipo de capitalismo consolidado en nuestras tierras tiene que ver con la privatización de ámbitos que en pocos lugares del mundo llevan el signo del

dinero; la educación, la salud, las pensiones, la vivienda social, entre otras. De allí la incertidumbre que inunda nuestras vidas. Tenemos miedo a envejecer, porque las pensiones no alcanzan ni para lo básico; miedo a tener hijos, porque educarlos nos arrojará por debajo de la línea de la pobreza; y hasta miedo a enfermarnos, porque tratarse cuesta el trabajo de años.

Pero las elites del país tienen otra opinión. Para ellas, las protestas estudiantiles son síntomas de que Chile avanza raudo hacia el desarrollo. Esta versión descansa en el divulgado mito según el cual nuestro país es cuna de un neoliberalismo pujante y exitoso. El malestar y su correlato en variopintas movilizaciones sociales sería la expresión de que Chile superó el umbral de la pobreza y que al hacerlo se ha vuelto un país más exigente. Aquí se inscriben las tesis de los actores dominantes de la política nacional, tanto de la derecha gobernante como de la encubierta en la Concertación, así como de los círculos de tecnócratas y opinólogos que las circundan.

Uno de sus más entusiastas exponentes ha sido Eugenio Tironi, lobista de los grandes grupos económicos e ideólogo del “partido transversal” de la Concertación. En junio de 2011, en medio de la revuelta, Tironi se preguntaba en las páginas editoriales de El Mercurio por qué hay protestas si la economía y el empleo crecen; por qué se dice no al lucro si se viene de elegir a un conspicuo representante del mismo como Presidente; por qué se rechaza HidroAysén si disminuirá el costo de la energía...

- ¿Por qué ahora se cuestiona el "modelo", en circunstancias de que nos ha hecho más prósperos que lo que jamás imaginamos?<sup>4</sup>

El ex MAPU afirma su argumento en la idea de la “enfermedad holandesa”, lugar común según el cual “cruzado cierto umbral, el miedo a la pobreza o a la escasez es sustituido por el miedo al sinsentido, la obesidad se vuelve más problemática que la desnutrición, y las demandas de la clase media opacan a las de los pobres”<sup>5</sup>. Los jóvenes, continúa Tironi, nos rebelamos contra un “relato” que “fue el de nuestros padres”, pero que no nos hace *sentido*. Chile sufre, concluye, “la enfermedad 15M”, porque superamos el umbral de los 15 mil dólares per cápita. Remata afirmando que lo más parecido a las recientes revueltas estudiantiles es el movimiento *hippie*.

Esta opinión no es sólo de Tironi, es del conjunto de las elites políticas y económicas del país. La suya simplemente es una de las versiones más depuradas y difundidas.

Como generación tenemos la responsabilidad de discutir estas tesis. Necesitamos desenredar la madeja de factores que contribuyeron a la gestación de este fenómeno, con una mirada que trascienda tanto el exitismo forzado de aquellas interpretaciones que echan tierra sobre el problema para que todo siga igual, como el cortoplacismo de otras que sugieren que todo cambió de un porrazo, por una suerte de místico cambio de época.

El problema con esas lecturas no es trivial. No lo es porque lo que hacen, sin decirlo, es diluir en entelequias las responsabilidades políticas, permitiendo que los responsables de las mezquindades de la transición se laven las manos. Y no es que criticarlos sea entretenido. Es que no se podrá abrir un nuevo ciclo político sin una revisión profunda y sincera de lo hecho en Chile todos estos años.

### **Ricos, la alegría ya vino**

Es cierto que el cuento de la excepcionalidad chilena en el que se afirman las opiniones autocomplacientes no es nuevo. Las elites lo han contado en muchos momentos de nuestra historia, con distintos fines pero siempre con la misma falta de creatividad. La fabricación de la imagen de Chile como un país pujante y exitoso, a prueba de balas, forma parte de un proceso que Tomás Moulian describió muy bien en 1997, en ese espléndido libro que es “Chile actual. Anatomía de un mito”.

En el Chile de la transición, plantea Moulian, tuvo lugar una operación de *blanqueo* para borrar la autoría militar del modelo de sociedad vigente y su imposición sangrienta, y luego permitir la aplicación del *transformismo*, entendido como el proceso iniciado en dictadura para “permitir la continuidad de sus estructuras básicas bajo otros ropajes políticos, las vestimentas democráticas”<sup>6</sup>. Esto requirió la elaboración de un mito, que convocara al desembarco del capital extranjero en el país y hacia dentro generara identificación popular con los propósitos de la nueva clase dirigente.

A continuación, Moulian se preguntaba si acaso la confrontación entre lo que se dice que somos, el mito, y nuestra experiencia cotidiana produciría el efecto contrario: una

recuperación del espíritu crítico. En esos años, fines de la insustancial década de los '90, la estridencia del triunfalismo era tan ensordecedora que la pregunta quedó sin responder. Pero el quiebre divisado por Moulian tenía que llegar en algún momento. El mito estaba montado sobre demasiadas mentiras, o más bien, verdades sentidas como tales por cada vez menos chilenos.

La ruptura entre relato oficial y experiencia social es lo que se manifiesta de modo traumático, como una fractura expuesta, en 2011. El crack del mito.

Tiene lugar así porque durante mucho tiempo se hizo de todo para contenerla. El mito funcionó como una camisa de fuerza, como una negación obsesiva de las contradicciones del nuevo Chile. Las tenazas del orden autoritario y antipopular heredado de la dictadura se activaron cada vez que una forma de protesta social quiso proyectarse a la política para exigir reformas. Así, bajo la aparente calma de la superficie, se acumuló una frustración que horadó la relación entre la sociedad civil y la política, las instituciones y los valores propios del pacto de la transición.

Uno de los datos más citados por la propia elite política para extender el mito y presentar la movilización estudiantil como ejemplo de que la “clase media” reclama “de llena” y hacer como que en Chile todo anda bien, es que nuestro Producto Interno Bruto (PIB) per cápita - indicador de la riqueza acumulada en el país- alcanzó en 2011 los US\$ 16.172, ubicándose en el puesto 56 de una lista de 181 países y siendo superado en América Latina sólo levemente por Argentina. El dato fue citado tanto por el Gobierno de Piñera como por personeros de la Concertación cuando fueron señalados por el movimiento estudiantil como corresponsables de la crisis. El primero en ondear esta bandera, de hecho, fue el ya mencionado Tironi.

Si leemos el PIB como nos lo proponen nuestros gobernantes, significa un ingreso por hogar de 32 millones de pesos al año, algo así como 2,7 millones mensuales. Lo que se guardan al celebrar esta cifra es que en 9 de cada 10 hogares chilenos en realidad “las personas viven con la mitad o menos del PIB per cápita promedio que el FMI calcula para Chile”. Y que en 6 de cada 10 “las personas viven con menos de US\$3.500 al año, lo que equivale al PIB per cápita de países como Nicaragua, Ghana o Irak”<sup>7</sup>. O sea, la razón de que tengamos un PIB por persona tan alto es, paradójicamente, nuestra desigualdad.

Ahora bien, no es siquiera el 20 por ciento más rico de la población el segmento que concentra los ingresos más altos. El quinto quintil, para ponerlo en el lenguaje de nuestras políticas sociales, es muy heterogéneo. A él pertenecen hogares donde el ingreso mínimo por persona es \$268 mil y el máximo casi \$15 millones al mes. Caben allí tanto una pareja de jubilados, como un esforzado estudiante-trabajador o una típica familia con ingresos medios y dos hijos en la universidad. En realidad, es recién a partir del 5 por ciento más rico del país donde la curva de ingresos se dispara a niveles realmente más altos que los del resto de la sociedad.

Este escandaloso nivel de concentración de la riqueza no es un fenómeno reciente, cuya responsabilidad recaiga únicamente sobre la actual administración de gobierno. Se trata de una tendencia que inauguró el autoritarismo militar y se proyectó al periodo civil. Si en 1990 el 5 por ciento más rico ganaba 130 veces más que el 5 más pobre, en 2003 la distancia aumentó a 209 veces.

Bajo los gobiernos de la Concertación se puede decir, sin recurrir a juicio de valor alguno, que la brecha entre ricos y pobres se duplicó. Chile es hoy un país más desigual que cuando gobernaba Pinochet. La etapa post-dictatorial devino un verdadero paraíso para la elite económica. Cuesta imaginar que quepa otro sentimiento que no sea la desilusión en el corazón de esa gran cantidad de chilenos que queriendo más igualdad y democracia confiaron todos estos años en la coalición del arcoíris.

### **Tiempos de incertidumbre**

Del lado de la mayoría, en tanto, las cosas no han ido tan bien. Si la vida arriba de la pirámide destaca por la seguridad que genera su creciente enriquecimiento y separación con la parte de abajo, en esta última la vida ha estado marcada por la inestabilidad y la incertidumbre. La negación de derechos y su reemplazo por políticas sociales focalizadas, sumado a la mayor flexibilidad y ausencia de regulaciones en el empleo, arrojan a la gran mayoría de chilenos a una vida de perpetuo riesgo.

Una certera caracterización de esta realidad ofrece el trabajo “Panorama social de Chile en el Bicentenario”, de los sociólogos Carlos Ruiz y Víctor Orellana, investigadores del Centro de Investigación en Estructura Social de la Universidad de Chile (CIES).

Es cierto que si bien supera las estimaciones oficiales, la pobreza estadística en Chile está por debajo de sus índices históricos y de la realidad regional. Los identificados como “pobres” por las fichas sociales –destacan Ruiz y Orellana- han pasado a engrosar las filas de los llamados sectores medios, que hoy representan el 49 por ciento de la población. Pero otro revelador dato que arroja la disección de la sociedad chilena en veintiles (20 partes iguales), es que la línea de la pobreza se duplica recién sobre la mitad de la población.

La propia OCDE, subrayan los investigadores, plantea que en Chile las categorías “pobreza” y “sectores medios” no son realidades nítidamente diferenciadas, pues los individuos de la última pueden fácilmente caer en la condición de la primera: “Lo que quizá resulte más sorprendente es que los estratos medios bajos chilenos sean los menos resistentes -léase capaces de mantener su posición social- de todos los países considerados, ya que son los que más cerca se encuentran del umbral que los separa de los desfavorecidos”<sup>8</sup>.

El mismo estudio señala que los estratos medios “lo que abonan en impuestos es casi equivalente al gasto público que reciben. El decil medio de Chile satisface en promedio impuestos por un valor del 18.3% de su renta disponible y recibe prestaciones que representan un 20.6% (...) Como resultado de lo anterior, si la educación, la asistencia sanitaria y otros servicios públicos carecen de calidad, los estratos medios serán más propensos a considerarse perdedores en materia fiscal y menos proclives a contribuir al financiamiento del sector público. La percepción de una inadecuada calidad de los servicios públicos, tales como la educación o la asistencia sanitaria, induce a los estratos medios a buscar alternativas en el sector privado, aun cuando ese coste extraordinario implique una significativa presión adicional sobre los presupuestos familiares”<sup>9</sup>.

Pero entonces, ¿qué tienen de *medios* sectores que apenas sobrepasan la línea oficial de la pobreza y se ven forzados a acudir al mercado para encontrar solución a sus necesidades más básicas? Bastante poco. Lo real es que en Chile tiene lugar un fenómeno de creciente homogenización de las condiciones de vida de la gran mayoría combinado con una restricción de derechos sociales. No sólo dice poco la línea que separa a los pobres de los que supuestamente no lo son, lo peor es que encubre el desarrollo excluyente y desigual que venimos teniendo como país en las últimas décadas.



La estrategia neoliberal que ha adoptado el capitalismo chileno ha modificado de manera muy significativa la estructura social del país y el mundo del trabajo. Y una de las principales ideas sobre las cuales ha afirmado su legitimidad es en que supuestamente ha hecho de Chile un país de “emprendedores”. Se trata de una extensión del mito meritocrático según el cual el país ofrece enormes oportunidades de desarrollo a quienes con audacia y creatividad se lanzan a la creación de empresas independientes y la generación de empleo.

Pero la verdad es que los sectores medios –hoy la categoría social de mayor importancia relativa en la sociedad- son principalmente asalariados, no independientes. Además, la población contratada por Pymes ha disminuido, no aumentado. Ruiz y Orellana descubren que las encuestas CASEN indican que entre 1992 y 2006 el empleo en unidades productivas pequeñas, de 2 a 9 personas, bajó en 4 puntos porcentuales en promedio en la participación total, mientras que lo mismo hizo el trabajo por cuenta propia.

Pero los cambios en la fisonomía del trabajo no se reducen al debilitamiento del trabajo independiente, también se torna dudosa la condición dependiente del trabajo asalariado. En lugar de ser estable, estar normado por derechos y articulado en sindicatos, el empleo de los nuevos asalariados es un lugar con regulaciones débiles, relaciones flexibles y difusamente separado del tiempo propio de la vida privada.

Son las consecuencias de la tercerización de la economía chilena. Entre 1971 y 2009 el peso de la clase obrera de la industria y la construcción se redujo en más de la mitad de su peso. La clase obrera del comercio y los servicios, en tanto, en el mismo periodo de tiempo duplicó su participación en la población económicamente activa<sup>10</sup>. ¿Por qué es relevante traer a colación estos datos? Porque indican que son cada vez más los chilenos que con el crecimiento de estas modalidades de empleo experimenta una relación entre el trabajo y la vida privada marcada por la superposición de ambas esferas.

El resultado es que la lógica tradicional del trabajo se desarma. El tiempo de trabajo invade el tiempo del ocio. Lo coloniza y se instala. La separación entre vida privada y trabajo se vuelve así cada vez más difusa, por no decir irreconocible. Y la posibilidad de organizar armónicamente nuestra vida familiar, personal y laboral se desvanece. Vivimos, incluso cuando creemos descansar o recrearnos, en función de mantenernos productivos, en continuo estado de alerta.

Unas personas nacen para ganar y otras para perder, y parece haber una relación directamente proporcional entre el éxito de las primeras y el fracaso de las segundas. Lo que el mito encubre es una escandalosa desigualdad y una creciente inestabilidad ante el futuro de cada vez más chilenos, arrojados a entenderse con el mercado para sortear su presente y proyectar su futuro.

Si las explicaciones de los Tironi y demás intelectuales de la corte neoliberal sobre por qué llegamos hasta acá parecen tan débiles a la luz de las condiciones de vida del nuevo Chile, es porque en realidad no son explicaciones, sino excusas y sofisticadas evasiones. Y si parecen tan arrogantes es porque se amparan en la pretendida superioridad de su condición de expertos, descontaminada de cualquier tipo de interés, inspirada únicamente en una verdad incontestable.

Pero no se pueden desconocer las consecuencias del neoliberalismo chileno: una incesante concentración de la riqueza que produce inéditos niveles de desigualdad; una mercantilización de derechos que condena a las mayorías a la exclusión y la incertidumbre; y la restricción de la política a los intereses del empresariado y sus aparatos, condición que la vuelve incapaz de acoger las demandas del resto de la sociedad.

La vía chilena al “desarrollo”, en lugar de traer alegría y equidad como prometieron, devino pantano de vértigos ante la incertidumbre de un futuro colonizado por el dinero y de ahogo ante la arremetida de condiciones cada vez más competitivas para alcanzar no el lujo sino lo básico. Un malestar, en definitiva, con la pérdida de control y soberanía sobre nuestro futuro.

Razones para evadir y menospreciar con arrogancia esta realidad, por lo tanto, tienen. El exitismo de los apologistas del pacto de la transición se nota forzado porque es su propia vigencia y autoridad, su poder, lo que tambalea. Lo más curioso, sin embargo, no está en lo hasta aquí dicho. Sino en el hecho de que el mito se debilitara por el flanco menos previsto y su aspecto más seductor: la promesa educativa.

## **CAPÍTULO III**

### **Un primaveral otoño**

#### **El ejemplo centralino**

En lo primero que la revuelta estudiantil de 2011 se distingue de sus antecesoras, es en lo ancho de las espaldas sociales del conflicto que la animó. La clave de su amplitud y profundo impacto político fue básicamente la combinación entre lo viejo y lo nuevo, la sinergia entre las banderas del sector estudiantil tradicional de la educación superior – perteneciente a las universidades del Consejo de Rectores CRUCH- y las experiencias y demandas del sector nuevo –asociado a las instituciones creadas con posterioridad al año 1980. No sólo porque la matrícula de este último supera con creces la del primero (los estudiantes de universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales son casi el 70 por ciento de la matrícula de educación superior), sino sobre todo porque pese a estar más desorganizado, sus problemas y anhelos son más representativos de los de la sociedad chilena actual.

Aún cuando la conducción y dirigencias más visibles del proceso provenían –y lo seguirán haciendo por un buen rato- de universidades tradicionales, el rasgo distintivo de 2011 es la aparición en escena de ese enorme contingente de jóvenes cuyas condiciones de estudio son distintas a las de un estudiante de universidad pública o privada tradicional con aportes estatales. Sufren de groseros niveles de endeudamiento, reciben una educación de muy mala calidad y experimentan día a día un autoritarismo que violenta sus libertades y derechos más básicos.

Son precisamente ellos los que pondrán el problema del lucro en el centro del debate, instalándolo como la causa fundamental del malestar con la educación. Al hacerlo, no sólo expresaban un hartazgo con sus condiciones de estudio; apuntaron “sin querer queriendo” al problema de la existencia de nichos de acumulación sostenida con subvenciones del Estado. Es decir, a la existencia de negocios privados a costa del despojo de nuestros derechos, con la venia del sistema político. Así, la consigna “no al lucro”

terminó diciendo mucho más: no al negociado con los derechos y no a la colusión entre política y negocios.

El primer paso hacia la aparición en escena de los problemas reinantes en el sector nuevo de la educación superior lo constituye el conflicto de la Universidad Central. Si bien no consiguió mucho protagonismo mediático, la movilización de los estudiantes centralinos fue vanguardia al apuntar al que más tarde sería el blanco primordial de todo el movimiento: la colusión institucionalizada entre mercaderes y políticos.

La cueca comenzó en el mes de marzo, cuando estudiantes y académicos de esta pequeña universidad privada, ubicada en el corazón de Santiago, decidieron oponerse frontalmente a la venta del 50 por ciento del patrimonio de la institución y el 45 de sus instalaciones a la sociedad de inversiones Norte-Sur, ligada a personeros de la Democracia Cristiana. La operación constituía en los hechos traspasar el control de la universidad desde los académicos, organizados en una asamblea soberana, a una entidad privada con reconocido afán de lucro.

El conflicto se desató cuando el entonces presidente de la Junta Directiva y accionista de Norte-Sur, Ernesto Livacic, modificó los estatutos de la universidad para posibilitar su venta, pasando a llevar las disposiciones internas, pero sobre todo, el espíritu fundante de la institución. La que era condición distintiva de la universidad, su dedicación exclusiva a educar, corría el peligro de desvanecerse. Y con ello, la razón por la cual miles de jóvenes y cientos de académicos habían optado por estudiar y trabajar en y para ella.

Liderados por su Federación, los estudiantes de la Central decidieron iniciar un paro indefinido el lunes 4 de abril.

- Que el señor Livacic y toda la junta directiva se vayan de la universidad, que se desvincule la sociedad Norte-Sur y que se restablezca la gobernabilidad y los principios fundadores de la Universidad Central"<sup>11</sup> -sentenció ese día a los medios de comunicación Adrián Prieto, presidente saliente de la Feucen.

Esa misma semana marcharon al Ministerio de Educación, exigiendo el pronunciamiento del ministro ante las irregularidades del proceso mediante el cual Livacic y la Junta pretendían vender parte de la infraestructura y el patrimonio de la universidad a Norte-Sur. La marcha de los cerca de 800 estudiantes centralinos apenas tuvo cobertura

mediática. Pero despertó la atención de los estudiantes de otras casas de estudio y significó, sin todavía saberlo sus protagonistas, el puntapié inicial de una escalada de hechos que pondrían el problema del lucro en el centro del debate estudiantil y luego de la sociedad en su conjunto.

Es que el de la Central no era un conflicto circunscrito a los muros de esa universidad. Y tanto sus estudiantes más conscientes como los propulsores de su venta lo sabían. No estaba en juego sólo el futuro de una institución y su comunidad. Lo que era un secreto a voces se tornaba un hecho público al traspasarse la propiedad de una corporación sin fines de lucro a una sociedad de inversiones con la venia del Estado. A saber: la existencia y expansión del lucro en las universidades al amparo de una institucionalidad que debía velar por prohibirlo.

No en balde la prepotencia de las autoridades de la Central y el silencio tanto de La Moneda como de la oposición. El Gobierno sabía que detener una operación de mercado de esa envergadura, aunque fuese por violar reglamentos internos, destaparía una olla de casos similares que demostrarían lo testimonial de la ley que prohíbe la finalidad de lucro en las universidades. Peor aún: demasiada atención sobre el caso de la Central desnudaría que la condición de posibilidad de dicho negociado era el involucramiento de la propia clase política.

Era también un proceso excepcional por el tipo de actor que involucraba. La participación de estudiantes de una institución privada, con cierta tradición organizativa pero todavía lejana a la presente en las universidades tradicionales, y el contenido político de sus demandas, marcaban una notable novedad. Significaba el despliegue de una fuerza que hasta el minuto sólo había tomado palco, pero que ahora podía configurar un escenario nunca antes visto.

Los estudiantes centralinos daban una batalla contra viento y marea, cercados por sus autoridades y la complicidad del mundo político. Pero esa dificultad, lejos de intimidarlos, los animó aún más. Tenían claro que la lucha centralina podía, pero sobre todo, *debía*, ser una experiencia referencial para los estudiantes de la educación superior chilena, sobre todo de aquellas instituciones en las que el lucro y el autoritarismo se vivían con más agresividad todavía.

Desde Izquierda Autónoma veíamos con especial atención el proceso que se estaba gestando en la Central. Pensábamos que la aparición en escena de los estudiantes del sector privado contenía los ingredientes necesarios para que las luchas estudiantiles experimentaran un avance cualitativo. Significaba ampliar la alianza social y golpear un nicho de negocios sostenidos con subvenciones del Estado.

Nos propusimos contribuir a la lucha estudiantil de la Central, ayudar a transformarla en un proceso referencial a nivel nacional y poner lo poco que teníamos a nuestro alcance -más allá de nuestra determinación- para convertirla en punta de lanza para hacer de la Confech un espacio unitario de representación estudiantil universitaria.

Del lado tradicional del movimiento la tarea no era fácil. A los estudiantes de las universidades privadas se les veía con desconfianza. Como si al involucrarnos con ellos estuviésemos “validando” la educación privada. Operaba también un violento elitismo, no reconocido. Hasta hace pocos años, muchos estudiantes de universidades tradicionales, cuando al marchar pasaban afuera de una privada, cantaban “300 puntos, 300 puntos, la la, la la, la, laaa”, mofándose del puntaje obtenido por sus alumnos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

El tema fue motivo de grandes discrepancias entre las fuerzas políticas y las propias federaciones. Entre las primeras, pocas tenían una posición definida. Entre las segundas, la mayoría optaba por separar aguas. En la FECH habíamos resuelto en 2010 darle a la Confech un carácter unitario. No sin desencuentros, autónomos –que lo hemos impulsado desde que nacimos, así como antes la SurDA-, comunistas, libertarios y colectivos varios de izquierda, confluimos en esa idea y la promovimos, pero en la práctica nadie trabajaba por hacerla realidad.

Mientras la burocracia del sector estudiantil tradicional se deshacía en insulsas discusiones, los centralinos decidieron llevar su lucha hasta las últimas consecuencias. Tras una semana de paro indefinido comenzaron las tomas, que entre desalojo y desalojo se extenderían hasta septiembre. La consigna que aglutinaba sus demandas se repetía en lienzos colgados en patios y facultades: “La Central no se vende”.

Se respiraba aire de unidad y el ajetreo copaba todos los espacios y horas del día. Ese clima, entonces limitado a los tres edificios de la Central que circundan el Parque Almagro, sería semanas más tarde el de casi todas las universidades del país.

## Primera escalada

El primer conflicto que preocupó a los estudiantes de la Universidad de Chile fueron las irregularidades y atrasos en la asignación de las ayudas complementarias de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Transcurrido ya casi un mes y medio de clases, las becas de alimentación y mantención todavía no llegaban. Lo harían en una fecha indeterminada, sin experimentar el reajuste pendiente desde 2007. A eso se sumaban cambios injustificados en las condiciones de postulación a otros beneficios, dejando a cerca de 20 mil estudiantes sin recursos para pagar el arancel de sus carreras.

Había que actuar. La derecha se había llenado la boca con el discurso de que llegaban al Estado a trabajar con “los mejores”, para administrar con una eficiencia jamás vista las instituciones públicas. Pero los cuadros profesionales provenientes de las empresas privadas sabían tanto sobre el aparato público como sobre la psicología de los manatíes.

El problema se discutió en la Confech pero su capacidad para actuar con dinamismo era todavía reducida. La determinación acerca de las acciones a seguir quedó en manos de los plenos de cada federación. ¡Hagamos una conferencia de prensa y saquemos un comunicado!, bramaron con audacia unos. ¡Solicitémosle una reunión a las autoridades y expongamos en ella nuestros puntos!, declamaron otros. ¡Y dónde está la unidad obrero-estudiantil!, se encargaron de advertir los trotskistas, poniéndole *play* al casete de sus consignas, que de tan predecibles se confunden con el ruido ambiente.

Los canales formales ya se habían agotado. Pero el tema tampoco ameritaba convertirse en el problema central. A su vez, recién iniciado el año, no había condiciones para convocar a una movilización masiva. Todos los caminos apuntaban a la necesidad de una acción directa, que no requiriera mucha tropa pero que permitiera hacer público el problema. Propusimos ocupar las oficinas de la Junaeb para presionar por la asignación de las becas pero sobre todo para denunciar la raíz del asunto: el encarecimiento y la precarización de la educación producto de su mercantilización, y la contradicción que ello significaba en circunstancias que el Gobierno había prometido que 2011 sería “el año de la educación superior”.

La acción se realizó el 14 de abril. Se sumaron estudiantes de varias universidades, en particular, del Pedagógico, preocupados por las irregularidades de la beca Vocación de Profesor. La cuidadosa planificación para realizar la ocupación terminó siendo más bien inútil, porque más allá de la reacción histérica de una secretaria, los guardias apenas opusieron resistencia y los funcionarios, de hecho, aprobaban la acción con guiños e indisimuladas sonrisas. En voz baja, para que no los escucharan sus jefes, nos animaban. “Muy bien chiquillos, adelante, están en su casa”, “hace rato había que hacer algo, miren que aquí pasan muchas cosas raras”. Hasta cafecito nos ofrecieron.

Idénticas acciones se realizaron esa semana en Valparaíso y otras ciudades del país. La Junaeb se pronunció, culpando al ministerio y éste, de vuelta, a la Junaeb. De ambas partes se manifestaron frente a las cámaras disposiciones favorables a atender el problema, pero se desvanecieron tan rápido como las cámaras se apagaron. Dos semanas después renunció María Teresa Ross, directora de la entidad. Fue el primero de los muchos tropiezos que el Gobierno tendría durante el año. Balance: positivo.

En medio de los primeros tropiezos del Gobierno y las escaramuzas estudiantiles convocamos como Confech a dos movilizaciones nacionales por la educación, la primera para el 28 de abril y la segunda para el 12 de mayo, con el objetivo de presionar al Gobierno de cara al anuncio presidencial del 21 de mayo. Su consigna, “Por la recuperación de la Educación Pública”, era algo más ambiciosa que las demandas concretas que se pudieron consensuar, pero señalaba un camino.

En Izquierda Autónoma apostábamos por levantar movilizaciones a nivel nacional, pero todavía no veíamos condiciones para que eso sucediera. Por eso apostamos también a sacar al ruedo del conflicto educacional a la rectoría y el estamento académico de la Universidad de Chile. De no fructificar una movilización nacional, pensábamos, al menos podíamos abrir un proceso interno. Por fortuna, nos equivocamos.

La gestión de Lavín como ministro de Educación no estaba siendo muy distinta a la que tuvo como alcalde de Las Condes y Santiago. Se basaba en el efectismo, en hacer como que solucionaba problemas sin solucionar nada. En adornar con grandilocuentes discursos anuncios miserables y coronarlos con su sonrisa de *boy scout* virgen. Como cuando mandó a lanzar agua desde avionetas sobre Santiago para descontaminarlo. O cuando levantó una



playa artificial en el Parque de los Reyes, frente al Mapocho, para que los pobres de su comuna pudieran veranear. O cuando construyó un “centro invernal” para que los niños que no pudieran ir a la nieve “se lancen con sacos y neumáticos”. Joaquín, el tipo del cambio que no cambiaba nada. El de la bondadosa sonrisa pinochetista.

Con el tiempo ganó experiencia. El componente ridículo de sus ideas tendió a disminuir, pero no su esencia.

En 2010 ya había anunciado la implementación de los famosos semáforos, para que los padres pudieran elegir el mejor colegio para sus hijos en función del color de cada establecimiento. Verdes los mejores, amarillos los mediocres y rojos los nefastos. Ahora decía estar implementando, no una reforma, sino una ¡revolución! educativa, al tiempo que insistía con que 2011 sería “el año de la educación superior”.

Los actores sociales de la educación le cobraron la palabra. Pero ésta, como la lluvia falsa de sus avionetas y la nieve a la altura de Cumming con Balmaceda, se deshizo sin mayor esfuerzo. La agenda ministerial de educación consistía en una profundización de las políticas neoliberales iniciadas en tiempos de Pinochet y continuadas por sus calcos concertacionistas. Ni siquiera corregía sus perversiones más injustificables, como el sobreendeudamiento o el radical abandono de la educación pública.

A pesar de que la mayoría de las universidades y liceos llevaban ya casi dos meses en clases y que el clima político comenzaba a crispase tras las protestas ocurridas en Magallanes, las primeras críticas a HidroAysén y los impopulares anuncios de Lavín en Educación, la convocatoria del 28 de abril resultó bastante pobre. Fuimos cerca de 9 mil los que marchamos desde Plaza Italia y avanzamos por Balmaceda y San Martín, para terminar en la Plaza Los Héroes.

El discurso de las vocerías se centró en denunciar los arbitrarios cambios en los criterios de postulación a las ayudas estudiantiles, la insuficiencia de sus montos y cobertura y la falta de transparencia del Mineduc a la hora de plantear su agenda para el año.

Tras la movilización, el debate al interior del movimiento se encendió. No tanto por la convocatoria, que todos sabíamos sería baja al ser la primera marcha del año, sino por el cómo continuar. ¿Estaba vigente aún el objetivo trazado desde la Confech en 2010, a saber: frenar la agenda privatizadora del Gobierno? ¿O debíamos apostar el 2011 a retomar la

ofensiva? Si optábamos por lo segundo, ¿qué significaba concretamente en términos de demandas, acciones y metas para el año?

La primera pregunta fue la más rápida en superarse. No, el objetivo de 2010 no seguía vigente. Primero, porque más que el resultado de una verdadera discusión al interior del movimiento, la hoja de ruta del año anterior se había impuesto por la vía de los hechos, gracias al efecto desmovilizador del terremoto y la baja participación. Además, nunca se frenó nada. Y segundo, porque el Gobierno no había comenzado con buen pie el año, la derecha no lograba cerrar filas tras Piñera y Lavín estaba siendo errático.

Ahora bien, determinar qué significaba pasar a la ofensiva fue un asunto harto más difícil. De hecho, nunca logramos llegar a síntesis. En la Confech fuimos incapaces de ponernos de acuerdo y desde muy temprano la conducción del movimiento fue desbordada por el inesperado despliegue de una fuerza social que puso horizontes mucho más amplios y ambiciosos que los que cualquier sector político o federación planteó durante la primera mitad del año.

Pero eso sucedería mucho más tarde.

Entre el 28 de abril y el 12 de mayo resolvimos pasar de la crítica a la agenda educacional del Gobierno al planteamiento de nuestras exigencias. El pliego de demandas era todavía débil y contradictorio. No estaba presente la demanda por acabar con el lucro, porque los secundarios todavía no lograban pararse ni menos los estudiantes de la superior privada. La gratuidad universal continuaba siendo una aspiración muy lejana. Se exigía gratuidad focalizada, para los tres primeros quintiles, a través de becas, y arancel diferenciado para los dos restantes.

Un ingrediente se agregaba para sumarnos fuerza: los rectores agrupados en el Consejo de Rectores (CRUCH) estaban muy enojados. Lavín había dado muchas señales de desidia ante sus preocupaciones y la agenda para educación superior avanzaba sin considerarlos. La respuesta de los rectores no se hizo esperar y aprovecharon la marcha del 28 para criticar duramente al Mineduc.

Esa misma jornada, durante la inauguración del año académico de la Universidad de Chile, el rector Víctor Pérez lanzó duras críticas al Gobierno. Denunció el lucrativo *lobby* con que muchas universidades privadas nuevas pretendían hacerse con recursos públicos “para hacer más rentable y sustentable su negocio” y cuestionó que el Gobierno haya

asegurado que 2011 sería el año de la reforma a la educación superior pero aún no se conocieran los cambios.

- Sólo cabe suponer, lamentablemente, que al parecer esta nueva política de gobierno se estaría elaborando a oscuras, entre cuatro paredes<sup>12</sup> - sentenció.

Los gestos de los rectores, aunque efímeros todavía, le dieron más peso a la movilización estudiantil.

Como si fuera poco, el 6 de mayo los funcionarios de la Junaeb manifestaron mediante una declaración pública que solidarizaban con las demandas estudiantiles, que no eran responsables de los problemas denunciados y que no serían “botín de guerra” de ningún gobierno de turno. Se declararon “en estado de alerta” y adhirieron a la movilización del 12 de mayo.

Al ninguneo hacia los rectores, Lavín sumó una nueva provocación tras la movilización del 28 de abril. Los estudiantes de la Universidad Central habían exigido a comienzos de dicho mes el pronunciamiento del Mineduc ante la irregularidad que constituía la venta de su universidad a Norte-Sur. Los centralinos interpellaron al ministro nuevamente tras la marcha. ¿La respuesta de Lavín? En la línea de todos los gobiernos anteriores: que el conflicto de la Central correspondía a “un problema entre privados”.

Los dichos crisparon más los ánimos de los estudiantes y la comunidad centralina, generando que más facultades se fueran a toma.

La del 12 de mayo, en cambio, fue una marcha más grande y de mayor impacto mediático. En Santiago logramos convocar a 15 mil personas, aunque nos hicieron marchar por la calle Curicó, que es como jugar a la pelota en el pasillo del departamento. Adhirieron, sin paralizar actividades, pero brindando su respaldo, el Colegio de Profesores, la ANEF y la CUT.

Su objetivo fue básicamente interpellar al Gobierno para que acogiera las demandas del movimiento en el discurso presidencial del 21 de mayo. Se resumían en tres puntos: aumento del gasto público en educación para ampliar la cobertura de las becas, la implementación de nuevos criterios de equidad en el acceso y la derogación de los decretos que prohíben la participación estudiantil en espacios directivos colegiados.

La marcha, aunque tímida en términos de convocatoria comparada con las que vendrían después, fue la primera en poner una agenda estudiantil sobre la mesa y en

interpelar a La Moneda por una respuesta. Sin embargo, marcó también la agudización de las diferencias al interior de la Confech. El petitorio no había emanado de un proceso organizado y nacional de deliberación, sino como producto del consenso entre un sector de la dirigencia, hecho que terminó agudizando la polémica sobre los términos y contenidos de lo que significaba pasar a la ofensiva.

Para unos significaba intensificar la presión al Gobierno, sin modificar sustantivamente el alcance de las demandas. Para la mayoría, entre la que nos encontrábamos los autónomos, pasar a la ofensiva implicaba no sólo tener una actitud afirmativa. Tenía que ver sobre todo con el contenido político de las demandas, tanto para darle más amplitud al conflicto como para posicionar las reformas realmente necesarias y no sólo las posibles en el actual encuadre de las políticas educativas.

Creíamos que ampliar la base social del movimiento pasaba principalmente por incluir y proyectar algunas demandas del estudiantado del sector privado, particularmente la que tenía que ver con la prohibición efectiva del lucro. A su vez, discrepábamos con proponer que el aumento del gasto público se destinara al financiamiento a la demanda. Primero, porque es un instrumento de política neoliberal responsable del aumento de la segregación. Y segundo, porque aun cuando se planteara destinarlo a universidades tradicionales, podía animar los planes que el gobierno tenía en carpeta para traspasar por esa vía recursos públicos al sistema privado.

La evaluación del 12 de mayo se realizó en la sesión de la Confech que se celebró dos días después en la Universidad Católica del Maule, sede Talca. En todo el país la jornada había sido un éxito, doblando como mínimo la convocatoria del 28 de abril. A su vez, varias universidades regionales comenzaban a “irse a toma” por agudos problemas internos, como la de La Serena, la sede de Los Ángeles de la Universidad de Concepción, la Arturo Prat tanto en Iquique como en Victoria y la de Magallanes. Se estaba ejerciendo la presión necesaria para que el 21 de mayo existiera atención sobre los anuncios para la educación. Resolvimos convocar, como es costumbre desde el año 2002, a una movilización en Valparaíso para ese día.

El discurso de Sebastián Piñera desde el Congreso Nacional el 21 de mayo fue un nuevo estímulo para la escalada de la movilización. El propio Gobierno había generado muchas

expectativas en torno a su programa educacional y la Confech, así como el CRUCH, había logrado posicionar con claridad sus demandas en las semanas anteriores.

Sin embargo, el mensaje presidencial estuvo lejos de satisfacer dichas expectativas. Piñera se limitó a celebrar las medidas ya implementadas, como la Agencia para la Calidad y la Superintendencia para la educación escolar, y prometer medidas insuficientes, como la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, y otras derechamente regresivas, como la transformación del Aporte Fiscal Indirecto en un subsidio portable por los estudiantes.

Evaluamos el discurso y la situación que se abría tras el 21 de mayo en una sesión extraordinaria de la Confech al día siguiente, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Sobre las rocas de la costa y con el Pacífico de fondo, discutimos hasta muy entrada la noche sobre las correcciones a nuestras demandas y discurso y los pasos a seguir. Aparecieron todo tipo de llamados. Más protagonismo para los reclamos de las universidades regionales y más precarizadas, cambios al petitorio para hacerlo más apropiable para los compañeros, defensas a ultranza de lo que se estaba haciendo y por una mayor politización del discurso.

Fue la primera Confech “en caliente” del año y se desarrolló con una dinámica que se repetiría en muchas ocasiones durante el resto de 2011. Desde la Arturo Prat y la UTEM se levantaban las mociones más voluntaristas y desde la USACH las más conservadoras. Al medio, las federaciones de las universidades de Concepción, Católica, de Valparaíso, de Chile y Católica de Valparaíso buscábamos la forma de hacer una síntesis.

Los autónomos teníamos una capacidad de acción muy reducida. Desde las federaciones en las que participábamos con responsabilidades de conducción, la Chile y la Católica de Valparaíso, llevamos algunas mociones: incorporar la prohibición del lucro en el petitorio, concentrar los dardos de la Confech en el ministro Lavín –debían aflorar las diferencias internas de la derecha que tantos costos le venían significando a Piñera- y forzar pronunciamientos más claros por parte de los rectores.

Recién a eso de las 10 de la noche pudimos hacer síntesis. Todas las federaciones y sectores políticos confluimos en la necesidad de iniciar un “proceso ascendente de movilizaciones”. Resolvimos convocar a una concentración frente al Mineduc en repudio a

los anuncios del Gobierno para el 26 de mayo, entregar una carta al Gobierno con nuestras demandas y exigir una respuesta en un plazo de seis días, condición que de no respetarse gatillaría la extensión indefinida del Paro Nacional por la Educación que habíamos convocado para el 1º de junio.

Por esos días la palabra “radicalización” estuvo en boca de todos, pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba el alcance que empezaban a tener las decisiones que tomábamos en esas inacabables y somníferas sesiones.

Esta vez al petitorio le agregamos tres demandas que se tornarían las más relevantes en cosa de semanas; el aumento del financiamiento público a las instituciones públicas y del CRUCH, quebrando así la lógica de concentrar los recursos en el subsidio a la demanda, el fin del endeudamiento de las familias y la prohibición efectiva del lucro.

Por la presión de algunas federaciones se acordó definir el plazo de respuesta exigido a Lavín como un “ultimátum”.

Lo de ultimátum sacó ronchas entre varios dirigentes que estimaban que una actitud muy confrontacional podía hacernos perder el respaldo social que veníamos acumulando, pero gatilló una serie de hechos que nos terminarían favoreciendo.

- El día primero de junio vamos a convocar a un paro nacional y si no hay respuesta lo vamos a extender de manera indefinida - señalaron los voceros tras dejar la carta y el petitorio en la oficina de partes del Mineduc.

Lavín venía de mal en peor a la cabeza del ministerio. El 24 de mayo protagonizó una situación que hundiría aún más su ya debilitada credibilidad. Esa noche el programa *Esto no tiene nombre* de TVN denunció irregularidades en la acreditación de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Consultado sobre qué cartas tomaría el Mineduc, Lavín no dudó en afirmar que haría “todo lo posible para que la UTEM no vuelva a ser acreditada”. La afirmación le salió cara, porque el reportaje era deficiente y la decisión le correspondía a la supuestamente independiente Comisión Nacional de Acreditación.

Tres días más tarde, un desconocido “referente estudiantil” salía a la luz pública con un discurso sospechosamente similar al del Gobierno en el portal electrónico de El Mercurio. Argumentaban que las instituciones privadas eran “los verdaderos agentes de movilidad social”<sup>13</sup> y abogaban por crear un fondo único de crédito universitario. Se

llamaban “Educación en acción” y nadie los conocía en sus respectivas universidades. Era un “palo blanco” del Mineduc.

### **La apatía, primera víctima del invierno**

El frío del invierno se adelantó cerca de un mes, pero no vino acompañado de lluvia sino del mucho menos agradable picor de los gases lacrimógenos. Desde los primeros días de mayo, y de manera creciente, se hizo habitual que al transitar por las calles céntricas de Santiago, Concepción o Valparaíso una picazón insoportable se apoderara de las narices, los ojos lagrimearan sin mediación de tristeza alguna y una sensación de amarga acidez se colara por las gargantas. Cuando las protestas reprimidas eran estudiantiles, la sensación se extendía desde el mediodía hasta entrada la noche. Cuando las motivaba el rechazo a HidroAysén, hasta la madrugada del día siguiente. Y así en promedio dos veces por semana.

La incomodidad de la gente con la represión y las arrogantes respuestas de las autoridades del Gobierno ante los reclamos estudiantiles y sociales se fueron acumulando como el cansancio con los residuos del gas lacrimógeno. De acuerdo a la serie de encuestas Adimark, durante febrero, marzo y abril el rechazo a la gestión de Sebastián Piñera bajó y se mantuvo estable en un 49 por ciento, hasta entonces el más alto durante su gobierno. La movilización estudiantil todavía no lo golpeaba de manera significativa, pero sí otros hechos como el Puntarenazo y las escandalosas renunciadas de la Intendenta del Biobío Jacqueline Van Rysselberghe y la ministra de Vivienda Magdalena Matte. Pero tras un mayo marcado por las protestas contra HidroAysén y las primeras marchas estudiantiles, la aprobación de Piñera bajó, al 36 por ciento.

No volvería a repuntar nunca más.

Algo de esto lograron percibir desde el Mineduc justo antes de que terminara el mes y, en un movimiento inesperado, sus autoridades convocaron a la Confech a dialogar antes de la marcha del 1º de junio. Lavín buscaba sacarse de encima el estigma de autoridad inflexible y dejar la pelota de nuestro lado, pensando que si accedíamos comenzaría la canalización institucional del conflicto y el retroceso de las movilizaciones, y que si

rechazábamos su invitación quedaríamos ante la opinión pública como intransigentes interesados únicamente en complicarle la marcha al Gobierno.

De nuestro lado, los sectores partidistas del movimiento estudiantil –que retrocedían en posiciones a medida que las demandas apuntaban a la raíz del problema educacional– intentaban con cierto apuro levantar una negociación para resolver y capitalizar el conflicto. El resto, sin todavía una estrategia alternativa clara, desconfiábamos de las instancias propuestas por el Mineduc y de la capacidad del movimiento para aprovecharlas a su favor.

Asistimos a la primera reunión con Lavín más por inercia que por una decisión políticamente tomada. El petitorio universitario adolecía de un serio déficit de legitimidad y apropiación en la base estudiantil, pero el ministerio tampoco contaba con el piso político suficiente para dar pasos decididos. Fue una reunión para los medios.

Muchas declaraciones de buenas intenciones por parte de Lavín y sus escuderos, el subsecretario Fernando Rojas, el jefe de la División de Educación Superior Juan José Ugarte y el asesor Alejandro San Francisco. Pero ningún pronunciamiento político o propuesta de trabajo. El ministro, sudoroso y haciendo gala de su adaladora y poco creíble forma de hablar –como si todos menos él fuesen niños–, estaba tanteando terreno.

La movilización, convocada con anterioridad al encuentro, se desarrolló con éxito el primer miércoles de junio. A ella adhirieron ya no sólo estudiantes sino también decanos y rectores de algunas universidades públicas. Alta figuración consiguieron Juan Manuel Zolezzi, rector de la USACH, y Aldo Valle, rector de la Valparaíso.

Ocurrió en medio de una creciente excitación estudiantil en varias universidades del país. Ya se encontraban en toma las universidades de Magallanes en Punta Arenas, de La Serena, la Arturo Prat en Iquique y Victoria, y la Federico Santa María en Concepción. Estaban en paro indefinido casi todas las carreras de la Chile, la de Valparaíso, la de Concepción y el Pedagógico. Y tras la marcha se fueron también a toma las universidades Católica de Valparaíso, de Playa Ancha y Valparaíso sede Santiago.

Decididos a enfrentar al Gobierno ya no sólo con movilizaciones aisladas sino en una verdadera protesta nacional, permanente y unitaria, los universitarios convertían sus lugares de estudio en alegres trincheras. Las motivaba mucho más que el petitorio hasta el minuto defendido por la Confecch. En ellas se comenzaban a izar las banderas de la gratuidad universal, la democratización y la prohibición del lucro, mezcladas con reclamos



de índole interna, como el congelamiento de aranceles o soluciones a la precaria infraestructura y calidad académica de las instituciones públicas.

La pluralidad de fines perseguidos es un rasgo muy propio de los movimientos estudiantiles. Esa dinámica permite que jóvenes con diversas motivaciones participen de un mismo movimiento, pasando de preocupaciones inmediatas e individuales a aspiraciones más colectivas y generales, por lo tanto, políticas. Allí donde se exige la condonación de las deudas o del pago de la matrícula, se puede también exigir la renuncia de un ministro o solidarizar con una causa extrauniversitaria. En 2011 esto comenzó a ocurrir con inusitada rapidez, haciendo de las primeras semanas de junio un torbellino que crecía y aglutinaba demandas de distinta naturaleza y radicalidad.

Lo primero en propiciar una sinergia entre la franja políticamente activa del movimiento y la gran mayoría no fueron las demandas sino la acción. Las reivindicaciones se modificaban semana tras semana, sesión tras sesión de la plenaria de la Confech. No concitaban todavía unidad sino, por el contrario, divergencias y discusión. La unidad se empezó a fraguar en la acción, cada día más común en su diversidad de formas, intensidad y fines. Para generar un sentido de articulación tanto entre los estudiantes como entre nosotros y la sociedad fueron claves las primeras tomas, íconos por excelencia de la radicalización de la lucha estudiantil.

Como ya han descrito muchos, la acción estudiantil tiene siempre una dimensión “expresiva” y otra “instrumental”. La primera, señala Garretón, tiene que ver con el desarrollo de sentido, identidad y conciencia de sí, y la segunda con la obtención de logros concretos<sup>14</sup>. Todas las formas de movilización conjugan ambas dimensiones, pero siempre una predomina por sobre otra. En las tomas predomina la primera, con un componente instrumental más bien accesorio.

Las tomas consisten en la ocupación física de los locales universitarios, previa interrupción de las actividades académicas regulares. Si las motivan demandas que apelan a las autoridades internas tienen un sentido práctico de presión. Pero cuando las animan demandas estructurales que se disputan en el plano político, su finalidad es más bien simbólica. Las primeras tomas de 2011 respondían en su inicio al primer tipo de motivación, pero a medida que las demandas estructurales fueron haciendo sentido en la

base estudiantil y se fue agudizando la confrontación con el Gobierno, las tomas pasaron a ser trincheras de esa segunda pelea.

Las tomas funcionan día y noche. En ellas los estudiantes discuten, organizan actividades, redactan resoluciones y elevan posiciones a sus órganos representativos. Pero también se come, se duerme y se ama. Son auténticas fábricas de identidad, un revoltijo de ideas y pulsiones, de iniciativas militantes y reclamos existenciales. Rasgo común y muy decidor de las primeras fue que no respondían, como suele suceder, a la acción de grupos minoritarios, que fuerzan el pronunciamiento de la mayoría después de consumada la toma, sino a la decisión de una parte significativa del estudiantado representado por sus respectivas federaciones.

A esa altura del año la más referencial era la toma de la Universidad Central. O mejor dicho, “las” tomas de la Central.

La primera ocupación tuvo lugar la noche del martes 12 de abril. Los estudiantes, a través de su federación, le dieron un carácter *express* a modo de amedrentamiento a sus autoridades, un día antes de marchar al Mineduc para exigir que tomara cartas ante las irregularidades cometidas por el rector en ejercicio. Una semana después fue el turno de los centralinos de La Serena, cuando un centenar de estudiantes fueron desalojados violentamente de esa sede por las Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros.

A contar de ese día, y en especial tras el espaldarazo de Lavín a la venta de la institución, los estudiantes de la Central se comenzaron a preparar para presionar más y mejor a las porfiadas autoridades de su universidad y darle la visibilidad que los medios tradicionales le negaban a su causa.

Un rol clave en la elaboración y ejecución de estas iniciativas jugaron Mauricio Carrasco, entonces vocero del Consejo de Presidentes y entusiasta articulador de la movilización, y Daniela López y Marco Velarde, entonces dirigentes locales y más tarde compañeros de organización y dirigentes de la nueva federación de la Central.

Durante mayo se mantuvieron en paro, levantaron tomas *express* y una con intenciones de volverse permanente, pero que fue rápidamente desalojada por las FFEE. Cada dos semanas marchaban al Ministerio de Educación, que tenía el último botón para dar el vamos a la venta de la universidad.

La movilización de la Central tenía en su base un malestar distinto y más complejo que el que tradicionalmente se había expresado en las luchas estudiantiles. No era la resistencia de los hijos de la vieja clase media a la pérdida de beneficios, ni tampoco rabia existencial de grupúsculos sobreideologizados. Son estudiantes de títulos atados a las tasas de interés de créditos usureros, cuyo sueño de ser la primera generación de su familia en ingresar a la universidad pende de la codicia, gestionada por el Estado, de bancos y casas comerciales.

Pero no todos pensaban que proyectar luchas como la que daban los estudiantes de la Central fuese un objetivo irrenunciable de la movilización nacional.

Para los más radicalizados, movilizar a la Confech detrás de las banderas de los estudiantes de privadas implicaba legitimar la existencia de dichas instituciones. La retórica combativa con la que adornaban sus palabras no lograba ocultar el elitismo de la posición. Los comunistas pensaban como nosotros, pero no estaban dispuestos a proyectar procesos que no controlaran a través de dirigentes propios. Confluimos con libertarios e independientes de centro-izquierda, pero aún así no bastaba para sacar de la Confech un plan de acción. Debíamos actuar por cuenta propia y desde cada federación.

En este contexto de radicalización de la movilización en la UCEN y entrapamiento de la Confech por las diferencias entre su burocracia, fue que junto a los centralinos con los que habíamos comenzado a trabajar ideamos una acción para visibilizar la lucha estudiantil centralina y las responsabilidades políticas, hasta el minuto eludidas, tras la venta de la universidad. El objetivo no podía ser otro que la Democracia Cristiana, partido al cual pertenecían tanto los dueños del fondo de inversiones Norte-Sur como los mandamases de la Junta Directiva de la universidad.

La DC tenía una responsabilidad innegable y estaba pasando colada. Mientras Vicente Caruz (presidente de Norte-Sur) y Ernesto Livacic urdían la venta a ambos lados del mesón, sus parlamentarios y figuras públicas se subían al carro de las demandas estudiantiles para, sin ruborizarse, sacar dividendos del momento. En un gesto difícilmente catalogable como demócrata, menos aún como cristiano, la decé aumentaba su poder económico y político por la vía de jugar a dos bandos, con total impunidad.

Pero el rol de la DC en el caso de la Universidad Central no constituía un escándalo en sí mismo, aislado de la realidad del conjunto de la educación superior. Era expresivo de

la extendida colusión del empresariado educacional con poderosos sectores del sistema de partidos. Nuestra acción pretendía dar cuenta que la confabulación entre política y dinero era el eje estructurante y estabilizador de la educación neoliberal, no un accidente. Y con ello, ayudar a que la lucha centralina pareciera en la movilización nacional como un referente para los estudiantes de otras universidades privadas.

Ocupamos la sede santiaguina de la DC el miércoles 8 de junio. Participaron poco más de 100 estudiantes de la Chile y la Central. Estuvimos a punto de fracasar. Una inesperada cadena asegurada por un candado cruzaba la reja que al momento del chequeo, un día antes, no ofrecía ninguna resistencia. El regreso de una funcionaria que había salido a comprar el pan nos permitió ingresar, raudos, sin uso de la fuerza.

Adentro fue todo más fácil. En cosa de diez minutos la recepcionista -una señora que parecía trabajar allí desde los tiempos de Frei Montalva- pasó de querer llamar a Carabineros a largarse a conversar, tejido en mano, sobre las injusticias de la educación y la política.

El único militante presente nos recibió intentando ocultar su nerviosismo con cínica amabilidad. Nos sirvió café instantáneo y galletitas. Se le veía agotado y estresado. Se me pasó por la cabeza comentarle que si compraban y vendían universidades, seguro los jefes de su partido trabajaban en condiciones más placenteras que las suyas. Que cómo era posible que fueran tan tacaños con la esforzada militancia de su partido.

Deseché la idea tan rápido como se me había ocurrido. Puede que simplemente le gustara el café instantáneo. Puede que también tuviera bronca con la cúpula de su organización. Y de todos modos habría introducido una tensión innecesaria.

Mientras tanto, decenas de hijos de Bello y centralinos se desparramaban por la sede para vestirla con consignas como “No estamos contra los partidos, ellos están contra nosotros” o “Concerta, Piñera: la misma billetera”. En el *hall* del segundo piso, otros levantan en cosa de segundos una *twittcam* en vivo desde la que planteamos las razones de la ocupación.

Nos propusimos permanecer en el edificio hasta comunicarle a la directiva nuestro repudio a la participación de militantes de su partido en el banquete que quería darse Norte-Sur con la Central y conseguir cobertura de una cantidad digna de medios de comunicación.

A los pocos minutos aparecieron varias radios y canales de televisión. En una hora cumplimos los objetivos. Logramos que la causa estudiantil centralina se hiciera un poco más conocida y emplazamos a la DC a que desvinculara a sus militantes que violaran la ley que prohibía el lucro en las universidades. La interpelación quedó estampada en varios medios y las autoridades decé debieron salir a dar explicaciones.

No habíamos terminado nuestra misión y ya sabíamos que esta toma sólo podía ser la primera. Había que convertir la movilización en algo más que una lucha reivindicativa. Había que producir un cuestionamiento al rol de la política, lograr que se tematizara su carácter excluyente, elitista y cruzado de pequeños y mezquinos intereses.

La recepcionista se despidió cariñosamente, sin soltar su tejido. Le preocupaba el futuro, pero ese día se iba más tranquila a su casa, decía. Nos deseó éxito y cerró la reja tras nuestra partida. Esta vez, sin cruzarle ninguna cadena.

## CAPÍTULO IV

### El negociado de la esperanza

#### Y volvió

El malestar que subyace a la revuelta estudiantil excede por mucho el problema educacional para hundir sus raíces en la creciente desigualdad y privatización de nuestras condiciones de vida, la emergencia de nuevas formas de exclusión y el desencanto con una política autista. Pero, ¿por qué tamaño fastidio se expresó a través del movimiento estudiantil?; y ¿por qué apuntó sus dardos al problema educativo antes que al laboral, el previsional o el de la salud, igualmente sometidos al predominio del lucro?

Las dificultades para desentrañar tal dilema no son menores. Las interpretaciones en boga presentan la revuelta de 2011 como nacida por generación espontánea. Tanto quienes aprecian en ella el ocaso del neoliberalismo chileno como quienes la consideran enfermedad propia de país “avanzado”, se deslumbran con sus momentos más espectaculares, sus puntos de llegada, otorgando poca atención a cómo se gestó.

Quedan así a oscuras los procesos mediante los cuales, a través de múltiples experiencias y dinámicas particulares, fue tomando forma un nuevo actor social, que aunque inorgánico y de actuar esporádico, ha logrado expresar las contradicciones y anhelos del Chile actual de una manera en que ningún otro actor ha podido hacerlo durante la transición.

A su vez, la pregunta acerca de por qué la educación en lugar de otro aspecto de la vida social, encuentra más respuestas entre los propios intelectuales y técnicos neoliberales que entre quienes piensan y trabajan para el cambio. Y ellos, cómo no, reducen el problema a la cuestión de la eficacia de las políticas públicas implementadas, naturalizando los fines de dichas políticas y sus consecuencias. Así, el reclamo estudiantil queda reducido a incomodidad irracional que los “expertos” deben encargarse de interpretar y procesar.

La cosa es que en los hechos la modernización neoliberal encontró su flanco más débil, en términos de aprobación social, en la educación. En la medida que fue promovida

como la mejor herramienta para la movilidad social y la realización individual, sembró esperanzas que no sólo fue incapaz de satisfacer sino que terminó traicionando.

Los sucesivos gobiernos la ungieron portadora de una promesa de tan hondo arraigo en nuestra sociedad que terminó sosteniendo la aprobación de una parte importante de la población sobre el conjunto del orden social. De ahí que su crisis produjera una trizadura en la legitimidad de gran parte de la estructura de poder, de sus valores, instituciones y personajes.

Nada de esto, por supuesto, ocurrió de la noche a la mañana. Es producto de un largo andar, de sucesivas luchas al calor de las cuales se fue constituyendo un actor reñido con la restricción de horizontes propia del orden actual, pero a la vez parido de sus entrañas. Un actor expresivo del equilibrio entre lo que va quedando atrás y lo que aparece como novedad.

Pocos imaginaban que los propios hijos del modelo, jóvenes supuestamente adormecidos por el individualismo, se rebelarían contra el actual estado de cosas. En las cabezas de los poderosos seguía vigente la sentencia de muerte del movimiento estudiantil que en los '80 dictara José Joaquín Brunner. De ahí la torpeza en la reacción de las elites ante las protestas de 2006 y 2011. “Si movimiento estudiantil –afirmaba Brunner en 1985- significa un fenómeno de masas juveniles relativamente homogéneas, que se identifican por oposiciones y alianzas relativamente estables, y que buscan incidir en la marcha de la institución universitaria para convertir a ésta en una partera de la modernidad, entonces diremos que ese movimiento estudiantil ha desaparecido y que no volverá”<sup>15</sup>.

Las páginas que siguen relatan cómo se frustraron las promesas de la educación neoliberal y cómo fue que los hechos se encargaron de enrostrarle a Brunner su equivocación.

### **El accidentado camino a 2011**

No es primera vez en Chile que el movimiento estudiantil desencadena procesos que terminan marcando inflexiones históricas. En los años '20 del siglo pasado, los estudiantes encararon al poder oligárquico contribuyendo a acelerar la decadencia de la República parlamentaria. Su lucha alcanzó ribetes fundacionales, imprimiendo su sello al desarrollo

del proceso político hasta bien entrado el siglo XX. Algo similar ocurrió en los '60, cuando animados por el desafío de poner a la universidad a la altura de los profundos cambios sociales que se gestaban en la época, los estudiantes terminaron favoreciendo la radicalización del proceso social en curso, nutriendo además las filas de los proyectos políticos que se disputaban su conducción.

El movimiento estudiantil tuvo una importante gravitación en la vida nacional durante el siglo XX. Manuel Antonio Garretón lo explica por la articulación de múltiples factores, entre los cuales destaca el alto peso relativo de las capas medias en la estructura de clases y el sistema político; el carácter urbano y joven que predomina en la población chilena; y la estrecha relación entre el personal de las universidades con el Estado y los partidos políticos<sup>16</sup>.

Pero estos factores, si bien todavía presentes, no bastan para explicar el carácter y el tipo de gravitación que el movimiento estudiantil ha tenido en la vida nacional de la transición a la democracia. La obra de la dictadura implicó una refundación política, económica, social y cultural del país. Modificó su estructura de clases, sistema político y vida cultural. Y la orientación y función social de la educación, en todos sus niveles, no escapó de ese fenómeno.

Con la contrarreforma que impuso la dictadura y perfeccionaron los gobiernos civiles de la Concertación, el carácter y las reivindicaciones del movimiento estudiantil cambian sustancialmente. La universidad transitó de un modelo elitista a uno de masas, por lo que el carácter social del estudiantado superior se amplió. Mientras que en el marco del desmantelamiento del Estado interventor vigente hasta la Unidad Popular, el desarrollo de la educación pasó a manos del mercado y la iniciativa privada.

La educación, bajo un programa de profundización capitalista, devino mercancía y los estudiantes clientes. El Estado se limitó a jugar un papel represivo para la implementación de las reformas neoliberales durante los '80, y regulador y evaluador durante la transición para la mercadización más plena del sistema. El movimiento estudiantil asume desde entonces una tarea de resistencia a dicho proceso y un desarrollo que oscila entre momentos ofensivos y defensivos, y reivindicaciones políticas y corporativas.



Esto fue así no sólo por la fuerza de los poderosos, sino también por la honda desarticulación social imperante, realidad de la que no escapó el movimiento estudiantil. De hecho, es difícil hablar de un “movimiento” estudiantil propiamente tal durante la transición, más todavía de un “movimiento social” por la educación. Difícil porque no ha habido un actor con iniciativa social, política o de masas permanente. Pero entonces, ¿qué ha habido?

Lo que ha habido –puntualiza Víctor Orellana, dirigente secundario y universitario de la década que pasó- son respuestas masivas y esporádicas a intentonas de profundización del modelo mercantil de educación desde el Estado; una cierta burocracia que sobrevive, expresada en centros de estudiantes, federaciones y agrupaciones gremiales; y un campo de colectivos políticos y juventudes partidarias articulado en torno a la crítica o la disputa de dicha burocracia<sup>17</sup>.

La historia del movimiento estudiantil chileno bajo el periodo post-dictatorial es la historia de la articulación entre estos tres elementos.

La realidad educacional provee las motivaciones inmediatas de su acción, pero es el contexto político lo que le da significado concreto y la variable generacional que lo hace portador de una fuerza cultural<sup>18</sup>. Estas realidades combinadas terminan por hacer del movimiento estudiantil un espacio privilegiado para la crítica a la exclusión política característica de la transición, para la puesta en entredicho de las promesas de la educación de mercado y para la expresión de las transformaciones culturales que experimenta la juventud.

La marcha de este actor, aunque esporádica e inorgánica, plagada de contradicciones y aciertos, no ha sido en vano.

En los ‘80 las luchas estudiantiles estuvieron animadas por la resistencia a la privatización autoritaria y constituyeron un escenario más de combate por la recuperación de la democracia.

Las luchas de los ‘90 en tanto, fueron más de resistencia a los resabios de la dictadura que respuestas a las contradicciones emergentes del Chile post-dictatorial. La más significativa fue la universitaria de la segunda mitad, contra el déficit del crédito y los residuos de autoritarismo en las universidades públicas. Se cerró en 1998 cuando la

Universidad de Chile inició un proceso institucional de tímida democratización, que le dio un nuevo estatuto pero quedó truncado.

En esos tiempos, lo que el movimiento planteaba era la restitución de ciertas características propias de la vieja universidad pública, así como un financiamiento más subvencionado, a través de la demanda del “arancel diferenciado”.

Tanto el movimiento secundario como el universitario entran al nuevo siglo en crisis. Los ‘90 quedaban atrás con un profundo reflujo y un agudo agotamiento de la hegemonía de la izquierda en la conducción de las organizaciones estudiantiles y sociales en general. Pero en los dos mil emergen también respuestas políticas y sociales a esa crisis, con el tímido pero progresivo surgimiento de nuevas identidades y prácticas transformadoras, el ascenso de luchas democráticas de base y la resistencia al retroceso del crédito solidario.

Los alzamientos de los estudiantes secundarios cobraron repercusión nacional recién en 2001, con el llamado “mochilazo”, gatillado por el alza en el valor del pasaje escolar y orientado a quitarle el pase escolar a los empresarios microbuseros para que fuera administrado y otorgado por el Estado. Se proyectó gracias a una renovación en las formas de acción y organización del mundo estudiantil secundario.

Atrás quedó la Federación de Estudiantes Secundarios (Feses), paralizada entonces por una burocracia en exceso verticalista y controlada por los partidos del oficialismo. La reemplazó, a partir de un congreso de la propia Feses, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), más dinámica por su estructura de voceros que respondían a asambleas por liceo y conducida por una corriente autónoma de estudiantes agrupados en colectivos de corte anarquista e inspiración revolucionaria.

Los docentes, en tanto, liderados por el Colegio de Profesores (el gremio profesional más grande y de mayor peso en Chile), protagonizaron diversas movilizaciones por la mejora de sus condiciones laborales, marcadas por una creciente precarización desde los ‘80. Las de fines de los ‘90 fueron las más significativas y las más políticas. En la década siguiente, el impacto de las acciones del magisterio se fue reduciendo rápidamente.

Aún cuando estas luchas consiguieron cierta repercusión en la opinión pública y movilizaron al activo social y político de izquierda ligado a la educación, no lograron detener el avance de las políticas neoliberales para el sector. Fueron frontalmente

combatidas por los gobiernos de la Concertación y desarticuladas desde dentro por su militancia.

Tampoco pudieron articular una crítica política más allá de la exigencia de soluciones a temas gremiales, ni superar los límites del tradicional actor movilizad; los universitarios de las principales casas de estudio públicas, los estudiantes de los liceos emblemáticos y los profesores afiliados al Colegio con alguna militancia política.

No obstante, en paralelo al declive de las viejas identidades y formas de movilización, van emergiendo nuevas pautas de acción colectiva. Si en los '90 la disputa política al interior del movimiento estudiantil estuvo marcada por la pugna entre las juventudes de la Concertación y las Juventudes Comunistas, en los dos mil emergen nuevas corrientes que pasarán a hegemonizar la organización secundaria y a constituir un "tercer tercio" en la Confech. Aquí destacan los colectivos autodenominados "populares", de inspiración mirista, escisiones de las JJCC como la Nueva Izquierda, y, la más importante hasta 2007, la SurDA.

Pero no fue sino hasta las movilizaciones de 2005 y 2006 que estas nuevas formas de acción colectiva se desplegaron con más libertad y notoriedad pública.

La del 2005, bajo el último año de gobierno de Lagos, fue la movilización universitaria más grande desde 1998. Su objetivo fue resistir la llamada Ley de Financiamiento, que pretendía unificar los créditos para la educación superior en el Crédito con Aval del Estado (CAE), administrado por la banca. Convocó una energía que la burocracia no pudo conducir, generando el quiebre de muchas federaciones, e incorporó de manera incipiente a las primeras organizaciones estables de universidades privadas. Conjugó las tradicionales formas de movilización (marcha-paro-toma, en ese orden) con otras nuevas, más simbólicas, como la irrupción en programas de la televisión abierta y la ocupación de edificios públicos.

Se logró contener la expansión del CAE a costa del Fondo Solidario y un importante aumento de las ayudas estudiantiles, pero al no producirse una síntesis entre las viejas y nuevas formas de acción las tensiones internas del movimiento lo entramparon, produciendo un quiebre con los rectores del CRUCH que le facilitó el camino al gobierno. No existió tampoco la unidad suficiente para elevar críticas a la mercantilización de la educación y la vida, tanto por la fuerza de las preocupaciones gremiales como el miedo de

la conducción a perder amplitud, fuerza y con ello repetir el fracaso de anteriores movilizaciones.

Pero el factor más decisivo en la contención de la movilización de 2005, así como de todas las luchas sociales de la transición, fue el sólido cierre del sistema de partidos. La Concertación, que mostraba los primeros síntomas del naufragio que la tiene hoy a la deriva, no acusó recibo del mensaje político contenido en el reclamo estudiantil. El movimiento no planteó nada muy distinto a lo que plantearía en 2006 y 2011, sin embargo, su lenguaje y el de la clase política eran completamente distintos.

El 2006 ya se puede hablar con propiedad de un nuevo tipo de movilización estudiantil y del antecedente más próximo a la revuelta de 2011.

La llamada “revolución pingüina” expresó con claridad no sólo el desarrollo del proceso interno recién descrito, sino transformaciones más generales que atravesaban a la sociedad chilena, como la demostrada falacia de la promesa meritocrática, la frustración de las capas sociales que comienzan a ser incorporadas a la modernización neoliberal y la cada vez más evidente crisis del sistema de partidos, y en particular, de la izquierda y la Concertación.

La movilización de los estudiantes secundarios aquel año fue novedosa por sus instrumentos de lucha, su carácter social y su impacto político. Comprendieron que su lucha debía tener un rostro alegre y convocante, no amargado, para sumar respaldo a su causa, y que en ello residía su radicalidad. Usaron a su favor la cobertura de los medios de comunicación -no obstante éstos los condenaron apenas sacaron filo a su discurso-, y utilizaron de modo creativo las tecnologías de la información. (*Fotolog* era por esos días la principal red para difundir y convocar a actividades).

La movilización se expandió más hacia arriba y abajo en la estructura social que anteriores reventones, involucrando tanto a colegios de elite como a liceos periféricos. Así, cuando el movimiento buscó puntos comunes, éstos fueron más generales y por lo tanto capaces de representar a sectores más amplios de la población.

Sus banderas primero fueron denuncias de corte más bien gremial, como las carencias en infraestructura, la paupérrima calidad de la formación, la carestía del pasaje escolar y la dudosa efectividad de la Jornada Escolar Completa. Pero a medida que los sectores más conscientes fueron promoviendo en las asambleas una deliberación sobre la

raíz de sus problemas, la movilización apuntó a cuestiones estructurales. Demandaron prohibir el lucro en la educación básica y media, acabar con la Prueba de Selección Universitaria PSU, otorgar carácter resolutivo a los consejos escolares y reemplazar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada el último día de la dictadura, por un nuevo marco normativo.

En conjunto con los aciertos de los estudiantes, la movilización se proyectó por la fragilidad del contexto político. Corría el primer año del cuarto gobierno de la Concertación, encabezado por Michelle Bachelet, y la decadencia del bloque ya no se podía ocultar bajo la alfombra. Bachelet había ganado con la promesa de implementar un “gobierno ciudadano”, más cercano y abierto a la sociedad civil, pero a los pocos meses de asumir dejó en evidencia lo artificial de esa promesa. Con un gabinete dominado por tecnócratas y una coalición sin unidad política, la debilidad de La Moneda no sólo no pudo contener sino que contribuyó a proyectar el alzamiento de los secundarios.

La derecha política y económica, mientras tanto, agitó la movilización durante el primer mes, dándole una amplia cobertura mediática. Las demandas gremiales de los estudiantes le permitían entrar a jugar con su propia agenda y debilitar a Bachelet. Bastó sin embargo que los secundarios politizaran más su ofensiva, poniendo en el centro la derogación de la LOCE, para que la derecha cambiara el respaldo por ataque.

“Cabros, no se suban por el chorro”, tituló el 3 de junio de 2006 Las Últimas Noticias, el diario más leído en el país. El mensaje no dejaba espacio a dobles interpretaciones.

Se activó una amplia red de respaldo social, intelectual y político a la lucha de los escolares, cristalizada en el Bloque Social por la Educación, que agrupó a secundarios, universitarios, profesores y muchos gremios del sector. En términos orgánicos resultó de una mixtura llena de contradicciones entre los esfuerzos herederos del 2001 e identidades críticas de la Concertación.

La movilización caló hondo en el sistema político. Produjo la renuncia del entonces ministro de Educación Martín Zilic (DC), el arribo de ministros con más trayectoria política al gabinete y provocó un giro en el propio Gobierno, que desechó su discurso ciudadano para adoptar una línea más conservadora.

La lucha de 2006 fue capaz de algo inédito: evidenciar ante la sociedad las deudas de la Concertación con la democratización del país. Fue un gran llamado de atención a sus sectores más críticos, pero a la vez generó el endurecimiento de sus sectores neoliberales. Esta segunda opción se impuso políticamente en la resolución del conflicto.

A pesar de que la “revolución pingüina” desplegó a más de un millón de estudiantes por más de tres meses de intensa movilización y activó a una amplia red de sustento, fue incapaz de administrar y conducir la situación que produjo y terminó derrumbándose abruptamente. El movimiento no pudo ejecutar un repliegue ordenado y fue absorbido por un reflujo que se extendería cuatro años.

Se abrió así la cancha para la implementación de reformas de profundización de mercado.

En 2007 se concretó el ofrecimiento con que Bachelet había cerrado el conflicto en 2006: participación en el Consejo Asesor Presidencial, con representantes del mundo social de la educación, del mundo gremial y empresarial y especialistas de la Concertación y la Derecha. Terminó con un informe que no representaba las posturas mayoritarias; ni siquiera la del presidente del Consejo, que renunció con duras críticas al Gobierno.

La respuesta de la clase dirigente a la protesta estudiantil de 2006 fue unitaria y se cristalizó en abril de 2007, con el envío al Parlamento del proyecto de ley que reemplazaba la LOCE por la nueva Ley General de Educación (LGE). El proyecto, fraguado al más puro estilo de la “política de los acuerdos” entre las cúpulas de la Concertación y la Derecha, mantenía intactos los pilares del sistema escolar y consagraba la crisis de la educación pública.

Tomados de las manos, en el salón Montt-Varas de La Moneda, los presidentes de los partidos de la Concertación y la Derecha, los ministros Yasna Provoste (DC), José Antonio Viera-Gallo (PS) y la presidenta Bachelet, acordaron el envío de la LGE al Parlamento. Esa postal representó la respuesta del sistema de partidos al 2006 y tuvo un profundo impacto entre los estudiantes, condicionando la relación que en los años posteriores existiría entre el movimiento y el sistema político.

A contar de 2007 el movimiento entra al segundo periodo de reflujo de la década, de baja conflictividad y alta apatía.

Los secundarios son los más golpeados. Se caen sus organizaciones, sin que los esfuerzos asambleístas ni federativos logren recomponerlas de manera duradera más allá de la gestión de reventones aislados, como el de 2008 contra la aprobación de la LGE.

En el mundo universitario sobreviene un retroceso de las identidades de izquierda herederas del 2001 y un repunte de la izquierda tradicional. La Confech pierde la frágil unidad política que tuvo por el entendimiento entre sectores que actuaban como “bancadas” y se sumerge en una dinámica muy burocrática, reticente a la movilización, incluso sesionando las más de las veces sin quórums ni agenda.

La excepción estuvo dada por procesos locales, como el de la Universidad de Valparaíso en 2007, por avances en democratización, y el de la UTEM en 2010, contra la administración autoritaria e ineficiente del rector de entonces; intentos fracasados de movilización nacional como la de 2008 contra la LGE y el endeudamiento; y un testimonial congreso programático que no logró superar a las burocracias de un puñado de federaciones en 2009.

Pero las consecuencias de la implementación del CAE y la insatisfacción ante la debacle de la educación pública no cesaron. Tampoco los problemas emergentes en la educación superior privada, que continuaba creciendo a ritmo frenético. Por el contrario, se fueron amontonando hasta generar un nuevo cúmulo de contradicciones, campo fértil para la apertura de un nuevo ciclo de movilizaciones que no vería la luz sino hasta mayo de 2011.

### **Una fábrica de frustraciones**

Cada cierto tiempo las movilizaciones estudiantiles y de profesores lograron poner en la agenda nacional los problemas asociados a la tendencia privatizadora, como la crisis de la educación pública o la explosión del endeudamiento, pero la estrategia neoliberal siempre ha salido airosa desde sus inicios en los ‘80 hasta la fecha. Ninguna concentró el respaldo social y la magnitud política suficiente como para rayarle la pintura a su legitimidad, sino recién hasta las luchas estudiantiles del último lustro. Particularmente, las de 2006 y 2011

En el intertanto la educación chilena transitó de un paradigma en el cual se la concebía un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado, a otro que la considera un

bien de consumo. La acción estatal, en tanto, se concentró ya no en asegurar el derecho a la educación, sino la libertad de empresa presentada como “libertad de enseñanza”. Así, se volvió dominante la idea según la cual la educación iba bien encaminada y sus problemas tenían más que ver con la eficiencia en la aplicación de las políticas públicas impulsadas por cada gobierno, que con el sentido y las consecuencias de las mismas.

Con el mito del Chile pujante y exitoso como telón de fondo, la educación apareció a los ojos de la mayoría como la mejor y más rápida forma de acceder al bienestar y a las oportunidades de realización negadas a las generaciones anteriores.

Dos ideas han sostenido esta promesa. Que tanto el ingreso como la salida del sistema se inspiran en el premio al mérito sin distinguir condición social. Y que el paso por la educación, en especial la superior, es garantía de movilidad social. Poco importa si estamos o no de acuerdo con las premisas ideológicas que les subyacen. Más allá de cómo las valoremos, su difusión ha creado extendidas expectativas en nuestra sociedad, en particular en aquellos que por primera vez ven a sus hijos incorporados a la educación superior.

Estas ideas han descansado en el realce de supuestas virtudes, como el hecho de que 7 de cada 10 estudiantes de la educación superior son hoy primera generación de su familia en ingresar al sistema y que éste ha cuadruplicado su cobertura en 30 años. El discurso tecnocrático ha elaborado una batería de ideas que opera como la mejor línea de defensa del modelo educativo, articulando cifras, las más de las veces no falsas, pero siempre incompletas y acomodaticias, para sostener la confianza de la gente.

Pero los números presentados como virtudes contenían en realidad un conjunto de contradicciones, que lejos de responder a las expectativas sociales depositadas en la educación, han significado el surgimiento de nuevas formas de exclusión, reproducción de la desigualdad y sometimiento de las instituciones formativas y creadoras de conocimiento al interés egoísta de un rapaz empresariado.

El discurso oficial suele relevar que la educación básica y media en Chile ha logrado un inédito nivel de generalización que la sitúa a la cabeza de la educación de ese nivel en América Latina. En efecto, la tasa de analfabetismo entre los jóvenes es una de las más bajas de la región y la de escolarización de las más altas. Se acompaña esta celebración con



la difusión de la idea según la cual la educación general sería hoy más diversa que nunca, pues con la expansión de los establecimientos particular-subsencionados y el crecimiento de los privados, hoy los chilenos tendrían más posibilidades de “elegir” qué educación quieren para sus hijos.

Pero el carácter que ha tenido la generalización de la enseñanza obligatoria no ha sido neutro, sino indiscutiblemente injusto. La transformación del financiamiento de los establecimientos educativos, mediante subsidios portables o *vouchers*, y del modelo de gestión escolar municipalizada, ha generado un “sistema escolar conscientemente estructurado por clases sociales”, como dijera la propia OCDE en su informe anual de 2004. Es decir, un sistema dividido en colegios para pobres y colegios para ricos.

Contrario a lo que sostienen sus defensores, el sistema escolar chileno no está fundado en la libertad de los padres para elegir qué educación dar a sus hijos, sino en la libertad del dinero para elegir a qué estudiantes educar y cómo. Fernando Atria lo grafica en pocas palabras: Si tengo poco dinero tengo poca libertad y si tengo mucho dinero tengo mucha libertad<sup>19</sup>. El resultado ha sido una segregación sin comparación en el mundo o lo que el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) denominó con acierto un “*apartheid* educativo”. Son las consecuencias de establecer la competencia entre establecimientos como principio rector del sistema y asignar al Estado un rol de mero garante de una competencia más óptima como proveedor de subsidios, ejes fundamentales de las políticas educativas tanto dictatoriales como concertacionistas.

De una similar celebración ha sido objeto la educación superior. Ciertamente es que su cobertura ha experimentado una vertiginosa expansión en las últimas décadas, sobre todo a contar de fines de los ochenta. Según la OCDE, si en 1980 sólo el 7,2 por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años conseguía ingresar a sus instituciones, en 2009 lo hacía el 46<sup>20</sup>. Sin embargo, esta expansión no ha sido homogénea, sino que ha beneficiado principalmente a los jóvenes de mayores recursos. “La brecha de cobertura en la educación superior –consigna el mismo organismo– entre el quintil con mayores y más bajos ingresos, ha aumentado”<sup>21</sup>.

Por lo demás, la ampliación de la cobertura poco tiene que ver con un acceso efectivo a las oportunidades que entregaría la educación superior. En Chile sólo 4 de cada 10 jóvenes en edad de ingresar a sus instituciones logran hacerlo y, si bien no hay datos

nacionales y sistemáticos sobre tasas de deserción y retención en estudios superiores, con lo que existe, principalmente en el sistema de información del Ministerio de Educación, al 2011 se puede aproximar que sólo 2 de esos 4 conseguían egresar.

La deserción, cómo no, está directamente relacionada con la capacidad de pago del estudiante y su condición social. Las mejores tasas de retención las tienen las universidades (las tradicionales sobre las privadas) y los estudiantes de más altos ingresos, mientras que las peores los institutos profesionales, donde sólo 3 de cada 10 estudiantes sacan el título, y los estudiantes de estratos medios y bajos.

La magnitud del problema se torna más claro si consideramos que el 84,2 por ciento del dinero que se invierte en educación superior proviene de las familias, mientras que en el grupo de países a los que los últimos gobiernos han dicho querer acercarnos ese monto es del 23,6, según sus registros más recientes. Además, como concluye Patricio Meller, los aranceles de la educación superior chilena son los más caros del mundo, alcanzando un 41 por ciento del PIB per cápita, lo que equivale a 280 mil pesos, casi 100 mil por sobre el sueldo mínimo vigente<sup>22</sup>.

El alto costo de los aranceles, combinados con la expansión del sistema hacia sectores de menores ingresos, muestran la importancia del sistema de créditos. En 2010, los créditos significaron el 70 por ciento del presupuesto estatal para educación superior. Su costo, al igual que los aranceles, es de los más altos del mundo. Mientras los estudiantes de los países de la OCDE destinan entre un 2,6 y 7 por ciento de su sueldo futuro a pagarlos, los chilenos destinan un 18. La tasa de deserción aumenta conforme se baja en la escala de ingresos, por lo que un gran número de estudiantes pasan por la educación superior para llevarse no un título sino una cuantiosa deuda.

Sin duda la principal característica de la educación chilena, desde el punto de vista del rol del Estado, es que opera bajo el principio de subsidio estatal a la demanda. Ya sea otorgando becas, créditos o como aval de estos últimos para la banca. Es una consagración del “principio de focalización” impuesto por los Chicago Boys en la década de los ‘70, principio generalizable de modo progresivo a todo el gasto social. Animó tanto la acción de los “Odeplan Boys” durante la dictadura, como la política de “crecer con igualdad” de Lagos, el sistema de bonos directos de Bachelet y las políticas sociales de Piñera, heredero directo de esta concepción.

El asunto de los créditos y las ayudas estudiantiles es ilustrativo de las consecuencias de este principio. Hasta 2006, éstos se concentraron principalmente en las universidades del CRUCH y en mucho menor medida en las universidades privadas. El subsidio del acceso a la educación técnico-profesional se limitaba a un minúsculo sistema de becas propio. Pero a contar de ese año, luego de la gestión de los ministros de Educación de los gobiernos de Lagos y Bachelet, comenzó a funcionar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

En un principio, fue concebido para reemplazar al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y transformarse en el único mecanismo de financiamiento para el acceso a la educación superior. Las movilizaciones de 2005 impidieron la desaparición del FSCU para las universidades del CRUCH, pero el CAE de modo progresivo se impuso como el más importante, al alcance de cualquier institución acreditada. Hoy su peso es indiscutible. Significa el 48 por ciento de los recursos para ayudas estudiantiles y alcanzó a ser un tercio del presupuesto para la educación superior en 2010, de acuerdo al Ministerio de Educación. 6 de cada 10 estudiantes con CAE pertenecen a los dos quintiles de menor ingreso y el 48 por ciento de ellos estudia en una institución técnico-profesional.

Dos particularidades llaman la atención del CAE. La primera es que como no cubre los aranceles reales, su tasa de interés llega al 6 por ciento y genera un nivel de morosidad cercano al 40, ha generado un aumento desproporcionado del costo de la educación superior, sobre todo para los estudiantes más pobres y para el propio Estado. Y la segunda es que aunque es presentado como un beneficio para las familias, sus principales beneficiarios son los bancos, entidades que desempeñan un papel nodal en su funcionamiento.

Para incentivar la participación de los bancos el Estado hace de aval y éstos le pueden vender hasta el 50 por ciento de los créditos, sumando un recargo adicional. En 2010 ese recargo representó más de un 37 por ciento de la cartera. El gasto público destinado a recompras de CAE y pago de recargos sólo en 2010, estima el economista Manuel Riesco, llegó al 60 por ciento del CAE y poco menos de la mitad de todo el gasto público en educación superior<sup>23</sup>. La rentabilidad estimada de estas transacciones fue de 30 por ciento, sin considerar las ganancias regulares por el 6 de interés que pagan los estudiantes (el doble de la tasa a la que les presta dinero el Banco Central a las grandes

empresas). La tasa de retorno real para los bancos, estima Riesco, bordea el 18 por ciento, sin correr riesgo alguno, pues el Estado en calidad de aval cubre el 90 de la deuda acumulada.

Ahora bien, no sólo para los bancos el CAE ha resultado un gran negocio. Respecto a las instituciones que financia, 77 por ciento son privadas y el 60 está representado sólo por 5 grupos económicos. El CAE ha desatado una despiadada persecución de recursos por parte de este tipo de instituciones. Tal ha sido la fuerza de este fenómeno que la política de acreditación, anunciada como el gran mecanismo para asegurar la calidad del sistema, fue distorsionada para terminar operando como requisito para acceder al CAE más que para garantizar calidad.

Estas irregularidades, sobre todo en instituciones técnico-profesionales, fueron ampliamente descritas en una bullada investigación periodística de CIPER en 2011<sup>24</sup>, y estallaron como escándalo en 2012 con la participación de integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación en la venta de certificaciones.

En 2012 el Gobierno anunció ajustes al CAE que impactarán en un descenso de su tasa interés para los estudiantes. Las condiciones gruesas de su funcionamiento, sin embargo, no cambian. Es más, la reducción del interés será financiado a través de subsidios más abultados a la banca.

El principio del subsidio a la demanda, en definitiva, vino a agudizar el drama del sobre-endeudamiento que viven miles de familias chilenas. Y de paso, a traicionar las ilusiones de integración a la prometida modernidad a través del logro educativo.

Pero no todo es culpa del pésimo sistema de financiamiento. El modelo nunca ha contado con normas y mecanismos para orientar racionalmente el desarrollo de la educación superior. La Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados, que trabajó entre agosto de 2011 y junio de 2012 para responder a los cuestionamientos que la revuelta estudiantil instaló sobre el asunto, lo resume así en sus conclusiones:

“El Estado creó todo un conjunto de normas que derivó, incentivó y fortaleció un sistema de educación superior privado prácticamente desregulado, que en lo medular se expresa en requisitos mínimos de constitución, más bien formales, sin regulación respecto a la calidad de estas instituciones, la oferta de carreras profesionales o técnicas sin

fiscalización, sin un procedimiento técnicamente aceptable y transparente de determinación de los aranceles cobrados y si estos reportaban lucro para las instituciones”<sup>25</sup>.

Se ha terminado creando –reconocen los diputados de la comisión- una enorme industria de la educación superior, cuyo monto de negocio ascendía en 2009 al 2,4 por ciento del PIB, lo que equivale 2,4 billones de pesos, 1,6 provenientes de las familias. Es decir, esta colosal partera de frustración es financiada por sus propios afectados. La guinda de la torta lo constituye el hecho de que la mayor parte de los grupos económicos de esta industria han incurrido a través de diversos y creativos mecanismos –que también consignan los diputados en su investigación- en el lucro que la ley dice prohibir.

“No sólo existe lucro en la educación superior –concluyen-, sino que además, todo el marco normativo que regula el sistema de educación superior, en especial respecto al cabal cumplimiento del requisito establecido en la ley respecto del lucro, no funciona”. Lo único que el Estado ha garantizado es la apertura de nichos de acumulación desatada para bancos y negocios “educativos”.

Cuesta imaginar un trabajo más eficaz para diseñar las condiciones de irrupción de una descarnada crítica al modelo educacional.

### **Promesas incumplidas**

La crítica a la educación neoliberal irrumpe a partir de los modos como sus propios “beneficiados” la han vivido, desde la contradicción entre sus expectativas y la realidad. El puente que mantiene unidas ambas dimensiones han sido, principalmente, las promesas de movilidad social y de premio al mérito.

La promesa meritocrática tiene una doble función. Describe y a la vez norma. En lo primero falla, pues si bien el esfuerzo expresado en el rendimiento académico resulta determinante en el ingreso y el egreso de la educación superior, no tiene el mismo valor en todos los grupos sociales, ya que antes que por el mérito está condicionado por aspectos socioeconómicos. Y en lo segundo, pierde terreno, porque el llamado a considerar al esfuerzo y el sacrificio personal como principal vía para conseguir el éxito educativo goza de cada vez menos popularidad.

Un claro ejemplo de esto es el rendimiento de los estudiantes en la Prueba de Selección Universitaria PSU. Esta prueba se presenta como una medición “objetiva” del mérito personal, pero sus condicionantes principales son de orden socioeconómico, de formación básica y de contexto académico<sup>26</sup>, según se desprende de un estudio del académico Jesús Redondo. Como es sabido, la distribución de puntajes coincide con la distribución del ingreso: el puntaje promedio en esta prueba de selección baja conforme se descende en la estructura social. En 2010, de acuerdo a la información del Mineduc al 2011, los hijos de directivos y profesionales sacaron 604 puntos promedio, los hijos de técnicos y profesionales de nivel medio 553, los de empleados y obreros 528 y los de trabajadores no calificados 503. Además, los puntajes altos se asocian a colegios particulares y los bajos a establecimientos municipales y particulares-subvencionados.

Otra entrada decisiva sobre el carácter social del mérito, es distinguir las variables y tipos de capital que más determinan la obtención del éxito académico por grupo social. De acuerdo a Víctor Orellana “el rendimiento escolar resulta un recurso de menor valor a medida que se asciende en la estructura social”<sup>27</sup>. Mientras para el grupo de altos ingresos la variable que más hace la diferencia entre acceder o no al 10 por ciento de mejor rendimiento en la PSU es la dependencia del colegio, para la zona media y baja son el nivel educacional de los padres –en especial la madre- y un rendimiento académico descollante. La inversión en colegiatura sólo se vuelve un factor determinante en el 10 por ciento más rico de la población.

Como si fuera poco, de acuerdo a un estudio de Sergio Urzúa, del Centro de Estudios Públicos CEP, entidad que está lejos de haber apoyado las movilizaciones estudiantiles, en términos de contribuir a la promovida movilidad social, la educación superior chilena también deja mucho que desear.

De los 76 mil 634 jóvenes que desertaron de la educación superior en 2009, un 74 por ciento es la primera generación de su familia en ingresar a una universidad, CFT o IP. Además, entre 1996 y 2009 el ingreso a la educación superior no se refleja en un aumento de los salarios reales suficiente como para financiar el costo asociado a estudiar con CAE, cuya tasa interés fue de casi 6 por ciento real anual hasta 2011. Los ingresos autónomos de los jóvenes con educación universitaria suben sólo en 1,6 por ciento en ese periodo, con CFT o IP completa 9,5 y educación superior incompleta 4,6<sup>28</sup>.

¿Qué quiere decir esto? Que, como lo puso el investigador José Ossandón, “el CAE puede terminar siendo uno de los mayores desastres de políticas públicas en el país. No sólo por el gasto estatal involucrado, o porque se habría sustentado en un supuesto erróneo, sino porque podrá tener como resultado estudiantes más endeudados e incluso más pobres que al comienzo”<sup>29</sup>. Es decir, estaríamos ante un modelo que no es coherente siquiera con su propia lógica, o sea, que es irracional.

La gracia de estas promesas, es que aunque fallidas han sido las únicas capaces de presentar como conciliables intereses que en los hechos no lo son: el de la sociedad por una educación que otorgue horizontes de realización más amplios para el país y sus hijos, y el de los empresarios por una educación que funcione como negocio rentable y mecanismo para imponer sus particulares valores y visiones de mundo.

Hasta hace poco los políticos del neoliberalismo y su tecnocracia habían escondido con éxito este antagonismo. Un primer movimiento, el más audaz, lo dieron en los años de la dictadura. Con los Chicago Boys a la cabeza, le robaron a la izquierda y al movimiento estudiantil la bandera de la Reforma Universitaria, para ondearla a favor de la privatización del sistema y la destrucción de la educación pública. Y un segundo movimiento tuvo lugar durante la transición, ahora con el liderazgo de la intelectualidad del “partido transversal” de la Concertación, cuando recogen los reclamos por “calidad” y “equidad” para desde allí justificar la plena mercadización del sistema.

Estas apuestas gatopardistas le permitieron a la elite cooptar gran parte de los reclamos hechos a la educación y despojarlos del sentido político original de su crítica. Así fue como viabilizaron la implementación de los cambios más importantes a la educación de los últimos años. La instalación del financiamiento compartido para una gran porción de la educación básica y media, la imposición progresiva del autofinanciamiento de las universidades públicas y la consolidación del sistema de créditos para el ingreso a la educación superior.

Pero nunca la estrategia de dar respuesta por arriba a reclamos hechos desde abajo ha estado exenta de riesgos. Se terminaron defraudando esperanzas que, de tanto arraigo, sostenían gran parte de la lealtad popular con el régimen. De ahí que el extendido endeudamiento y frustración ante los estrechos horizontes de realización abiertos por la educación terminaran nutriendo una crítica más amplia del orden social vigente.

La demanda por acabar con el lucro en la educación, bandera protagónica de la revuelta estudiantil de 2011, representa el fracaso del intento neoliberal por presentar como conciliables intereses que no lo son. Y aunque no significa que el movimiento haya interpretado un sentimiento anticapitalista, siendo más bien una bandera levantada por la sensación de abuso compartida por millones, abrió la venta de un problema estructural: la condición de mercancía de lo que a ojos de la mayoría es un derecho.

Eso, que suena tan obvio para algunos, constituye el aspecto de mayor radicalidad de las reivindicaciones estudiantiles, y a su vez, un golpe directo a la herencia social y política de la dictadura.



## CAPÍTULO V

### El presidente no tiene quien lo escuche

#### Gokú por la educación gratuita

No se podían seguir haciendo los plenos de federación en la Casa FECH. Éramos demasiados, no cabíamos, así que empezamos a rotar, semana tras semana, por los auditorios más grandes de cada facultad.

Al comenzar junio, la discusión en la Chile giraba en torno a dos cosas: uno, si promover una resolución del conflicto a través de una mesa de negociación o generar una mejor posición de fuerza y una resolución más participativa; y dos, la tradicional disyuntiva entre tomarse o no la Casa Central.

Salvo Ingeniería y Economía, el resto de las facultades estaba en paro. Paro que a la luz de los acontecimientos, parecía insuficiente. Pero así como nadie se resistía activamente a la posibilidad de la toma, tampoco nadie la proponía de frente. Es que tomarse la Casa Central es muy desgastante. Implica mantener y resguardar un edificio muy grande, que es patrimonio histórico, lo que requiere una alta y permanente participación estudiantil. Las últimas tomas habían terminado sostenidas por muy pocos. Nadie quería repetir esas experiencias.

La idea comenzó a hacer más sentido cuando se multiplicaron las tomas en universidades y liceos y apareció más nítida la confrontación con el Gobierno. Definimos concentrar fuerzas en dos fechas de protesta: el 16 de junio, día en el que ya los profesores habían definido movilizarse, y el 30 del mismo mes. Junio se nos ofrecía así como un gran campo de batalla para desplegar la energía y creatividad que se iba acumulando en cada sala de clases.

Cuando los colectivos, grupos políticos, mesa directiva y centros de estudiantes de la Federación decidimos empujar la toma, era muy tarde. El 9 de junio, durante la marcha de un carnaval itinerante por la educación en el centro de Santiago, una enorme columna de estudiantes avanzó decidida a las puertas de la Casa. La idea de tomarse el edificio en un

impulso colectivo de espontaneidad, sin esperar resoluciones burocráticas, se esparció en cosa de segundos en las cabezas de los manifestantes. Algunos dirigentes presentes de la Federación decidieron sumarse a ese impulso y encabezarlo, para que el edificio no quedara en manos irresponsables. Así fue como comenzó una nueva toma de la Casa Central de la Chile.

Durante los siguientes días fue validada por la gran mayoría de las carreras. Iba a ser la toma de la Casa Central más larga de la historia.

Ubicada en pleno centro de Santiago, la Casa Central es un espléndido centro de operaciones. Su Salón de Honor se transforma en una suerte de cuartel general estudiantil y los patios Bello y Domeyko ofrecen espacio para todo tipo de actividades. Allí se discute, ríe, canta y refugia. La Casa se alza imponente sobre la Alameda, y con su sobrio estilo neoclásico, destaca entre los aburridos edificios de oficinas y los mediocres centros comerciales que la circundan. Más por lo pobre del contexto que por excepcional mérito propio, parece implantada desde otro tiempo. Tiene en frente al transitado Paseo Ahumada y a un par de cuadras, el Palacio de La Moneda. Así, rodeada de ciudadanía, poder y tránsito eterno, constituye una excelente vitrina para las causas nobles.

Los estudiantes siempre hemos tenido claro su potencial. Sobre su fachada han colgado notables lienzos gigantes. “ABAJO LA LOCE”, el 2006; “NOS MEAN Y EL RECTOR DICE QUE LLUEVE”, el 2007; “AHORA ES CUANDO”, el 2008; “EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD”, el 2011. Desde su acceso se inician y finalizan marchas. Se celebran actos, mítines y conciertos. En sus salones se organizan charlas y seminarios, se celebran asambleas estudiantiles y de todo tipo de organizaciones sociales.

La escalada de tomas durante la primera mitad de junio vino acompañada de las acciones que más simpatía popular le reportaron al movimiento. A modo de lúdicas aplicaciones del principio anarquista de la “propaganda por el hecho”, una serie de iniciativas para despertar más energías en los jóvenes y captar la atención de la ciudadanía comenzaron a desplegarse espontáneamente en todo el país. Las palabras ya no bastaban. Para fortalecer la posición del movimiento estudiantil debíamos romper la indiferencia mayoritaria y forzar la adopción de posturas, en todos los establecimientos educacionales, hogares y lugares de trabajo de Chile.

El 13 de junio, por ejemplo, los estudiantes de Teatro de la Universidad de Chile pusieron en marcha la idea de correr sin parar mil 800 horas alrededor de La Moneda por la educación pública, gratuita y de calidad. Mil 800 representaba la cantidad de millones de dólares que, según sus estimaciones, le costaba al Estado financiar la educación universitaria del país.

Una semana antes presentaron la idea en el Pleno de Federación y sacaron más risas que mociones de aprobación. Pero en los paros de las facultades obtuvieron más éxito, y una fría noche de lunes partieron. No eran más de 15. Tenían su centro de operaciones en calle Agustinas, en plena vereda. Allí hacían los relevos de la carrera alrededor del cuadrante comprendido por las calles Agustinas, Teatinos, Alameda y Morandé. Al frente, en la Plaza de la Constitución, montaron una paloma de madera en la que contabilizaron las horas recorridas.

Con los días se les fueron sumando más estudiantes, jóvenes y gente común y corriente. Oficinistas, deportistas aficionados y seres humanos de las más diversas ocupaciones. En el mejor momento fueron una treintena. En el peor, dos. Pero lo lograron. Durante 75 días y de forma ininterrumpida, desafiaron al Gobierno en sus propias narices, demostrando que el movimiento haría cualquier cosa por conseguir sus objetivos.

Esa misma semana, el patio Andrés Bello de la toma de Casa Central se llenaba mañanas y tardes con jóvenes bailando Thriller, de Michael Jackson. Ensayaban la coreografía del *videoclip* una y otra vez, buscando la perfección en los movimientos de una masa que crecía todos los días, hasta que ya no cabían en el edificio.

Entre reuniones, charlas y movilizaciones, pasaba por Casa Central sólo por minutos, y nunca reparé con qué fin ensayaban ese baile, ideado por un grupo de mechones de Veterinaria de la Chile, pero ahora compuesto por jóvenes de muchos colegios e instituciones de educación superior.

El 24 de junio, el enigma se resolvió. A eso de las seis de la tarde, cuando la gente comenzaba a salir de sus trabajos, *zombies* surgieron de las micros y las estaciones céntricas del metro en dirección a la Plaza Bulnes, frente a la fachada sur de La Moneda. Y allí, “porque la educación de mercado produce *zombies*”, bajo un cielo nublado y el pasto húmedo por la lluvia del invierno, más de mil jóvenes bailaron el “Thriller por la Educación” frente al principal edificio del Estado. Los acompañaron otros cientos de

transeúntes, que hicieron un alto en medio de su agotadora rutina para admirar la creatividad invertida en despertar su preocupación por la causa estudiantil.

Cuatro días después, y para protestar por el adelanto de las vacaciones de invierno decretado por el Gobierno, otro millar de estudiantes representó un masivo “suicidio por la educación” en pleno Paseo Ahumada. Entre zapaterías, casas de cambio y cafés con pierna, simularon morir de endeudamiento y falta de oportunidades. Iban provistos de lloronas y vestidos de luto, y los más motivados se derramaron ketchup en cuellos y muñecas. “Ell@s murieron esperando una buena educación”, explicaba el cartel de uno que había muerto de pie.

En julio la febril creatividad situacionista del movimiento no paró, a pesar del frío, la represión y la indolencia de las autoridades.

Cientos bailaron coreografías de Lady Gaga en la Plaza de Armas de Santiago, en el “Gagazo por la Educación”. Allí mismo, otros celebraron un multitudinario *flashmob* representando a todos los superhéroes de la cultura popular exigiendo educación para las necesidades del pueblo. Y para rematar, otros tantos desafiaron a Piñera y sus secuaces con enormes “Genkidamas por la Educación” convocadas por Gokú en varias ciudades del país, unas hechas de papel maché y tubos de pevecé, otras de globos y bolsas plásticas. En Santiago lanzaron la Genkidama a la misma puerta de La Moneda.

Carabineros no supo cómo reaccionar. El acto escapaba de todos sus esquemas.

## **Enredos internos**

En junio se desencadenaron un conjunto de hechos que llevarían la revuelta a su punto más candente a fines de ese mes. Lo iniciamos con una multitudinaria convocatoria a la Movilización Nacional del 16. Por lo bajo 80 mil personas marcharon en Santiago y otras 80 mil en el resto del país, según lo que estimamos la Confech, el Colegio de Profesores y los estudiantes secundarios. Fue una de las movilizaciones más masivas bajo los nuevos gobiernos civiles y la primera en el año que efectivamente logró remecer a la sociedad chilena y asestar un golpe al Gobierno.

En la Alameda se leía:

- Quería darle educación a mi hijo... sólo le di una deuda

- Los presidentes y políticos estudiaron gratis. ¿Por qué tú y yo, no? ¡Justicia!
- Soy profe: si pago la micro y el crédito no como

Por esos días, nuestra principal ocupación como autónomos era trabajar por la unión de las demandas universitarias del mundo público y privado, e incrementar las acciones de propaganda. Para lo primero impulsamos desde las federaciones encuentros de unificación de petitorios en Santiago y Valparaíso y para lo segundo emprendimos una serie de acciones directas en partidos políticos como la UDI y el PS, organismos de Estado y medios de comunicación. Pero no teníamos la capacidad de resolver el que se asomaba como el principal dilema del movimiento en ese momento: su falta de unidad política.

El 16 fue enfrentado con gran unidad en la acción, pero con baja unidad de sentido y dirección. Convocamos universitarios del sistema tradicional y el privado, profesores, secundarios y trabajadores de la educación. Pero planteamos cosas distintas, no sólo entre cada organización, sino al interior incluso de cada una de ellas. Para la gente de a pie fueron diferencias apenas perceptibles. También para los medios de comunicación. Pero no pasaron desapercibidas para el activo político del movimiento ni menos para el Gobierno.

Tras la marcha, en un vano intento por aplacar este desorden, los dirigentes universitarios comunistas decidieron interpelar al ministerio a través de una carta firmada exclusivamente por las presidencias de las federaciones que ellos controlaban y el Colegio de Profesores. Intentaban enrielar la protesta y demostrar ante La Moneda capacidad de conducir el conflicto hacia una resolución negociada. Lo primero quedó claro, pero lo segundo no hizo más que agudizar las discrepancias al interior del movimiento.

Para la sesión de la Confech que celebramos el 25 de junio en el campus santiaguino Vicuña Mackenna de la Universidad Técnica Federico Santa María, las tensiones internas habían alcanzado una magnitud que impedía seguir eludiéndolas. Estaban cruzadas por alegatos poco representativos de las contradicciones reales que vivía el movimiento, como el supuesto déficit de consideración que tenían las realidades regionales y “las demandas de las bases” en las vocerías. Excusas *ad hoc* que unos utilizaban para atacar a otros y otros a unos.

Los dilemas que nos conflictuaban eran otros. ¿Queríamos movilizar nuestras fuerzas para optimizar la lógica subsidiaria que entrega la educación al mercado o para

romperla y defender un paradigma de derechos? ¿Teníamos o no la fuerza para enfrentar al Gobierno en una negociación? ¿En qué términos?

Las tensiones sólo podían superarse, en el corto plazo, con un reacomodo provisorio de los equilibrios políticos en la mesa ejecutiva y las vocerías, y en el mediano, con el esclarecimiento definitivo de las relaciones de fuerza entre las distintas tesis que discutían al interior del movimiento.

Hay mucho de mito sobre cómo funciona políticamente el movimiento estudiantil y en particular la Confech. Tanto en las aproximaciones que confundiendo deseos con realidad ven en la acción estudiantil el imperio del asambleísmo más puro y la fanática aplicación de los principios de la democracia directa, como en quienes tratando que la realidad toda calce con su pesimismo existencial creen que los estudiantes se organizan y actúan con las mismas prácticas viciosas de la política tradicional. Para el desconcierto de soñadores y agoreros, no es ni lo uno ni lo otro, sino un poco de ambos.

La institucionalidad estudiantil universitaria –que existía hasta 2011 como tal sólo en las universidades tradicionales- es una combinación, no siempre armoniosa, de formas de democracia representativa, directa y participativa.

Las primeras imperan en su estructura, compuesta por federaciones electas por voto universal en cada universidad y agrupadas en la Confech. La delegación total de la toma de decisiones en representantes, sean federaciones o voceros provisorios, tiende a primar en los espacios más desorganizados o en donde predominan dinámicas caudillistas, pero se extiende a casi todas las universidades en “tiempo de paz”, es decir, cuando la base estudiantil se ausenta de las deliberaciones y la burocracia actúa por sí misma.

Las formas directas y participativas, es decir, cuando los representados sólo delegan parcialmente su poder y los representantes lo son no de posiciones propias sino colectivas, predominan en los espacios más politizados, y se generalizan en “tiempos de guerra”; cuando la base estudiantil se hace presente en las deliberaciones y puja por incidir en el curso de los procesos de los que forma parte.

Aún cuando la dinámica entre representantes y representados explica parte del funcionamiento de la Confech, no es su único ni principal motor. Es la confrontación entre las agrupaciones y corrientes políticas lo que, tanto desde el seno de las organizaciones

locales como nacionales del estudiantado y sobre condiciones que no controla en su totalidad, le da cierta dirección a la energía estudiantil y movimiento a su burocracia.

En la Confech también hay “bancadas”, pero no deciden por sí y ante sí lo que hacen, como los parlamentarios, descansando en el cheque en blanco que creen significa el voto. Cada movimiento debe ganar en las bases de cada universidad la posición y actitud que el movimiento estudiantil debe asumir ante la sociedad y el Estado, las reivindicaciones que defender y las acciones que emprender. Sólo así las posiciones adquieren legitimidad en la Confech. Fruto de esta dinámica y no sólo del devenir espontáneo de la institucionalidad formal, es que el movimiento se puede preciar de ser eso y no una entidad estanca. No hay historicidad del movimiento estudiantil, así como de ningún movimiento social, fuera de sus elementos organizados.

Durante el 2011, las federaciones y corrientes que las conducían conformaban a grandes rasgos dos bandos. De un lado una alianza muy heterogénea entre colectivos apartidistas de izquierda, en la que participaban libertarios, colectivos autodenominados “revolucionarios”, autónomos y muchos independientes de izquierda. Las matrices políticas y los referentes históricos e ideológicos nos dividían, pero nos unía la opción por la movilización social y el distanciamiento de la política oficial.

La Moneda y la prensa popularizaron el término “ultra” para referirse a todos los dirigentes que no pertenecieran a la Concertación o las Juventudes Comunistas (JJCC). Pero nada tenía que ver con la realidad, aunque algunos aceptaron cargar el despectivo cartel con gusto. En los hechos, nadie defendía una línea ultraizquierdista que validara, por ejemplo, la violencia política o hacer del movimiento una insurrección que se tomara el poder. El tono más “duro” de muchos no era más que un matiz discursivo. El rasgo más común, aunque otros elementos afirmativos no faltaran, era el apartidismo.

Del otro lado estaba la entente compuesta por las JJCC y las juventudes de los partidos de la Concertación. Los unía la política de alianzas de sus respectivas orgánicas, que al plano social se traducían en agitar la movilización para canalizarla a través de la acción parlamentaria de sus partidos.

Cada bando ejercía influencia oscilante sobre los independientes. El primero era mayoritario, pero carecía de unidad política, iniciativa y capacidad dirigente, mientras que el segundo, aunque numéricamente minoritario y carente también de una iniciativa

dirigente clara –o más bien, que reconociera ante las bases-, contrapesaba esa merma con el control sobre las principales vocerías.

Durante el curso de la movilización ningún bando pudo imponer sus ideas y orientación a la movilización. Teníamos mucha heterogeneidad interna y baja capacidad de llegar a acuerdos y planes de acción de mediano plazo. Las posiciones de mayoría eran siempre circunstanciales y frágiles lo cual nos llevó a estar durante gran parte del año en un empate paralizante.

Los autónomos nos encontrábamos en el primer bando, pero en una situación compleja. Contribuimos desde principios de la década -entonces como Surda, luego desde los colectivos autonomistas- a constituir y conducir el polo de la izquierda social, para contrapesar tanto el estrategismo del izquierdismo más infantil como el entreguismo de la izquierda tradicional. Pero los últimos años habíamos retrocedido hasta una posición secundaria. Nos habíamos replegado al trabajo de base en carreras y facultades y en el plano nacional actuábamos desde un reducido puñado de dirigencias federativas. Nuestro margen de incidencia era limitado.

Los dilemas que animaban las disputas del activo político de la Confech se daban en dos planos. El de las reivindicaciones y el de la táctica. Y en ambos la tensión no era otra que la clásica entre actuar en la medida de lo posible o ampliar lo políticamente posible.

En el plano reivindicativo, éramos cada vez más lo que pensábamos que las demandas debían ya no sólo responder a las necesidades inmediatas del estudiantado, sino hacer presentes ante el conjunto de la sociedad las deudas democráticas de la transición y denunciar los aspectos esenciales del injusto modelo educativo, no sólo sus perversiones. Apuntar nuestros dardos no sólo al déficit en la cobertura de becas o a la tasa de interés de los créditos, sino a la lógica subsidiaria misma. Había por lo tanto que exigir el fin efectivo del lucro en la educación, no limitarnos a su regulación, y defender el principio de gratuidad universal, no focalizada, de la educación pública.

No se trataba, eso sí, de apostar al todo o nada. Eso, más allá de los discursos, todos lo tenían claro. Si luchábamos lo hacíamos por conquistar beneficios concretos e inmediatos para los estudiantes, la educación pública y la sociedad. Pero seríamos los estudiantes, la educación pública y la sociedad quienes juzgaríamos esos beneficios como tales. No nos lanzaríamos sobre el primer ofertón que nos tirasen.



En el discurso esto era lo que sostenía la mayoría, pero a la hora de plasmarlo en la realidad coincidíamos sólo con algunos de nuestros aliados. Una gran mayoría, en los extremos izquierdo y derecho del movimiento, se contentaba con las consignas. Los pocos concertacionistas se resistían por diferencias ideológicas y a los comunistas el contenido de las reivindicaciones les tenía sin mucho cuidado. Un petitorio tibio y ambiguo hacía más moldeables los parámetros de éxito del movimiento.

En el plano táctico, en tanto, había que convertir la revuelta en un movimiento decididamente crítico de la política dominante, que no le concediera una legitimidad natural a su voluntad de intermediar entre nuestras demandas y el Estado. La crítica debía ser implacable tanto hacia la derecha como a los sectores conservadores de la Concertación. Pero a la vez, debía afirmar una política distinta.

La salida del conflicto no podía reproducir las tramposas formas de procesar los problemas sociales empleadas durante la transición. Debíamos conseguir que lo que entonces se asomaba como nuestro principal capital, el respaldo social, se pusiera en juego en la resolución del conflicto, para mejorar nuestra posición de fuerza y perfilar un modo democrático de resolución de disensos sociales. Debía haber algún tipo de pronunciamiento ciudadano. Por eso propusimos levantar la bandera de un Plebiscito Nacional por la Educación.

El contenido de las reivindicaciones nos dividía, pero las divergencias sobre el discurso y la táctica además nos congelaban. En lo discursivo discrepábamos con todas las juventudes de los partidos. Claro, validar un discurso y una praxis así de críticos con la política oficial debilitaba sus propias bases de sustentación. Entorpecía, además, su intento por conciliar la agenda del movimiento con la de sus parlamentarios.

Había acuerdo con el resto de la izquierda y los independientes, aunque no sin matices. La crítica debía ser política, orientarse a fortalecer nuestra posición y a debilitar la de nuestros adversarios. No podía levantarse contra la política o la institucionalidad en abstracto, por el sólo hecho de ser. Ni en genérico, sin reconocer distinciones. En lugar de desordenar las líneas del sistema político ello produciría un cierre defensivo de sus filas. Mientras que para el movimiento era pisarse la cola.

Cualquier resolución del conflicto iba a implicar en algún grado un procesamiento institucional de algunas de sus aristas. “¡No le estamos exigiendo educación gratuita, fin al

lucro y democratización al viejito pascuero, sino al Estado de Chile!”, solíamos decirles a los más incendiarios. Lo relevante era construir una situación y posición de fuerza tal que el Gobierno se viera obligado a hacer ciertas concesiones, sin nosotros tener que ceder en la dirección de las reformas que exigíamos, aunque sí quizá en la gradualidad.

En síntesis: no debíamos dar ningún paso que significara reducir la amplitud de la alianza social que sustentaba al movimiento. Por el contrario, debíamos hacer todo lo imaginable por extenderla. Ahí anidaba su radicalidad.

Esta convicción teníamos en mente cada vez que aparecía otro de los temas polémicos: la legitimidad de la violencia como herramienta de movilización. Para la izquierda estudiantil, sobre todo la universitaria, siempre ha sido un problema. Y este año no dejó de serlo.

Pensábamos que el movimiento y sus voceros debían ser implacables en oponer al discurso policial del Gobierno una denuncia sobre el origen social de la violencia. Pero no podíamos ser menos implacables en negar que fuera una estrategia del movimiento estudiantil y en condenarla abiertamente cuando no suponía autodefensa de manifestantes sino pura y simple destrucción. Aquí, de nuevo, no comulgábamos con nuestros aliados que se ubicaban más a la izquierda.

Todos estos dilemas eran fuentes de acaloradas y eternas discusiones, tanto entre los bandos de la Confech como al interior de cada una de las facultades y carreras. Lo era también entre nosotros y parte importante de nuestro marco de alianzas. Y ese 25 de junio las relaciones de fuerza entre cada postura se verían reflejadas en la modificación de los integrantes de la mesa ejecutiva, por lo tanto, de las vocerías.

No iba a ser cosa fácil. Las líneas de encuentro y desencuentro ya no aparecían todo lo nítidas que estaban cuando la movilización sólo iba hacia delante. En la decisión, además, se vería comprometido un aspecto fundamental del proceso.

Hasta entonces los miembros de la mesa ejecutiva se definían sin más criterio que el cuoteo político. Y más encima estaba mal aplicado. En efecto, el sector partidista, minoritario en la plenaria, estaba sobre-representado en la mesa. Había cometido además demasiadas torpezas en los últimos meses. A primera vista el problema no revestía demasiada complejidad. Cualquiera fuese el criterio que decidiéramos aplicar nuestro sector obtendría la mayoría. El más razonable y por el que nos inclinamos fue el criterio regional,

es decir, que todos los zonales (norte, costa, sur y metropolitano) tuvieran una representación equitativa en la mesa.

Estimábamos que la única consideración extra que debíamos tener era que cada zonal eligiera a sus representantes. Era lo más lógico y correcto. Pensábamos que el abordaje de nuestro bando a la mesa ejecutiva no podía llegar al punto de dejar al otro sin pan ni pedazo. Ni menos poner en peligro la permanencia de las dos principales vocerías, representadas por la FECH y la FEUC. Ya el hecho de que el cambio de mesa se discutiera en las bases y estuviera en tabla en esa sesión significaba una derrota para los comunistas y la Concertación.

Nuestros aliados no pensaban de la misma forma y algunos levantaron una moción distinta: que los representantes no los escogiera cada zonal sino que cada federación los votara a todos. De ese modo, decían, revertíamos la correlación en el único zonal que nos era desfavorable, el metropolitano, para conseguir así el control total de la mesa. La FECH podía seguir, era descabellado sacarla y además estábamos nosotros en la vicepresidencia. Pero no la FEUC.

Esta moción nos pareció un despropósito, pero se impuso. Giorgio Jackson, entonces presidente de la FEUC, era un liderazgo conocido y respetado. No era del gusto de los sectores más radicales de las bases de cada federación, por su posición moderada y representativa de la universidad con los estudiantes más privilegiados del CRUCH. Pero su vocería era clave. Representaba a un sector real de la sociedad, más pasivo quizá, pero mayoritario; sector al cual debíamos sumar y no aislar. Por su identidad política, además, era capaz de ensanchar las espaldas del movimiento. Si bien no mantenía relaciones orgánicas con ninguno de los partidos de la Concertación, sí pertenecía a su cultura política y participaba en el referente que sus juventudes habían creado y luego perdido en la Universidad Católica. Una parte importante del apoyo social al movimiento provenía en efecto del “concertacionismo desilusionado”. Había que tenerlo con nosotros, no en contra.

Lo relevante, y posible, sosteníamos, era ganar nuestras posiciones desde la base estudiantil y ser hegemónicos allí y en la burocracia. Si lo conseguíamos, mantener a la FEUC en la vocería no era una concesión, sino un triunfo en la medida que lográbamos incorporar a un sector tradicionalmente reacio a la movilización y a la crítica del sistema político. Aislar a la FEUC era ser derrotados.

Nos dimos cuenta que la decisión que tomáramos no iba a ser trivial. Aunque pocos, nuestros votos e influencias podían inclinar la balanza para uno u otro lado.

Decidimos no plegarnos a la decisión adoptada por nuestros aliados, a sabiendas de que implicaría romper si no con la mayoría, con parte importante de ellos. Votamos por la fórmula según la cual cada zonal elegía a sus representantes a la mesa ejecutiva. Con ello nuestro sector conseguía a todos los representantes de los zonales norte, costa y sur. Mientras en el metropolitano bajaban las federaciones de la Usach y la Santa María, pero se mantenían la FECH y la FEUC.

Con nuestros votos esta fórmula resultó vencedora. Ahora la mesa representaba la correlación real de fuerzas de la Confech, manteniéndose la FEUC como federación vocera e integrante de la mesa ejecutiva.

La decisión desató una serie de consecuencias. La semana siguiente fuimos desplazados de la representación del zonal costa y duramente recriminados por la facción más dura de nuestros ex aliados. En adelante, de hecho, esa facción nos declarararía la guerra y nosotros a ellos. Nuestro balance, sin embargo, fue positivo. Las vocerías eran las que correspondían y quedamos en una mejor posición de fuerza.

Aunque excomulgados por las facciones más dogmáticas a nuestra izquierda y derecha, ahora podíamos movernos con más libertad y jugar a nuestro favor la posición de “bisagra”. En adelante, hicimos valer más nuestra limitada fuerza sin renunciar a la línea que nos habíamos trazado. Los dolores de cabeza y malos ratos valieron la pena.

## **El evangelio según San Lucro**

A la movilización del 16 de junio Lavín respondió con una nueva carta. Era igual de desprolija que las anteriores, como redactada a la rápida y para los medios de comunicación. Pero explicitaba la voluntad de “avanzar con ustedes en una serie de temas, considerando entre otros los siguientes compromisos”.

Primero, destinar 75 millones de dólares a un fondo de revitalización de las universidades públicas y aumentar los aportes fiscales directos en la misma proporción que el reajuste de sueldos del sector público. Segundo, renegociar las deudas de los morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Tercero, reducir las tasas de interés del

Crédito con aval del Estado. Cuarto, velar por el cumplimiento de la ley que prohíbe a las universidades ser entidades con fines de lucro. Quinto, hacer valer la libertad de asociación en todos los establecimientos educacionales. Sexto, continuar el trabajo con el Colegio de Profesores sobre las deudas que el Estado tiene con el magisterio. Y séptimo, estudiar la extensión de la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE para los 365 días del año.

“Estoy convencido –sentenciaba Lavín al cerrar- que estos planteamientos sirven de base para la creación de una Mesa de Trabajo que permita normalizar las actividades académicas y que en un plazo de 90 días contribuya a enfrentar los temas planteados y a buscar consensos respecto a aquellas materias que deberá decidir el Congreso Nacional”.

Era un ofertón de reluciente superficie pero oscuro contenido, presentado a la opinión pública como un gran esfuerzo del Gobierno que todo buen ciudadano debía reconocer como tal y aceptar. Con la insuficiencia de algunas medidas y la discordancia entre su contenido y nuestras demandas pudimos apreciar la primera muestra del autoritario optimismo del Mineduc. Los recursos ofrecidos a las universidades públicas eran insignificantes y estaban comprometidos desde antes de iniciarse el conflicto.

Por esos mismos días, avanzaban las tratativas para traspasar a Alexis Sánchez del Udinese al Barcelona por una suma similar. Con suerte alcanzaba para renovar el stock de plumones para pizarras, le planteamos a los rectores. No había fórmulas concretas para abordar las buenas intenciones declaradas, por ejemplo, respecto a respetar la libertad de asociación o bajar tasas de interés. Ni mecanismos para hacer efectiva la volátil idea de hacer valer la ley que prohibía el lucro en las universidades.

Lo más oscuro, sin embargo, no estaba ni en lo tacaño de la propuesta ni en su letra chica. Lo que la volvía una burla era lo que callaba.

Mientras Lavín publicitaba su ofertón recorriendo la televisión y los diarios cual vendedor de micro promocionando mercancías milagrosas, los operadores del Gobierno recorrían el Congreso haciendo *lobby* para viabilizar una agenda que apuntaba en la dirección contraria. Acabar con el FSCU y fundirlo en un solo crédito universal, abrir los subsidios estatales a todo tipo de institución, sin importar si fuesen públicas o privadas, lucrarán o no. Reemplazar los gobiernos universitarios pseudo democráticos por gobiernos corporativos y crear un nuevo estatuto docente que precarizara la labor del magisterio y la educación municipalizada.

A medida que el cuestionamiento al lucro tomaba fuerza, en tanto, Lavín lo evadía, consciente de que sincerar su postura complicaría la apertura del espacio de negociación a través el cual pretendía poner fin a las movilizaciones. Pero sus correligionarios no se contenían. Si algo les quitaba el sueño no era cómo satisfacer engañosamente las demandas estudiantiles, sino lograr tranquilizar a los empresarios y fervientes neoliberales que veían peligrar los balances de sus negocios y la fidelidad a sus doctrinas.

La performance de Lavín vino acompañada por un coro furibundo de voces que profesaban las bondades de sacar ganancias de la educación y reducir la educación pública a su mínima expresión, mientras auguraban el fuego eterno para quienes osaran sacar la educación del reino del mercado para hundirlo en el populismo de los derechos.

La senadora designada y ex vocera de Gobierno Ena von Baer asumió por esos días la misión de ser la implacable representante en la tierra de este evangelio.

Hasta el día de hoy me pregunto si en algún momento Lavín imaginó que no nos daríamos cuenta de su doble juego. Era cosa de escuchar a los parlamentarios del oficialismo, leer las editoriales de los diarios y prestar un mínimo de oreja al griterío de Libertad y Desarrollo para saber que la derecha no tenía ningún ánimo de abrirse verdaderamente a revisar las demandas estudiantiles ni de sacar el acelerador de su propia agenda. Lo que Lavín pretendía, con el mismo sentido del espectáculo de antaño, era conducir al movimiento a una trampa en la que él posaba ante el país como domador de bestias y nosotros como niños que reconocían haberse pasado de la raya con sus jugarretas.

La oferta del ministro fue rechazada por unanimidad en la Confech. Se la juzgó como demostración de sordera y obstinación política. Los operadores del Partido Comunista y la Concertación no consiguieron ni que el ministerio se abriera a presentar una propuesta que el movimiento pudiera sopesar, ni que el movimiento se cuadrara detrás de un petitorio pensado en la medida de lo posible.

- Lo que más pedían era que se reiniciaran las clases –cuenta un asistente a estas conversaciones- pero no comprometían con nada de vuelta. En un momento prometieron acabar con el financiamiento compartido, con el CAE y garantizar la gratuidad del 60 por ciento más pobre. Pero no hicieron nada por las dos primeras cosas y por la tercera ofrecieron becas que ni siquiera cubrían la brecha entre el arancel de referencia y el real.

En ese contexto, ratificamos la convocatoria al Paro Nacional del 30 de junio y más universidades y colegios se fueron a toma.

El 24 de junio los autónomos decidimos sumar un granito más a la tormenta de arena que azotaba al ministerio. Dirigentes de la Chile, la Católica de Valparaíso y la Central llevamos un requerimiento a la Contraloría General de la República para que investigara el “eventual conflicto de intereses e inhabilidad vigente” del ministro Joaquín Lavín por los intereses patrimoniales que lo ataban a la Universidad del Desarrollo a través de la sociedad inmobiliaria Ainavillo S.A. Solicitamos transparentar los balances financieros de dicha institución, única forma de establecer si hubo lucro o no con ella.

- Para nosotros, al igual que para amplios sectores de la sociedad, el ministro Lavín no tiene autoridad política ni moral para desempeñar su cargo por haberse enriquecido a través de una inmobiliaria vinculada con la Universidad del Desarrollo –señalamos tras dejar los papeles.

Lavín ya se había tropezado el 12 de junio, cuando reconoció en el programa Tolerancia Cero haber retirado utilidades de su inversión en la Universidad del Desarrollo. El propio José Piñera, hermano del Presidente, se refirió con dureza a las declaraciones del ministro esa noche.

- Con amistad cívica, pero más amigo de la verdad: si J. Lavín obtuvo utilidades en UDD (dijo eso en TO?), no debió aceptar ser Min Educación (sic) –escribió desde su cuenta de Twitter.

El revuelo se armó una semana después, cuando el Contralor le puso un plazo de 10 días hábiles a Lavín para que hiciera pública la información solicitada. Respondió fuera de plazo, limitándose a repetir los datos que ya había puesto en su declaración de patrimonio cuando fue designado ministro. Pero la prensa le dio amplia cobertura. La de oposición, limitada como es sabido a un puñado de diarios electrónicos. Pero también la oficialista, sobre todo La Tercera. Lavín no era un intocable. Al menos no para un sector de la derecha.

Tras el intento de diálogo frustrado, una dureza doctrinal vino a reemplazar las declaraciones de buenas intenciones y el tono cínicamente conciliador hasta el minuto utilizado por Lavín. Al endurecimiento en el discurso se sumó un endurecimiento en el modo de buscar el fin del conflicto. El 28 de junio anunció que el inicio de las vacaciones de invierno se adelantaba para el día siguiente y las clases del segundo semestre se

extendían hasta el 14 de enero en todos los liceos que permanecieran en toma. Esperaba amedrentar a los secundarios y quebrarlos por dentro.

Por supuesto, la amenaza del ministro no generó ninguna consecuencia significativa. La mayoría de los establecimientos en toma continuaron en ese estado varias semanas más.

El 29 de junio, a menos de 24 horas antes del nuevo paro, el Gobierno se llevaría un nuevo trago amargo y nosotros un momentáneo pero necesario espaldarazo. El Consejo de Rectores, en su pleno extraordinario, resolvió no adherir a la propuesta de reforma presentada por el Mineduc. Había mediado un intenso trabajo de persuasión desde la Confech hacia los rectores, en reuniones privadas y eternos debates en los consejos académicos de cada universidad. No habían recursos nuevos en la oferta del Gobierno, y los que habían, a la larga beneficiaban a la educación privada, argumentamos. Si se allanaban a respaldarla, nos forzarían a dirigir contra ellos también la movilización. Los rectores entendieron el mensaje. Aunque ayudaron también las profundas diferencias que tenían entre ellos: no estaban de acuerdo en cómo repartirse las migajas prometidas.

Al creciente cinismo del Gobierno respondimos en la calle el jueves 30 de junio, con una movilización dos veces más grande que la del 16. 200 mil personas marcharon en Santiago, 40 mil en Valparaíso, 30 mil en Concepción, 18 mil en Temuco, 10 mil en Antofagasta y así en el resto del país, hasta sumar 380 mil participantes en todo Chile.

Nunca había visto la Alameda tan repleta. Comenzamos antes de la hora acordada, porque ya no había espacio para los que seguían llegando. Desde el medio no se veía ni la cabeza ni la cola. Miles se quedaron sin marchar, porque cuando la columna llegó al final, el punto de inicio seguía repleto. Ocupamos en todo momento las dos calzadas de la avenida, hasta conformar una sola columna humana entre el Parque Bustamante y República. Los pocos espacios abiertos en medio dibujaban verdaderos teatros ambulantes, que giraban sobre sí mismos mientras apreciaban el pintoresco despliegue de murgas, *flashmobs*, batucadas y los lienzos más creativos.

- El Gobierno pasa plata pa' La Polar y no para Educar!
- ¿Estudio o como?
- 5 años estudiando, 15 pagando
- Estado, ¿dónde has estado?



- Si adelantan las vacaciones, ¿por qué no también las elecciones?

Tan grande fue la marcha, que a diferencia de las típicas, a las que asisten personas de más o menos la misma edad, extracción socioeconómica, estilo y orientación política, habían muchos mundos contenidos en ella. Niños, adultos y viejos no eran excéntricas excepciones sino tan protagonistas como los jóvenes. Familias completas marchaban al lado de barras de fútbol, *punkies* de metaleros, académicos e intelectuales de “wachiturros” y hiphoperos. Todos por una educación que les permitiera encontrarse como iguales y los tratara como personas, no como fuentes desechables de dinero. Que ofreciera valores más dignos que la obediencia y la resignación. Y horizontes de realización más amplios y humanos que la monótona sumisión a trabajos sin sentido.

Tal fue la magnitud que con esta movilización alcanzó la revuelta que a partir de entonces nadie pudo actuar como se lo dictaba la costumbre.

Los grandes medios ya no podían esconder su importancia. Las mentes mediáticas más lúcidas, de hecho, tan pronto como la movilización fue objeto de *rating* torcieron en 180 grados las líneas editoriales para cambiar la condena por la indagación en sus razones y aspectos más sabrosos, como las historias de vida de sus dirigentes o el origen de sus creativas formas de manifestación.

Los carabineros ya no podían reprimir tan fácilmente. La cantidad de manifestantes sobrepasaba las capacidades de sus técnicas de dispersión, al tiempo que aumentaba la discusión pública sobre la validez de sus métodos.

Los políticos ya no podían eludir sus responsabilidades con impunidad. Las frases hechas para no referirse al problema educacional y las demandas estudiantiles eran atrapadas por los periodistas como mentiras de niños, y las maniobras para evadir la despiadada crítica que caía sobre la política dominante condenadas por la ciudadanía.

Y los estudiantes sospechamos que tampoco podíamos seguir actuando con liviandad. Las energías que habíamos desatado eran enormes al lado de la pequeñez de nuestras peleas internas. Parte importante de la sociedad comenzaba a recobrar esa esperanza en tiempos mejores que la tacaña transición había sepultado. Y veía en todos nosotros la posibilidad de que las cosas empezaran a cambiar y que en algún grado ese cambio tocara sus vidas.

El Gobierno también comprendió que debía introducir ajustes a su estrategia de desarticulación del conflicto. No sólo su plan no estaba dando el ancho. Estaba haciendo el ridículo. Los sucesivos intentos de Lavín por sentarnos fracasaron. Ahora, más encima, logramos instalar que no tenía autoridad para resolver el conflicto y que el Gobierno se mantenía indolente. Tras la marcha del 30 insistió en su invitación al diálogo, pero no presentó nada nuevo. La contra respuesta gubernamental a nuestra última demostración de fuerza la haría el propio Piñera.

Los primeros días del mes de julio, los periodistas de educación y los intentos de asesores del Mineduc ya lo comentaban. Se venía un gran anuncio. Se venía LA propuesta que pondría fin al conflicto. La estaba trabajando un amplio y selecto grupo de expertos coordinados por el ministerio y sería comunicada por el propio Presidente de la República. Con fanfarria y pomposas palabras, como le gusta.

El día elegido fue el martes 5.

Esperábamos una conferencia de prensa, pero Piñera quiso comunicarla de manera simultánea en todos los canales de televisión abierta por Cadena Nacional.

El evento nos pilló habiendo citado a pleno de federación para esa tarde en la sede Vicuña Mackenna de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Decidimos acortar la tabla y proyectar el anuncio en la pizarra del auditorio, donde ya llevábamos discutiendo unas dos horas.

Lo que el Presidente quería anunciar era la implementación del Gran Acuerdo Nacional por la Educación. El GANE, como él mismo se preocupó de especificar durante su intervención. Un paquete de medidas sobre acceso, financiamiento y aseguramiento de la calidad de la educación general y superior que pretendía destrabar el conflicto estudiantil. Lo sostenía económicamente el Fondo para la Educación “FE” e ideológicamente el principio según el cual promover “el esfuerzo y la libertad individual” era la vía para atacar los déficits de “calidad y equidad” en la educación.

Pero el GANE no tenía nada de grande ni de acuerdo. No especificaba si el FE era un aumento del presupuesto de educación o un fondo de inversión que entregara intereses. El 60 por ciento de sus recursos ya estaban comprometidos antes para el incremento de la subvención escolar y la mayor parte del resto se gastaría en un aumento del subsidio a la

demanda vía nuevas becas. Se formuló sin considerar las demandas estudiantiles ni las de los rectores de las universidades públicas.

Lo novedoso del anuncio se agotaba en las referencias a la ideología de la competencia y a la religión subyacentes a sus etiquetas y a su notable despliegue comunicacional. Tan vacío fue el anuncio, que lo más recordado fue la presencia impávida de Lavín detrás de Piñera, decorando la puesta en escena como si fuera un gomero o un cuadro.

En efecto, el GANE no pretendía ser una “nueva” propuesta para el movimiento estudiantil. No había nada que Lavín no hubiese prometido antes. Lo que el Gobierno pretendía era revertir el alto rechazo social a su gestión y la presión política en que eso se traducía, corrigiendo la idea de que no estaba haciendo nada por solucionar el conflicto y mejorar la educación. Para lograrlo no debía *efectivamente* solucionar el conflicto y mejorar la educación, le bastaba instalar “la idea” de que lo estaba haciendo. El GANE no era más que una maniobra comunicacional.

Pero no por ser comunicacional limitaba su significado a lo que se podía ver por televisión. El mensaje al movimiento y sus aliados era claro. En el pleno, todos imaginamos leer lo mismo de los labios de Piñera:

- Esta es nuestra última oferta, pendejos. Si no la quieren, váyanse al diablo.

La envergadura de la decisión política tomada por el Gobierno estaba lejos de agotarse en el GANE. Su presentación en sociedad se completó el 18 de julio, con la salida de Joaquín Lavín del Mineduc y su reemplazo por Felipe Bulnes.

Bulnes llegaba con el sello que se había forjado como saliente ministro de Justicia y protegido de los poderes de la derecha liberal. Se suponía un liberal en serio, independiente, más inclinado al entendimiento que a la imposición y con importantes vínculos con la oposición a través de la Democracia Cristiana. Si se quiere, lo más opuesto al propio Lavín dentro de la derecha. Ese era el perfil con el que se presentaba.

Sin embargo, el Gobierno no lo había puesto a la cabeza del Mineduc para que hiciera gala de su trayectoria. Entonces no lo sabíamos, pero ese 18 de julio se iniciaba una nueva etapa del conflicto. Una etapa en la que la iniciativa no estaría ya de nuestro lado sino del lado de La Moneda.

## **CAPÍTULO VI**

### **La política aturdida**

#### **La pataleta de Bitar**

Cuando políticos y “expertos” repiten hasta el cansancio –nuestro, claro- que la gratuidad de la educación es “regresiva” o que los créditos universitarios quieren dar “igualdad de oportunidades”, es inevitable no recordar los cuentos que nos relataban de niños para enseñarnos cómo comportarnos. Que no podíamos tomar Coca Cola después de comer Peta-Zetas porque nos iba a explotar el estómago; que el Viejito Pascuero, como viajaba en trineo, no podía traernos todos los regalos que se nos ocurrieran. Y así.

Los cuentos para niños y las ideas dominantes sobre educación en Chile tienen algo en común. Ambas son en su mayoría falsas. La diferencia, claro, está en que por más falsas que sean los primeros, se difunden con objetivos nobles. Evitar que en la etapa más importante de nuestro crecimiento y formación de hábitos nos alimentemos en base a basura o crezcamos como consentidos, por ejemplo. La nobleza de las segundas, en cambio, merece ser puesta en duda.

En eso estaba pensando cuando al estudio de CNN Chile entró Sergio Bitar. El ex ministro de Educación y Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos y militante fundador del Partido Por la Democracia (PPD) venía confiado y dado a la broma. Al otro extremo de la mesa estaba el economista Joseph Ramos, más serio, como corresponde supuse a un ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero también un tanto desconfiado.

La entrevista era conducida por Ramón Ulloa, el periodista preferido de las mamás de Chile y pronto de los estudiantes –mortal combinación, hay que decir- y la motivaban las demandas del movimiento estudiantil, en particular, la de abolir el Crédito con aval del Estado, el CAE, por el grosero endeudamiento que produce en las familias, el desfaldo que significa para el Estado y el grotesco festín que con todo eso se dan los bancos.

Bitar fue el primero en intervenir, pero antes de comenzar, Ulloa le recordó a él y a la audiencia que la promulgación del CAE en 2005 llevaba su firma, para luego preguntarle qué le parecía la situación en la que dicha medida había derivado.

El ex ministro respondió con soltura y sin sonrojarse.

- En esos años era eso o negarle ingreso a la educación superior a los jóvenes que tenían los méritos pero no los recursos para hacerlo. Por eso optamos por conseguir recursos con el sistema bancario. Permitimos un gran aumento de la matrícula de nivel superior. Ahora que los recursos existen, claro que corresponde aliviarle la carga a las familias.

El segundo interpelado fui yo. Me limité a decir que habían dos problemas: si el CAE era bueno en su propia lógica y si era deseable o no que los bancos controlen nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos.

Al movimiento le preocupa lo segundo, pero tenemos una opinión sobre lo primero: el CAE es ineficiente, pues el Estado pagaba a los bancos enormes sobrepagos por las carteras de deudores; perverso, porque ahogaba en endeudamiento a las familias; e injusto, porque mantiene el acceso segregador y desigual a la educación superior. Hay que combinar el financiamiento directo a la educación pública, para que sea gratuita y amplíe su cobertura, con un crédito estatal solidario para las instituciones privadas reguladas. Todo lo cual requería una reforma tributaria progresiva.

La palabra la tenía ahora Joseph Ramos, pero se dejó interrumpir por Bitar. Quería insistir en su punto. Intenté rebatirle, pero me frenó en seco con senda paradoja:

- ¡No sean intransigentes, escucha!

Luego el profesor Ramos entró a la discusión como por esos días entraban todos los especialistas: por la puerta de la ideología. Ante la ausencia de argumentos empíricos que permitieran sostener la deseabilidad del CAE atacó la idea de financiar la gratuidad de la educación superior pública con una reforma tributaria. Le parecía injusto que toda la sociedad financiara algo a lo que sólo su porción “más privilegiada” accedía y podía pagar de su propio bolsillo. La guinda de su torta argumentativa fue el adjetivo “vergonzoso”.

Bitar aprovechó el pase de Ramos para coronar su intervención.

- Siempre consideramos al CAE como un crédito “de transición”, que debía mutar a uno más solidario.

Este argumento era falso. La primera intención de la Concertación, con Mariana Aylwin como ministra, fue hacer del CAE el crédito único para acceder a la educación superior. Ese fue también el plan inicial de los asesores de Bitar y a lo que la Confech se opuso en 2005. Los dirigentes de entonces le hicieron ver lo beneficioso para las instituciones privadas y dañino para las públicas que era el CAE, pero el ministro lo desestimó, al igual que las advertencias sobre las nefastas consecuencias de meter al baile a la banca.

Hasta ese minuto todo ocurría como estaba previsto. Ambos recitaban argumentos conocidos de memoria. Yo no tenía mucho que agregar, salvo decir que el problema no se iba a solucionar con más subsidio a la demanda, porque las instituciones privadas usaban esos recursos públicos para lucrar. Que se requería una decisión política; Derecha y Concertación debían elegir entre continuar siendo “el brazo político de la banca” o gobernar para el país.

Esto sulfuró a Bitar. Subió la voz y se puso tembloroso. No dejaba de moverse sobre su asiento y de interrumpir a Ulloa, que intentaba infructuosamente presentar un gráfico con los montos que por distintas carreras y universidades terminaban pagando los “beneficiados” por el CAE.

Antes de la entrevista, un amigo que había sido dirigente de la FECH en 2005 me contó que el ex ministro era de “mecha corta”. Se salía rápidamente de sus casillas y adoptaba un tono autoritario a la menor provocación. Pudo comprobarlo en persona, en las negociaciones que la Confech entabló con Bitar ese año. Me dejé anotado el datito en una libreta.

Ramos intervino nuevamente, señalando que le parecía injusto que se le financiara la educación a una persona que luego podría pagarse una casa o un auto. En la filosofía del profesor, suerte de cristianismo fundamentalista de mercado, había que auto condenarse a la miseria eterna para ser sujeto de derecho. El movimiento estudiantil, en cambio, concebía la educación como “un bien común y una inversión social”, no como una inversión puramente individual.

La disociación entre las preocupaciones de la tecnocracia y las de la sociedad fue fielmente plasmada en la forma que Ulloa encontró para dirigirse a Ramos:

- Dígame usted, como economista... y bueno, también como persona.

En mi tercera oportunidad de hablar, señalé que los políticos debían hacer con la educación lo que se había hecho con el cobre en el siglo XX, porque el conocimiento será el principal y más estratégico recurso de nuestra sociedad. Pero en lugar de eso, ocurre que los bancos, como detestan la competencia que proclaman, tocan las puertas del Estado para que éste les garantice nichos de negocio.

- Y hay políticos, como el señor Bitar, que al parecer se las han abierto.

Y claro, ahí la exasperación del ex ministro pepedé tocó techo y yo sentí un placer de niño admirando el resultado de su travesura. Gritó -porque así se comunicaba a esas alturas- que intransigencias como la mía estaban “echando a perder la discusión nacional”. Y agregó enfurecido:

- ¡No tengo mi vida dedicada a la política, desde ministro de Allende, ni estuve preso, ni estuve exiliado, para que un mocoso... un niño como tú me venga a calificar así!

Cuando el periodista me devolvió la palabra, y sintiendo la respiración agitada de Bitar en mi oreja derecha, comprendí que era el momento indicado para decir lo que hace mucho tiempo teníamos ganas de decir:

- Lo bueno es que, después de estas movilizaciones, estas indecencias no seguirán ocurriendo, porque esta generación y este movimiento llegaron a la política para quedarse. Y eso es lo que irrita al señor Bitar, porque se han acostumbrado a tener el monopolio de la política. Eso va a dejar de suceder.

Si cuento este breve intercambio de palabras -que quizá no tuvo una trascendencia tal como para incluirla en un relato grueso sobre la revuelta-, es porque entre sus silencios y exclamaciones, entre lo que se recrimina y se pregunta, se asoma el significado que tuvo nuestra movilización para la política dominante y cómo actuó frente a ella desde sus distintas trincheras.

La incomodidad de Bitar no era sólo la incomodidad de Bitar, como tampoco el fastidio del profesor Ramos sólo el fastidio del profesor Ramos. En las reacciones de ambos estaba presente el hastío de toda la política y la intelectualidad del régimen con la revuelta estudiantil: la sensación de que los mocosos estaban yendo demasiado lejos y ya era hora de “ponerlos en su lugar”.

## **El recetario de la transición**

El malestar con la desigualdad y la mercantilización de cada vez más aspectos de nuestra vida se tradujeron en un descontento que el movimiento estudiantil supo organizar y proyectar en la lucha social. Pero si logramos hacerlo, no fue sólo ni principalmente por nuestras virtudes. Que las hubo y fueron determinantes, eso es seguro. Jugaron un papel central los errores de nuestros contrarios. La descomposición de la política de la transición hizo gran parte del trabajo por nosotros, pero en vez de cobrar, pagó y caro.

El equilibrio político que delimitó los marcos de lo deseable y lo posible durante 20 años en Chile, se agotó. Ya no ofrece nuevos horizontes a la sociedad —o los ofrece en igual medida que, digamos, una competencia de poleras mojadas— y sus mecanismos de control y disciplinamiento social se oxidaron. Eso expresaron muchas reacciones del mundo político ante una movilización que cuestionó los fundamentos y fines de sus acuerdos.

Pero nada en la vida aparece prístino a primera vista. La política muestra dos caras, en apariencia contradictorias. Sólo en apariencia.

Por un lado, cede la defensa de proyectos y contenidos a cambio de una dedicación frenética a la administración de clientelas y carreras individuales o pequeños grupos de interés por el control de los partidos y las reparticiones del Estado. Y no se sonroja.

¿Cuándo fue la última vez que escuchamos un discurso político potente, cargado de ideas y visión de futuro? ¿O una apelación a un determinado modelo de desarrollo que justifique la acción política cotidiana? La cháchara politiquera de hoy tiene más en común con los “llame ya!” que con la arenga de un Allende o un Frei Montalva. Ya ni se molestan en ocultar que los encargados electorales pesan más que los secretarios generales, o que los parlamentarios se dedican más a trabajar por la reelección que por la defensa de los intereses e ideas de sus representados.

La acción política parece renunciar a toda sustancia y se confunde con un juego de apuestas. Las calculadoras reemplazaron las cartas de principios. Los “afectos” y las sonrisas a las ideas y la franqueza.

Pero al mismo tiempo, la política oficial se compromete con la defensa irrestricta de contenidos muy concretos, todos ellos heredados —oh, coincidencia— de la dictadura. En eso no cede ni un centímetro y está dispuesta a jugar todas las cartas.



Lo segundo, no hay que ser doctor en lógica para notarlo, implica la negación de lo primero. Es que claro que hay un proyecto político, pero es el mismo hace 30 años. Pasa que como sus fundamentos se sustrajeron de la deliberación democrática y la política abierta, lo han naturalizado hasta presentarlo como el único posible.

Nos dicen que la democracia es lo máspreciado, pero el pueblo no es soberano sobre el rol del Estado, sobre organismos que definen aspectos clave de la vida en sociedad o sobre la Constitución. Es tan obvio que sea así como obvio es que el sol sale de mañana y se pone de noche. Osar cuestionar los fundamentos del régimen es propio de “una manga de inútiles subversivos”, como dijera Carlos Larraín, presidente de RN; o equivale, como dijera el socialista Camilo Escalona, presidente del Senado, a ponerse a “fumar opio”. Hay ahí una misma concepción de la democracia.

El problema con la política, en definitiva, no es que sea vacía, puro procedimiento, ni que sea poco democrática. El problema es para quién tiene sentido, para quién es democrática.

El consenso político de la transición excluyó a enormes sectores de la sociedad chilena de cualquier tipo de representación. La efectiva expulsión del campo popular del proceso de democratización, por parte de un pacto sellado en las alturas con el pinochetismo, marcó tempranamente el carácter de los gobiernos democráticos: elitarios y antipopulares.

La exclusión de los actores sociales, con excepción por cierto del empresariado, convirtió a su vez a los partidos en estupendas agencias administradoras de los consensos impuestos por los poderes fácticos, que roncan desde el vasto “circuito extrainstitucional del poder”<sup>30</sup>. ¿Representar intereses sociales diversos? Añejo.

La modalidad de dominio consagrada en democracia ya no precisa de muchas de las herramientas de la dictadura. En particular, del terror y el monopolio militar de la fuerza. Pero no es que los intereses de la dictadura se hayan debilitado y visto forzados a dejar los fierros. Es justo lo contrario: se elevaron a un nivel superior de dominio, en el que ya no los necesitaban. Conserva, no obstante, lo fundamental: la apuesta por un Estado que atomiza a la sociedad y margina al pueblo de los asuntos públicos.

Esa misión debía recibir un nombre que no desentonara con la cínica moda de la nueva democracia. Se le bautizó “governabilidad democrática” y devino dogma venerado

por moros y cristianos. La gobernabilidad no es otra cosa que la administración eficiente de la expulsión de los intereses mayoritarios de la política.

El vigor de este dogma en las elites económicas y políticas se presenta de múltiples y misteriosas formas. Es lo que anima a un Hinzpeter a orquestar enormes –y siempre fallidos- planes de represión a los movimientos sociales, pero también lo que conduce a un Bitar a la ira cuando los “mocosos” osan cuestionar su obra.

Al compromiso ciego con esa gobernabilidad, la política dominante suma la adscripción con no menos fanatismo a la concepción de Estado subsidiario. Es sabido en qué consiste: el Estado se retira de la provisión del acceso a los bienes comunes básicos para la reproducción de la sociedad, en nombre de la “libertad de los individuos”, y la provee sólo a quienes no puedan –según ellos- obtenerlos por sus propios medios.

Este principio, primer mandamiento en las tablas de la dictadura, fue impuesto de la única forma en que podía ser impuesto: por la fuerza bruta. Pero se proyectó inalterado al período democrático, animando el desarrollo de todas las políticas sociales. Bajo la subsidiariedad toda acción de lo público es focalizada, ya sea mediante una provisión estatal limitada del servicio o un subsidio para asegurar acceso a ese servicio en el mercado. Da un poco lo mismo.

Lo que el principio de subsidiariedad consagra es que la comunidad en cuanto tal no es poseedora de derechos<sup>31</sup>. ¡Pero tampoco los individuos! La comunidad no lo es nunca y los individuos sólo en la medida y mientras lo diga un formulario. Hasta tal punto llega la destrucción de los derechos que cuando los reivindicamos nos obligan a ponerles el apellido “universales” o “sociales” –en oposición a “focalizados” e “individuales”-, como si tales rasgos no fueran intrínsecos a los derechos.

Estas dos ideas, la gobernabilidad y la restricción de derechos, son parte de una recetita que nadie discute. A nadie se le ocurre decir que quizá el Estado deba intervenir aquí o allá, o que habría que revisar esto de tener que endeudarse hasta para dejar de estar enfermo. Los partidos y coaliciones mayoritarias piensan lo mismo, pero fingen pelearse en público, como para que la gente no se muera de aburrimiento.

Por eso la mayor parte de los políticos en Chile son de derecha. Algunos tratan de ocultarlo vistiéndolo a la última moda europea o peinándose raro, pero igual se tragan la

receta. Los dos personajes que me acompañaron en la entrevista de CNN, por ejemplo son tenidos en Chile por opositores. Pero son progresistas chilenos, es decir, de derecha.

Ahora bien, no es que los políticos hayan defendido férreamente estas concepciones. Han perdido las convicciones, pero no han caído en la ingenuidad. Saben que en cualquier discusión llevan las de perder. Simplemente no la sometieron a debate alguno. Estas argucias han sido más efectivas que la pura y dura represión en la defensa de las mezquindades de la democracia criolla.

### **Esa autoritaria tecnocracia**

Los que sí han estado en la primera línea defendiendo lo que los políticos tradicionales eluden son ese otro tipo de empleados de la oligarquía que tanto respeto han adquirido en el último tiempo: los “expertos”. Los fundamentos de su poder son distintos, pero comparten con la política a secas su principio autoritario.

Los expertos obtienen su autoridad del manejo del saber técnico o especializado y de la creencia según la cual dicho saber es lo más cercano que hay a la verdad, porque al ser objetivo está descontaminado de intereses e ideologías. Están, como Don Francisco, más allá del bien y el mal.

Los hay de todas las edades. Viejos que no saben ni enviar un mensaje de texto sin equivocarse, y no les importa. Y jóvenes hiperconectados al corriente de las últimas modas intelectuales y dietas saludables. En general, es gente arrogante y aburridísima. Se les puede identificar por sus títulos académicos obtenidos en el extranjero y sus innovadores accesorios y “puntos de vista”. Su impresionante poder es verificable en un típico diálogo de domingo.

- ¿Viste que no somos pobres?
- ¿Por qué lo dices?
- Lo dice este experto, mira. Estamos sobre la línea de pobreza.
- ¿Y? Mansa cuestión.
- Bah, pero si lo dice un experto en el tema, en la tele.
- Gordo, estamos entero cagados...
- Tú siempre creís que te las sabís todas, ah.

Pero la objetividad es la subjetividad de los más poderosos y eso quedó al desnudo en 2011. La revuelta hizo que los secretos ocultados a la fuerza bajo la alfombra de los años, así como fuente de dramas de miles de familias, se tornaran hechos de público conocimiento. Universidades pilladas “con las manos en el lucro”, veinteañeros endeudados como si hubiesen adquirido mansiones, políticos sorprendidos en actos nada probos y hasta instituciones cerradas por amparar delitos para el cine.

Se generó así un problema mayúsculo para los expertos que con toneladas de *papers* y especulaciones en retórica académica habían fundamentado las políticas responsables de esos escándalos. De pronto, la tecnocracia, se cayó de bruces a la realidad. No por nada enmudecieron ante la revuelta una cantidad considerable de “expertos” en educación. Lumberas de *think thanks* varios vieron interrumpida, de la noche a la mañana, la marcha inapelable de la “razón técnica” en la que se habían parapetado.

Recién cuando la movilización amainó salieron de sus escondites para agarrar micrófono, con la arrogancia que les es tan propia.

Ricardo Lagos, ex Presidente pero también ex ministro de Educación, respondió así a la pregunta por cuál era su autocrítica ante los reclamos contra el sistema educacional que perfeccionó la Concertación:

- Lo primero es que yo lo puse (el tema) en marzo, antes de que los estudiantes estuvieran en la calle. ¿Estamos? (Pausa). ¿Y por qué tengo que hacer una autocrítica?<sup>32</sup>

De un similar descaro hizo gala José Joaquín Brunner, transversal gurú educacional, tan rápido para criticar las demandas estudiantiles como negado a reconocer el fracaso de la idea, con la que machacó tantos años para guiar las políticas públicas en educación, según la cual el mercado educativo podía autorregularse. Ni el desplome del sistema de acreditación, tras el demostrado escándalo de las certificaciones truchas y los casos de lucro impune, logró doblegar su petulancia<sup>33</sup>.

Pero el mejor exponente de la tecnocracia y sus dobleces ha sido Harald Beyer, investigador del CEP nombrado ministro de Educación en reemplazo de Felipe Bulnes a fines de 2011. Se hizo fama de desinteresado experto en el circuito académico, pero al ser fichado por Piñera para su Gobierno terminó haciéndole flacos favores a la pretendida neutralidad de su gremio.

En seis meses pasó de reconocer que el lucro existía y era opuesto a la calidad a negarlo. Menospreció un moderado informe parlamentario sobre la educación superior, desechó con arrogancia las denuncias de corrupción y lucro ilegal en universidades y se negó a recibir los planteamientos estudiantiles. Le faltó llegar a caballo y armado al ministerio, cual *cowboy* empinado por sobre las estúpidas leyes de su pueblo.

En cosa de meses, cayeron universidades, el sistema de acreditación y redes de corrupción. El informe parlamentario quedó corto y las voces estudiantiles demostraron tener razón. Aún así, con toda la evidencia introducida hasta el fondo de sus narices, Beyer no se inmutó.

- En el fondo –señalaría en 2012-, esta preocupación por la educación al final es una mentira, un gran *bluff* (...) El problema del lucro no es real, se ha instalado en la opinión pública<sup>34</sup>.

Este “experto” terminó por sepultar el mito de la neutralidad y objetividad de la tecnocracia. Pero con su actitud de *cowboy* afloró mucho más: esa incomodidad de los tecnócratas con la deliberación colectiva sobre los asuntos comunes. No bastó que tratara de blanquearse saliendo a marchar por la diversidad sexual. Su conducta hizo gala de un autoritarismo que puede no echar mano a los excesos como el autoritarismo militar, pero se opone por igual a la esencia de la democracia.

No hay duda de que hasta ahora la tensión entre democracia y tecnocracia ha resultado más favorable a la segunda. Pero las verdades dichas por la revuelta estudiantil, en particular las que alumbran el oscuro mundo de los subsidios estatales a las grandes ganancias privadas, han significado un duro golpe a esta reducción de la democracia a una suerte de gestión para entendidos y de la ciudadanía a la contemplación pasiva de un saber excluyen.

De hecho la actitud asumida por la tecnocracia neoliberal frente a la movilización social por la educación ha terminado por demostrar que su distancia con la democracia es insalvable, que aquel no es un matrimonio posible. Es más: en tanto se opone a que la sociedad construya su propia historia, la tecnocracia es una prolongación del autoritarismo. Y eso, no hay moda intelectual que lo pueda ocultar.

Gobernabilidad y negación de derechos han terminado así por incapacitar a la política para procesar los conflictos sociales. El malestar en sus distintas manifestaciones se les escurre como agua entre los dedos. Más aún: su decadencia contribuye a que se proyecten y conquisten simpatía popular.

En las relaciones entre un Gobierno impopular y una sociedad descontenta, siempre llega un momento en que cualquier acto de las autoridades, sin importar demasiado cuán decisivo o grave sea, sólo consigue exasperar a la gente, mientras que toda negativa a sus deseos activa un latente desprecio.

La aprobación del proyecto HidroAysén, que venía a coronar meses marcados por el mal manejo del Gobierno con el Puntarenazo y su intromisión en la renuncia de Bielsa, desencadenó una tormenta. El foco rápidamente cambió a la educación, pero de allí en más, cada anuncio o rechazo de Piñera sería recibido con negativas y sarcasmo, y su popularidad caería a índices históricamente bajos.

Aunque no era imaginable estar peor que el Gobierno, la opositora Concertación lo estaba. Su aprobación ciudadana era más baja que la del propio oficialismo. Mientras que la coherencia en la acción y las ideas entre sus partidos prácticamente nula.

La impunidad con que la Derecha pudo continuar errando semana tras semana desde La Moneda durante todo 2011, hasta dar cátedra en el arte del malgobierno, guarda relación directa con la total ausencia de una oposición política constituida.

Los hechos desencadenados por la revuelta durante su clímax y después demostraron que en amplias facciones de la Concertación imperó más un espíritu de co-gobierno con la Derecha que de oposición. Ésta provino no de quienes se auto catalogaron como “opositores”, sino de la fuerza afirmativa del movimiento estudiantil.

De ahí que la Concertación no pueda chantajear a esta generación, como hizo con las anteriores, con su campaña del terror “si no están con nosotros están con la derecha”. Es que el levantamiento estudiantil logró lo que la Concertación no pudo en 20 años: arrinconar a la derecha a su condición de minoría política y social. Por unos meses, pero lo logró. Quizá en ello resida la contribución política menos comentada pero más significativa de la revuelta.

## **CAPÍTULO VII**

### **El segundo round**

#### **“Están jugando con fuego”**

Las multitudinarias protestas de junio, sumadas al fracaso de las gestiones de Lavín, abrieron un cuadro distinto al del primer semestre. Esta vez el primero en tomar nota y modificar su conducta fue el Gobierno. Los estudiantes, por el contrario, tardaríamos en comprender cómo las fuerzas que habíamos desplegado, además de maravillar a la ciudadanía, estaban forzando al resto de los jugadores a ajustar su propio despliegue en la cancha.

El actuar equívoco y dubitativo de la Concertación y sus satélites en el primer semestre mostró algunos signos de cambio en las primeras semanas de julio. Un grupo de parlamentarios hizo eco de la propuesta de plebiscito que algunas federaciones y organizaciones sociales de la educación hicimos para solucionar el conflicto, y presentó un proyecto de ley al respecto el 6 de julio. La iniciativa no tuvo mucho impacto más allá de la cobertura mediática y un par de trámites legislativos, pero fue la primera acción que políticos del sector emprendían para mostrarse interesados en buscar una salida.

Dos días más tarde se hizo público el “Compromiso de la Concertación con la Educación”, documento con el cual la coalición respondía a la interpelación de la Confech intentando dar una señal de unidad e iniciativa. “Esta agenda –declaraba el documento- nos comprometerá por un periodo mayor del actual mandato presidencial y será la carta de navegación que orientará las propuestas y compromisos de nuestros candidatos y autoridades de elección popular en todos los niveles de aquí al 2020”.

Las firmas de los presidentes de los partidos Ignacio Walker (DC), Osvaldo Andrade (PS), Carolina Tohá (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD), coronaban un texto muy expresivo de los débiles consensos políticos e ideológicos existentes al interior del bloque. Las gestiones de los dirigentes estudiantiles más cercanos lograron que el documento respaldara algunas demandas, pero no que se pronunciara ante los temas de

fondo más sentidos por el movimiento social por la educación: la prohibición total del lucro y la defensa del principio de gratuidad universal del derecho a la educación.

El Compromiso se mantuvo vigente en el papel y los micrófonos hasta que los proyectos de ley en educación enviados por el Ejecutivo al Parlamento dividieron a la Concertación, viabilizando la agenda del Gobierno. Pero eso sería en 2012.

En la vereda estudiantil ocurría un fenómeno extraño. En las bases el éxito de junio encendió los ánimos y la confianza de miles. No poco ayudó el transversal respaldo social, incluso más allá de las fronteras, con la solidaridad de chilenos y extranjeros expresada en manifestaciones inéditas a favor del movimiento estudiantil chileno en Argentina, México, Canadá, España, Suecia y Australia.

Pero entre los más involucrados y el activo político asomaba una incertidumbre: las expectativas del movimiento y grandes sectores de la ciudadanía crecían justo en el momento en que éstas parecían estar más lejos de ser satisfechas. Temíamos lo que un mes más tarde sabríamos con certeza: el GANE y el cambio de ministro no eran más que un muy elegante portazo.

La creciente efervescencia de las bases hace rato había rebasado la conducción de la Confech y las debilitadas organizaciones secundarias. Lo bueno fue que se multiplicaron las espontáneas acciones de propaganda, pero también la irresponsabilidad en acciones más arriesgadas. Ejemplo de ello fue el grave accidente que el 13 de julio sufrió el estudiante del Liceo Amunátegui Fernando Droguett. Mientras prendía fuego a la basura de su toma, resultó con el 54 por ciento de su cuerpo quemado.

Pero las situaciones más graves las generaría el choque entre el aumento de la confianza y la excitación estudiantil y la nueva mano con que el Gobierno comenzó a tratar las manifestaciones. Desde el Ministerio del Interior se le ordenó a Carabineros efectuar procedimientos provocativos y disuasivos ante todo tipo de protestas. Y a las intendencias, que propusieran recorridos absurdos para las marchas, de manera que se terminaran realizando sin permiso y así la prensa pudiera regocijarse con los hechos de violencia en lugar de mostrar nuestras ideas.

El intendente de Santiago, Fernando Echeverría, se negó a darnos el permiso para marchar por la Alameda el 14 de julio. Se le veía incómodo y sin argumentos. Nos opusimos y convocamos de todas formas en Plaza Italia, apostando a que fuéramos los



suficientes como para sacarle de la cabeza a Carabineros la idea de reprimirnos. No pudieron con los 90 mil que fuimos. Pero al finalizar nos rodeó una nutrida tropa de Fuerzas Especiales. Bastó que un pequeño grupo de manifestantes intentara seguir marchando para que la represión se desatara sin consideraciones.

Las palabras que esa tarde les dedicó a los estudiantes Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, resultaron muy ilustrativas de la nueva actitud del Gobierno:

- Están jugando con fuego.

La sensación de que las movilizaciones estaban yendo muy lejos comenzó a dejar estragos al interior de la propia derecha. Parlamentarios y alcaldes se sintieron obligados a enviar señales a su electorado más reaccionario, a costa incluso de criticar al Gobierno. Para la UDI fue también una forma de fortalecer su posición en La Moneda. No en balde el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, acusó al Gobierno y Carabineros de ser sobrepasados por adolescentes.

Uno de los hechos más demostrativos del “giro policial” de La Moneda y que más trascendencia tuvo para el movimiento, ocurrió el 21 de julio en Concepción. Estudiantes universitarios y secundarios marchaban junto a los pobladores de Dichato, caleta asolada por el terremoto y maremoto de 2010. Lo hacían detrás de las banderas de la reforma educacional y la reconstrucción digna de sus hogares y pueblo.

Cuando los manifestantes regresaban a sus casas y establecimientos educacionales tras la exitosa movilización, Fuerzas Especiales ingresó con violencia a la tomada Universidad de Concepción. En los enfrentamientos fue detenido Recaredo Gálvez, secretario general de la Federación de Estudiantes de esa universidad, la FEC.

Durante horas no se supo nada de él. Tampoco al día siguiente. Hasta que el 23, desde el Módulo 10 de la cárcel de Concepción, donde caen los primerizos y el tiempo no pasa, rodeado de “los hongos del suelo y las paredes, los chinches de las palomas, las baratas, las arañas y el mal olor”, decidió poner por escrito lo que le había sucedido.

*- Recuerdo despertar sentado en la micro de Fuerzas Especiales. Recuerdo sentir los dedos helados de uno de los carabineros que me tocaba el cuello. Recuerdo que dijo: “Sí respira este hueón, tiene pulso”. Las esposas en mis manos apretaban mis muñecas, tanto como sus dedos apretaban mi cuello, ambos con el mismo objetivo: que no me*

*escapara. Las esposas no querían que fuera del bus y sus dedos buscaban que no me fuese del mundo.*

*En el hospital, medio aturdido, la gente me observaba. El doctor que me atendió increpó a Carabineros frente a mí: escuché claramente cuando mencionó que el golpe que tenía, podría ser mortal. Luego de eso, el sub-teniente intentaba justificarse conmigo. Me decía: “tú estás claro que te dejamos así porque te resististe, porque nos golpeaste. Estas claro que no nos quedó otra. Todos piensan en como quedaste, pero yo también tengo carabineros heridos”. Yo le respondí desafiante: “a verlos. Trae a tus hombres, a los más de 10 que me golpearon y dile a todos acá, como un estudiante los violentó, como sólo yo fui capaz de asustarlos tanto para que me golpearan hasta dejarme inconsciente” (...)*

Los policías llevaron un médico distinto, sin identificación, que se burló de la lucha estudiantil, le dijo al Reca que lo suyo “no era nada” y le recetó unos anti inflamatorios. Trataron de hacerle firmar una declaración con el motivo de su detención: homicidio frustrado contra un carabinero. No supo el resultado de sus exámenes, se lo llevaron antes.

*- Maltrecho como estaba se me hizo esperar largamente en la Comisaría y recién se me leyeron mis derechos. Se me preguntó recién de qué color era mi ropa, mientras un Carabinero iba diciendo las respuestas por teléfono y se me presionó para que declarara que usaba una capucha negra. Curiosamente en la posterior declaración del oficial que dice ser objeto de agresión por mi parte, dice textualmente lo que el Carabinero hablaba por teléfono en dicha ocasión.*

*Se indica además, detalladamente, que lancé al oficial una bomba molotov, lo que es enteramente falso, pues jamás lancé tal objeto. En mi mochila “aparecieron” dos botellas de néctar, pero que no contienen restos de nada. En mi mochila no encontraron nada, porque no había nada. En mis manos no hay restos de sustancias incendiarias, porque jamás transporté ni lancé nada (...) No lo haría, menos sabiendo que los que “todo lo ven”, buscarían razones para acusarme, buscarían razones de acusar a cualquiera de nosotros.*

*Ahora entiendo por qué me acusaron de “homicidio frustrado”. Fue lo primero y más fuerte que pudieron montar para ocultar de los medios los golpes que sufrí. Fue lo primero que se les vino a la mente, porque fue lo que me hicieron a mí: fue su crimen y yo soy la evidencia. La evidencia de ellos no existe. Mi mochila está limpia. Solo portaba una*

*lata de spray verde, nuevo, sin uso. Me declaro culpable de llevar material para que las telas y las paredes de Concepción griten nuestra lucha (...).*

*Un par de compañeros (de celda) que saben de mi caso, me pidieron disculpas. Reconocieron haber votado por el que pretende ser el Presidente de nuestro país. Ahora se sienten decepcionados. Cuando salgan, aseguran no votar por nadie.*

Seis días después, la Corte de Apelaciones de Concepción votó por unanimidad la libertad de Recaredo. Durante un año la Fiscalía no pudo comprobar nada. Protagonizó, por el contrario, un patético espectáculo de contradicciones que con un mínimo criterio profesional del periodismo nacional habría constituido un escándalo de proporciones.

En el resto del país las cosas tomaban el mismo color. Mientras Recaredo escribía desde la celda, estudiantes de la Universidad Central eran golpeados por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros. Las cámaras de seguridad acreditaron las golpizas con pies, puños y bastones. Otro escandaloso abuso se hizo público el 25, cuando la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) Laura Ortiz denunció ante tribunales haber sido obligada a desnudarse, junto a un grupo de compañeras, y luego tocadas e insultadas por una uniformada.

En el resto de Chile el ingreso de Carabineros sin mediar autorización a los recintos universitarios se hizo costumbre, igual que la represión de hasta la más inocente manifestación. Tal era el descaro de las acciones, que en Antofagasta efectivos de Fuerzas Especiales llegaron a ofrecer un “canje” de una estudiante secuestrada por un casco dejado en la facultad atacada el 28 de julio.

El 29 del mismo mes, cuando secundarios de Providencia intentaban marchar por avenida 11 de Septiembre, justo en las afueras del Liceo N°7 de Niñas, efectivos de la 30ª Comisaría de Carabineros desenfundaron sus armas de servicio para dispersar a los adolescentes. Una docena terminó herida y detenida cuando huía hacia calles aledañas.

El diplomático debut de Felipe Bulnes como ministro de Educación quedó, a los ojos del movimiento estudiantil, empañado por la arremetida policial del Gobierno. Ninguno de los acercamientos que el nuevo ministro intentó los días 20 y 26 de julio, con mucho más tacto político que Lavín, lograron aplacar las desconfianzas del activo político y social del movimiento hacia La Moneda.

Un flaco favor le hizo el Presidente Piñera cuando habló en su primera actividad como ministro. Bulnes destacó el rol del movimiento en la generación de consensos en torno a los problemas y necesidades del sistema educativo, y llamó al movimiento a “sentarse a trabajar” para “con las distintas fuerzas políticas construir las soluciones que el país necesita”. Piñera, en un arrebatado de sinceridad, llamó a pensar la educación no sólo como “conocer más, entender más, tener más cultura”, sino también como “bien de consumo”.

El 27 de julio La Moneda citó a los cuatro presidentes de la Concertación al palacio para viabilizar una “salida política” al conflicto. Pero la escalada de violencia y errores gubernamentales dejó a La Moneda en una posición tan débil, y la Concertación estaba tan desacreditada como “oposición”, que luego de ser presionados por dirigentes de la Confech ese mismo día en el Congreso, los jefes concertacionistas se retractaron y terminaron rechazando la invitación de Piñera. En una escena inédita en la historia política del país, lo dejaron plantado. La oposición ya no era ellos, sino el movimiento.

Bulnes había llegado al Mineduc con la instrucción de encontrar un punto de encuentro con el movimiento. A diferencia de Lavín, sabía de lo que estaba hablando y nunca envió señales contradictorias. Estaba empoderado en el cargo. En las reuniones mandaba él y no el subsecretario Fernando Rojas, el “policía” ideológico de la UDI en el ministerio. Ya en el primer acercamiento se abrió a “no insistir tajantemente en el GANE”, asegurando que ninguna de las partes podía adoptar posturas intransigentes. “La historia enseña –señaló el 27 de julio- que cuando se juega al todo o nada, el resultado lamentablemente es nada”.

Como respuesta al GANE le presentamos una propuesta conjunta del movimiento por la educación: el Acuerdo Social. La respuesta del Mineduc llegó el 1 de agosto bajo el título “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”, que si bien fue inmediatamente juzgada como insuficiente, evidenciaba el esfuerzo de Bulnes para ganarse la confianza de sus interlocutores.

En este contexto de “olfateos” mutuos fue convocada una nueva Marcha Nacional para el jueves 4 de agosto. En la decisión se había impuesto el excesivo optimismo de los más radicalizados, en oposición a la prudencia que otros quisimos instalar para evitar una bochornosa baja de convocatoria. Era momento de espaciar más las movilizaciones

masivas. Mostrar debilidad podía costarnos caro, sobre todo habiendo alardeado tanto respecto a la amplitud del apoyo a nuestras demandas. Este corte cruzaba a las bases de todas las universidades y la interna de todos los sectores políticos, a esas alturas desorientados por la sinuosa extensión del conflicto.

En efecto, la jornada del 4 iba encaminada a ser un fracaso. En las universidades los estudiantes de regiones todavía no regresaban a la capital y las asambleas perdían masividad. No hubo una adecuada coordinación con los secundarios, por lo que sus organizaciones convocaron a marchar en la mañana y la Confech en la tarde. La negativa de la Intendencia a otorgar la autorización atemorizó a otros miles.

Pero La Moneda estaba enfrascada en impedir a toda costa que la marcha se realizara. Ese mismo día la encuesta CEP arrojó que sólo un 25 por ciento de la población creía que Piñera estaba actuando “con firmeza” y sólo un 26 aprobaba su gestión, por debajo del piso histórico de la derecha. Además, todavía creía que podían controlar la movilización a través del PC. Pero no era así. El Gobierno podía colaborar al posicionamiento público de los voceros comunistas, pero éstos no podían asegurar control del movimiento. Los términos de esa negociación ya no podían seguir siendo los mismos.

El fuego interno y el desconocimiento de la geografía política y del estado real del movimiento condujeron a La Moneda a tomar la decisión de impedir a cualquier costo que la marcha se realizara. Esa mañana nos reunimos en una sesión extraordinaria de la Confech en la sede sanmiguelina de la Universidad de Valparaíso, para evaluar la respuesta de Bulnes al Acuerdo Social para luego marchar. No pudimos. El centro estaba sitiado.

Un cinturón de Fuerzas Especiales rodeaba Plaza Italia cerrando el paso a cualquier transeúnte que osara acercarse. Los estudiantes eran arrestados de inmediato. Guanacos (carros lanza agua), zorrillos (carros lanza gases) y micros de Carabineros poblaban cuadradas enteras a la redonda. Unos mil se lograron congregarse, pero fueron violentamente dispersados. Cuando llegamos, no había concentración; sólo pánico.

Conseguimos llegar a la FECH zigzagueando por las calles más chicas, paño en boca para no tragar los gases. La Federación estaba resguardada por dos columnas de FFEE dispuestas de modo que para entrar había que caminar por el estrecho espacio entre ellas. Revisaban mochilas y detenían a cualquiera que pareciera sospechoso de portar elementos incendiarios o piedras.

No todos parecían disfrutarlo. Uno de ellos, con una voz cansada y melancólica que chocaba con la dureza de su uniforme, nos hizo un comentario reconfortante, que no olvidaré:

- Sigán luchando cabros. Alguien tiene que hacerlo. Nosotros hacemos nuestra pega no más...

Dimensionamos la magnitud de los hechos recién cuando pudimos conectarnos a internet. La represión era la tónica en todo el país. Ya al mediodía los detenidos se contaban por cientos, entre estudiantes y gente que iba a trabajar. Los pacos actuaban con una violencia no vista en todo el año. Portugal con Alameda y Seminario con Providencia serían puntos de reencuentro para continuar la protesta, pero no era posible pasar de una calle a otra. Avanzó la oscuridad y con ella la FECH se transformó en el único lugar cercano a Plaza Italia para el refugio de los manifestantes. Las Fuerzas Especiales se lanzaron al asedio con un ataque ininterrumpido de gases lacrimógenos.

El asfixiante acoso se repetía con la misma violencia en las sedes universitarias más importantes de Santiago. Helicópteros sobrevolaban informando a los efectivos de a pie cuáles eran los puntos de reagrupamiento de los manifestantes e incluso lanzando bombas lacrimógenas desde el aire. Comprendimos que la jornada era distinta a las anteriores. Y que si el único sello era la violencia íbamos a salir para atrás.

En la televisión, la única imagen positiva de lo que iba de jornada era la de un grupo de apoderados que sacó ollas y cucharas para protestar por la detención de sus hijos. Ellos inspiraron el *cacerolazo* al que convocamos para esa noche. La cuenta de *twitter* de Camila, con más de cien mil seguidores, fue el amplificador perfecto. No pudimos reagruparnos para marchar, pero sí para cacerolear con éxito.

El exceso policial y la creatividad estudiantil fueron reconocidos hasta por los medios del oficialismo. No les quedó otra. Decenas de miles de personas en toda la capital, especialmente en comunas de clases medias como Santiago, La Florida, Macul y San Miguel y medias-altas como Providencia y Ñuñoa, respondieron al llamado con fuertes sonajeras desde las nueve hasta las once de la noche.

Hasta por la calle Marín, célebre por su nutrida oferta de moteles, pasó un grupo de entusiastas llamando a la protesta.

- ¡Cachero, cachera, salgan a marchar, para que sus hijos puedan estudiar!

Los enfrentamientos callejeros se reanudaron tras el caceroleo y duraron hasta bien entrada la noche. Cuando logramos salir, a eso de las 2 de la mañana, no había transporte público. La única alternativa era caminar. El panorama era sorprendente. La gente de forma espontánea levantó barricadas en las principales arterias del centro, pero también en calles insignificantes. Hasta en los acomodados barrios comerciales de Providencia se les cerró el paso a uniformados y automóviles.

Caminamos y caminamos, hasta que una enorme columna de humo negro llamó nuestra atención. Nació en pleno centro, a la altura de San Diego. Por unos minutos temimos por la Casa Central de la universidad. La imagen mental del edificio en llamas me aterrorizó. Afortunadamente no era la Casa, sino una sucursal de la multitienda La Polar, ícono de los abusos. Había sido saqueada y quemada, a vista y paciencia de manifestantes, vecinos y transeúntes.

La sensación de que se estaba haciendo justicia nos invadió a varios. Quien lo niegue, miente.

El saldo final fue de 874 detenidos registrados, 90 carabineros heridos y decenas de estudiantes heridos en todo Chile. Pero el espaldarazo ciudadano al movimiento y la sobregirada respuesta del Gobierno se robaron el protagonismo de la jornada.

### **Vuelcos inesperados**

El 4 de agosto pudo ser el primer gran tropiezo de la revuelta estudiantil pero terminó siendo todo lo contrario: un efectivo dinamizador. Contra todo pronóstico e intención de los actores organizados, la jornada resultó un hito que develó la hipócrita estrategia del Gobierno y reoxigenó a un movimiento que comenzaba a desorientarse.

El éxito del *Cacerolazo* nos reportó un trato amigable por parte de los medios de comunicación y más simpatía ciudadana. Mientras que los excesos de Carabineros e Interior le trajeron al Gobierno una lluvia de críticas, en especial, a su ministro Rodrigo Hinzpeter. La idea de levantar una Acusación Constitucional en su contra comenzó a barajarse tanto en la Confech como en la oposición. Un grupo de parlamentarios tomó la iniciativa y lo instaló como amenaza.

Diversas entidades nacionales e internacionales se pronunciaron tras la represión del 4, el caso de Recaredo y la extensión de huelgas de hambre de estudiantes secundarios en Buin. La Comisión Internacional de Derechos Humanos criticó la restricción de derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y expresión; el Instituto Nacional de Derechos Humanos comenzó a reportar públicamente lo que observaban en las movilizaciones; aumentó la presencia de periodistas internacionales y con ello la cobertura de estos temas en el extranjero; y la UNICEF interpeló al Estado chileno por las brechas sociales de aprendizaje y la delicada situación de los niños en huelga de hambre.

Como si fuera poco, la quema de La Polar no generó rechazo en la gente. Tampoco fue reivindicada, pero sí aprobada en silencio. Un periodista que trabajaba en el matinal de un reconocido canal de televisión me contó, semanas después, algo insólito. Los noteros salieron a capturar “la opinión de la calle” sobre la noticia. Y se encontraron con que eran más los que la aprobaban que los que la condenaban. Obviamente, la producción del canal mandó a meterle mano a la nota.

El repudio al actuar gubernamental se hizo nuevamente en las calles el 9 de agosto. Esta vez aceptamos el recorrido alternativo impuesto por la Intendencia y marchamos desde la USACH hasta el Parque Almagro. Fuimos 120 mil en Santiago y 240 mil en todo Chile. Empañaron la jornada santiaguina la quema de un automóvil y el brutal ataque a un edificio de apartamentos. Pero el Gobierno mantenía su costumbre de hacerlo aún peor; en Valparaíso manifestantes detuvieron a un encapuchado en acción que, tras ser protegido por la guardia del Congreso Nacional, resultó ser un policía infiltrado.

Los intentos de la Concertación por hacerse con una llave para la solución del conflicto florecieron con el descrédito del Ejecutivo. Desde el Parlamento propusieron una mesa de diálogo, en la que también participaran representantes del Gobierno. Pero eran tan evidentes los riesgos, ante la ausencia de una agenda de acuerdo sobre temas a tratar y la futilidad que tendría el espacio si el Ejecutivo no tenía voluntad política de participar y comprometerse con sus resultados, que al unísono todas las federaciones y grupos políticos dijimos que no.

Pero conforme avanzaba el año más importancia cobraba el Parlamento. En sus comisiones se discutían temas sensibles para el movimiento y las condiciones del presupuesto 2012. Considerando estas aristas, pero también la necesidad de contrapesar



nuestros sucesivos rechazos, quisimos hacer de las instancias parlamentarias vitrinas para el movimiento. Partimos por acudir a la Comisión Mixta de Educación, que reunía a diputados y senadores en torno al proyecto de ley que buscaba prohibir el lucro con recursos públicos.

Nuestra participación en esa instancia tuvo amplia cobertura mediática y un efectivo impacto político. Asistimos por la mesa ejecutiva Giorgio Jackson de la Católica, Gastón Urrutia de la Biobío, David Urrea de la Arturo Prat, José Ancalao de los estudiantes mapuche, y Camila Vallejo y yo de la Chile. Fuimos a defender las demandas estudiantiles, en particular la de prohibir el lucro en todo el sistema educativo, y a confrontar nuestros argumentos con los parlamentarios.

Aunque por televisión pareció todo muy preparado, lo cierto es que nuestra intervención fue bastante improvisada. No de irresponsables, simplemente por esos días no teníamos tiempo para nada. Con Giorgio y Camila nos preparamos en el viaje a Valparaíso, entre bostezos, pestañeos y café. Eché a mi mochila un montón de papeles con artículos académicos y columnas a favor (de Fernando Atria, Manuel Riesco y Carlos Ruiz) y en contra de nuestras posturas (de Brunner y Libertad y Desarrollo). Los leímos en voz alta para aceitarnos la cansada artillería neuronal.

Llegamos atrasados, como a casi todo por esas semanas, y no alcanzamos más que a repartirnos temas y coordinarnos con los tonos. Así y todo puedo decir sin autocomplacencia que la fuerza y lógica de nuestros argumentos fue superior a las gruesas defensas de Ena von Baer al lucro y a las tibias propuestas de Ignacio Walker. No fuimos muy conscientes del impacto de lo que estábamos haciendo. De hecho, estábamos más preocupados de reírnos del empalagoso cinismo de algunos diputados y de los sándwiches que de lo que saliera en las pantallas. Ese *round* contribuyó bastante para que, al menos entre la gente que tenía tiempo para leer los medios y ver TV Senado, la posición estudiantil cobrara más fuerza.

El 17 de agosto el ministro Bulnes entregó una especificación del GANE. Incluía el número de beneficiados con la repactación del FSCU, el destino de las nuevas becas y créditos y la nueva tasa de interés del CAE. Era lo mismo que antes, sólo que con letra chica, por lo que de nuevo todos coincidimos en rechazarla y mantener a firme el llamado a marcha para el 18 y a concentración familiar para el 21. Ambas jornadas superaron largamente nuestras propias expectativas.

La marcha del 18 se realizó uno de los días más fríos de ese invierno, en medio de una lluvia permanente, que hasta nieve trajo a barrios que no la habían visto en años. Fuimos más de 90 mil y los medios la llamaron la “Marcha de los Paraguas”. Las acciones violentas fueron marginales y dispersadas por los propios manifestantes. Como no podía argüir la excusa de la violencia para deslegitimar la movilización, y viendo que el respaldo social al movimiento continuaba en aumento, el ministro Hinzpeter decidió cambiar de discurso.

- Éste es el país que queremos, en el que el Gobierno y los manifestantes dialogan, se piden los permisos y todo se hace con coordinación y colaboración -señaló en su balance de la jornada.

Para el domingo 21 convocamos a una concentración familiar en el Parque O’Higgins. El objetivo era ofrecer una instancia de expresión a esas miles de personas que desde sus casas y lugares de trabajo apoyaban pero no podían o no gustaban de asistir a las marchas. Además queríamos desmarcarnos de los hechos de violencia que venían copando la discusión desde julio. La actividad fue montada principalmente por el Colegio de Profesores y el PC. Fue un éxito mayúsculo. Asistieron entre 700 y 800 mil personas en lo que fue el acto político-social más concurrido en 22 años en Chile.

- Tengo sensaciones encontradas con este movimiento –me dijo de sopetón un hombre en sus cuarenta, que caminaba con los ojos húmedos en medio de la multitud-. Mis padres, que lucharon toda su vida, fallecieron creyendo que estaba todo perdido. Qué felices se podrían haber ido si hubiesen visto todo esto, cómo les gustaría estar aquí.

La unidad de una entidad colectiva no siempre requiere sólidos acuerdos afirmativos, a veces basta con tener un enemigo. Eso fue lo que el Gobierno nos proporcionó en agosto. Las tensiones al interior de la Confech iban en aumento hasta fines de julio, pero bastó que La Moneda diera rienda suelta a la represión para que las diferencias amainaran. No, por supuesto, hasta desaparecer, pero sí hasta hacernos gastar más tiempo en discutir cómo aprovechar la favorable situación en la que nos había dejado el 4 de agosto que en pelear entre nosotros. Esa fue la tónica de las sesiones celebradas en la Universidad de Concepción el 13 de agosto y en la de Atacama, en Copiapó, el 20.

La decisión, adoptada prácticamente por unanimidad, fue apostar por una negociación directa con el Ejecutivo, con la presencia de las carteras de Educación y Hacienda y la validación del propio Presidente. Todas las federaciones coincidíamos en que el Gobierno estaba en un muy mal pie y nosotros en el mejor del año, pero también que esas posiciones eran efímeras. Autónomos y comunistas proponíamos además tener bajo la manga la carta del plebiscito ante un eventual y más que probable quiebre del diálogo. Pero no fuimos capaces de ganar la posición.

El martes 23 de agosto entregamos en La Moneda un documento con 12 puntos a tratar en una mesa de diálogo. Se elaboraron en la FECH la noche anterior, siendo Giorgio Jackson, presidente de la FEUC, y Guillermo Petersen, presidente de la FEC, los encargados de redactarlo. Había más acuerdo en la maniobra que en los contenidos, razón por la cual varios puntos eran poco exactos y generales. Pero era la interpelación con más espaldas políticas hecha por la Confech en todo el año.

Los que antes nos habíamos opuesto, por diversos motivos, a entablar un canal directo con el Ejecutivo, ahora lo proponíamos y con urgencia. No sólo porque estábamos en una mejor posición de fuerza y más unidos. Existía también otra poderosa razón.

Para los días 24 y 25 de agosto la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) había convocado a un Paro Nacional. Inicialmente fue pensada como una jornada en la que posicionar las demandas de la Central, pero conforme la movilización estudiantil tomó cuerpo la ambición política de sus dirigentes creció. Su presidente, el socialista (del partido) Arturo Martínez, llevaba semanas intentando perfilar el paro de la CUT como una movilización en la que “los trabajadores y los movimientos sociales” plantearían sus demandas al Gobierno.

Salvo comunistas y concertacionistas, todos los colectivos y federaciones apartidistas de la Confech, desde los más moderados hasta los más radicales, veíamos este paro más como un peligro que como una oportunidad. Las cooptadas cúpulas sindicales de la CUT contaminarían la causa estudiantil con su desprestigio, además de ser la puerta de entrada para que los intereses de la Concertación se aferraran –tras su estrepitoso fracaso en la trincherá estudiantil- a puestos de comando e intermediación de la movilización con el Estado.

Este criterio pesó en la decisión de entregar los “12 puntos” antes y no después del paro de la CUT y en el modo como abordamos la movilización misma. Los aliados políticos de la cúpula de la Central en el campo estudiantil –ubicados en su vereda derecha– asumieron la movilización como propia, al punto que por ese par de días jugaron a ser los más radicales. El resto la asumimos con una movilización en la que apostar a aumentar los apoyos a la demanda estudiantil y articularnos con sindicatos autónomos de la burocracia de la Central.

El Paro acabó siendo, en términos de la fuerza desplegada y del impacto generado, una nueva y exitosa movilización por la educación. Salvo Martínez y sus adláteres, el grueso de la dirigencia sindical salió a las calles para apoyar a los estudiantes y en abierta beligerancia con la cúpula de la CUT, que quedó aislada. La movilización congregó a cerca de 140 mil personas en Santiago y partió de cuatro puntos distintos. Todas las organizaciones estudiantiles se negaron a marchar con la directiva de la Central desde Plaza Italia. Como FECH, sin ir más lejos, decidimos marchar con los sindicatos disidentes de la Central y los estudiantes de la zona norte desde Independencia.

Cuatro días más tarde, Martínez les daría la razón a todos los estudiantes que desconfiaban de su acercamiento al movimiento. Consultado sobre los hechos de violencia durante el paro, señaló que la CUT no iba a aceptar que estudiantes empañaran la realización de manifestaciones pacíficas, asegurando que “hay profesores de filosofía detrás de esta cuestión de la violencia (...) a los cabros les llenan la cabeza de porquerías, para que salgan a tirar piedras y hacer desórdenes”<sup>35</sup>.

Pese a la masividad y al fracaso de la apuesta concertacionista, el balance no pudo ser feliz. La madrugada del 26, mientras miraba los cacerolazos junto a un amigo y su hermano discapacitado en la población Jaime Eyzaguirre de Macul, fue abatido por una bala disparada desde un furgón de Carabineros el joven de 16 años Manuel Gutiérrez. La institución negó su participación en los hechos y el propio subsecretario del Interior salió en su defensa. Pero tres días después Carabineros se vio forzado a reconocer que los disparos fueron hechos por el suboficial Miguel Millacura, con una subametralladora Uzi.

La muerte de Manuel debía ser la gota que rebalsara el vaso, pero tanto la dirección de Carabineros como el Ministerio del Interior eludieron sus responsabilidades. Presentaron el hecho como “accidental” y “aislado”, y devolvieron las críticas, acusando un “manejo

con fines políticos” de la muerte del adolescente. No era el primer ni sería el último escándalo que Hinzpeter conseguiría sortear con su flexible e implacable hipocresía.

Piñera respondió el mismo 26 y llamó a la Confech a una reunión de acercamiento para el sábado 3 de septiembre, la que aceptamos. La premura del presidente provocó un choque con el ministro Bulnes, que pensaba debía al menos ser consultado. Pero el deseo de figuración de Piñera fue más fuerte que su instinto político. Si existía la posibilidad de aparecer como el gran solucionador del conflicto, debía aprovecharla. Pasó por encima de Bulnes como ya había pasado por encima de Golborne y los rescatistas de la mina San José en 2010. Quería posar ante las cámaras con el equivalente al famoso papelito de los mineros.

Pero los estudiantes no íbamos a permitir que el acercamiento se transformara en una tribuna para una nueva maniobra mediática del Gobierno. Era momento de asegurar la conquista de algunos puntos de nuestro pliego de demandas y contener aquellos ajustes que iban en la dirección contraria. La situación era inmejorable. Habíamos alcanzado unidad, el Gobierno era objeto de transversales cuestionamientos y los ojos del país estaban puestos sobre la negociación. Todo parecía depender de nuestra voluntad.

La noche del viernes 2 de septiembre, a pocas horas del encuentro entre representantes del movimiento y el Gobierno, tuvimos un pleno de federación en la Facultad de Medicina. Continuábamos la discusión, iniciada en la Confech de Concepción, sobre las garantías que debíamos plantear al Ejecutivo de cara a una mesa de negociación. El camino al encuentro parecía despejado, pero a las 9 de la noche conocimos la noticia del accidente de un avión de la Fuerza Aérea en la isla Juan Fernández. La información era confusa. Los medios y las redes sociales decían mucho y nada a la vez, pero una cosa era segura: en el avión viajaban 21 personas, entre ellas, Felipe Camiroaga, el animador televisivo más popular del país.

La tragedia desató la histeria en la dirigencia estudiantil. Comprendimos que suponía un hecho muy sensible para el país, que de seguro afectaría el estado de ánimo de la población y por lo tanto la recepción a la beligerancia que teníamos con el Gobierno. En todas las federaciones debatimos hasta altas horas de la noche sobre la conveniencia de asistir o no a la cita. El rumor según el cual Piñera no asistiría, echado a correr por varios periodistas, nos desorientó. Pusimos como única variable a considerar su presencia, de

modo que cuando los asesores confirmaron que la cita iba tal cual, no parecían haber argumentos para postergar el encuentro.

Ni durante esa noche, ni en las primeras horas de la mañana siguiente, imaginamos lo duras que se nos iban a poner las cosas después del accidente. De nuevo un hecho fortuito le daba a la revuelta un vuelco inesperado. Esta vez, sin embargo, no seríamos nosotros los beneficiados.

### **En el lodo del área chica**

El 3 fue un día extraño. No hacía ni frío ni calor. No corría viento, ni había mucho tránsito. El centro de Santiago parecía un pueblo abandonado en la previa a un duelo decisivo, como cuando en los *western* sólo quedan los pistoleros y bolas de plantas secas. Probablemente fue un sábado como todos, pero así es como lo recuerdo.

Los dirigentes de la mesa ejecutiva, en atención a la confirmación de la presencia de Piñera en el encuentro, decidieron asistir. Algunos, en la FECH, la Feusach y otras federaciones, sospechábamos que lo mejor era no ir, pero nos ganaron las dudas y se terminó imponiendo un abstracto sentido de responsabilidad. Nada muy político gravitó en la decisión.

La reunión, como era de esperar, estuvo cruzada de principio a fin por el extraño ambiente producido por la tragedia de Juan Fernández. No estuve allí, por la FECH le correspondía ir a Camila, pero gastamos casi toda la tarde analizando la cita.

Se respiró un aire de tensa calma y excesiva diplomacia, como si cualquier demostración de dureza fuera a vulnerar el debido estado de duelo nacional. Al único al que parecía tenerle sin cuidado la situación era, por supuesto, a Piñera. No había ni terminado de dar el frívolo discurso de bienvenida cuando, tras recibir un recado de un asesor, lanzó con una bizarra expresión, mitad sorprendida mitad apenada, pero sonriente: “parece que se murieron todos”. La declaración, desatinada e indolente, tensó más el ambiente.

El Gobierno venía decidido a seguir imponiendo sus términos. Los 12 puntos que presentamos recibieron apenas un par de gruesos comentarios por parte del ministro Bulnes. Respecto a las condiciones exigidas para abrir un espacio de negociación permanente, ninguna fue acogida. Los proyectos de ley sobre educación enviados al Congreso seguirían

en trámite, pudiendo incluirseles indicaciones. Proponían discutir sobre la base del GANE y no de los temas presentados por nosotros. Se negaron a televisar las negociaciones, señalando que hacerlo sería crear un “*reality show*”. Y “recomendaron” disminuir la cantidad de representantes de cada organización.

Las negociaciones informales que algunos operadores comunistas y ex dirigentes de la FEUC habían entablado con el ministerio no consiguieron allanar el camino a un entendimiento sobre los términos de la negociación. La Moneda estaba en conocimiento del débil posicionamiento de sus interlocutores en la interna de la Confech, y como éstos ya se habían abierto muy temprano a aprobar menos de lo que el movimiento exigía en septiembre –error que los dejó en una complicada posición-, el Mineduc nunca se sintió realmente obligado a conceder más.

Un año más tarde un asesor del ministerio reconocería que mantenían abierto ese canal “para saber todo lo que *no* pasaba en la Confech”.

En estricto rigor, el encuentro fue un fracaso. La Moneda no dio ninguna señal de apertura ante los temas más sensibles: la prohibición del lucro y el aumento sustancial del financiamiento a la educación pública. Propuso, además, una modalidad de trabajo que sabían no podía ser aceptada por ninguno de los actores del movimiento, pues no ofrecía ninguna garantía respecto al carácter vinculante de las conclusiones ni una base mínima de acuerdos.

Pero la presión que el estado de duelo puso sobre los dirigentes fue tan fuerte que, aún cuando la instancia no fue más que un elegante portazo, se sintieron obligados a mostrarse prudentes ante la opinión pública. Pero la prudencia fue demasiada. La prensa recogió que la Confech reconocía que la reunión había permitido “transparentar posiciones” y que se habían demostrado “voluntades de diálogo”. La lectura que con esos elementos hicieron los medios y las bases estudiantiles fue que se había abierto una oportunidad para el movimiento. Pagamos caro el error.

El lunes siguiente llegó la propuesta de mesas de trabajo del Gobierno. Esa misma tarde, y sin mediar coordinación con los demás actores, el Colegio de Profesores la rechazó, sin plantear nada como alternativa. Al día siguiente tuvimos sesión de la Confech y también resolvimos rechazar, pero modificamos las garantías para establecer un diálogo “en serio”: frenar los proyectos de ley en educación hasta la existencia de acuerdos, postergar el plazo

límite de becas y créditos para cerrar el primer semestre, transmitir las mesas por televisión y frenar los subsidios a instituciones con ánimo de lucro mientras no existiesen las debidas legislaciones y mecanismos de fiscalización.

Como el país estaba de luto por la tragedia de Juan Fernández, nos vimos forzados a transformar la movilización convocada para el 8, que inicialmente era un Paro Nacional, en “marchas silenciosas”. Iba a llegar menos gente y queríamos evitar a toda costa que se generaran hechos de violencia. Entre las protestas de los más radicales, que acusaban traición, y la histeria de los más moderados, paralizados por un pesimismo trágico, los zonales metropolitano y costa decidimos cambiar el carácter de la movilización del 8, pero mantenerla. El zonal sur, en especial Concepción, rugió. Pero allí donde el paro del 8 se mantuvo, fracasó estrepitosamente. La convocatoria descendió y los enfrentamientos con Carabineros coparon todo. El 12 llevamos ante el ministerio nuestra contrapropuesta de garantías para la mesa y mantuvimos la adhesión a la marcha del 14 convocada por los secundarios, con más énfasis por la ACES que por la CONES.

El ministro Bulnes decidió postergar su respuesta a la espera de la marcha convocada para el 14 de septiembre, como última demostración de fuerza antes de las Fiestas Patrias. La convocatoria apenas llegó a las 12 mil personas en Santiago. Bulnes, al día siguiente, rechazó tres de las cuatro garantías.

El 18 de septiembre, y las fiestas que lo preceden y le siguen, fue -como es tradicional para todo Chile- un paréntesis. Para muchos era la primera oportunidad de descanso después de cuatro meses de intensa dedicación. Pero el papelón del 14 nos comía la cabeza. En la movilización llamada para el 22, ahora sí convocada por todos los actores y en todo el territorio nacional, debíamos repuntar.

El fin de las Fiestas Patrias consolidó una verdad que hasta el minuto se aplicaba sólo en casos aislados, pero que ahora era absoluta: el mejor enemigo del Gobierno era el propio Gobierno. Después de la tragedia de Juan Fernández y nuestro tropiezo del 14, tenían todo para consolidar su nueva posición de superioridad. La piel de la opinión pública estaba muy sensible y la base estudiantil desgastada. Pero en la administración Piñera la habilidad de crearse problemas, y de innovar en la forma de producirlos, es mayor que la de aplicar las medidas más razonablemente convenientes para sus intereses.



El 20 de septiembre, Piñera anunció que 70 mil estudiantes secundarios habían perdido su año académico –o sea, debían repetir- por no inscribirse en el plan de recuperación de clases “Salvemos el año escolar”. De inmediato acusamos al Gobierno de “juego sucio” y de asumir la negociación, en palabras de Giorgio, “como quien se dispone a jugar una partida de póquer”. Tras las críticas de varios medios de comunicación que sin reparos calificaron la medida como excesiva, el Gobierno se vio obligado a matizar el anuncio. Obviamente Piñera le pasó la pelota a Bulnes, quien anunció la extensión del plan el día siguiente.

Pero La Moneda y la derecha tenían mucha más artillería contra el movimiento. Sus medios, en especial la mercenaria La Tercera y el panfleto vespertino La Segunda, comenzaron a publicar las actas de las sesiones de la Confech y a machacar con la idea de que el movimiento estaba “quebrado” entre “moderados” y “ultras”, y que éstos últimos habían desplazado a los primeros. Un especial gusto por difundir esta tesis adquirió el ministro vocero del Gobierno Andrés Chadwick.

La respuesta estudiantil del 22 a las negativas de La Moneda y a sus ataques mediáticos fue sorpresiva. Pese a los rumores de desgaste y división sólo en Santiago la marcha convocó a cerca de 150 mil personas. Esta vez caminamos desde Estación Central, ocupando ambas calzadas de la Alameda, hasta el Parque Almagro. Los incidentes de violencia fueron menores. La masividad y orden de la movilización fue evidente al punto que La Moneda no pudo mentir con impunidad sobre el número de asistentes. Chadwick, un poco abatido, se limitó a decir:

- Esta es la marcha 35 del movimiento estudiantil (...) una más o una menos no va a cambiar nuestra preocupación fundamental de insistir con la necesidad de una mesa de diálogo.

Pero el mejor regalo para la posición estudiantil vino, aunque cueste creerlo, de lo profundo de la trinchera enemiga. Cristián Labbé, alcalde de la comuna de Providencia, militante UDI y uno de los máximos referentes de la ultraderecha militarista chilena, ordenó desalojar los liceos José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal de Prat un día antes de la marcha. El coronel en retiro, ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) durante la dictadura, emprendió acciones legales contra los jóvenes y anunció la programación obligatoria del retorno a clases para el viernes 23.

- Es necesario –sentenció con furia- que se restablezca el imperio del derecho.

Pero la madrugada del viernes los niños del Lastarria y las niñas del Carmela se retomaron sus liceos. En presencia de apoderados y periodistas discutieron sus pasos a seguir, hasta que una nueva orden de desalojo llegó en la forma de violentos chorros de agua maleada con químicos irritantes. Hubo heridos y daños a la infraestructura

En un arrebato de cólera pocos minutos después, el alcalde anunció el cierre anticipado del año escolar para ambos liceos y los otros tres que se mantenían en toma: el 7 de Niñas, el Tajamar y el Arturo Alessandri Palma. Como no le era suficiente, sumó la cancelación de las matrículas 2012 para todos aquellos estudiantes que provinieran de otras comunas y repitieran de curso por inasistencia, añadiendo que no habría cupos para estudiantes nuevos de otras comunas en ningún liceo de Providencia. El impacto no era menor, pues el 85 por ciento de los estudiantes de dichos establecimientos son afuerinos, principalmente, de comunas de menos recursos.

A las 11 de la mañana, Labbé anunció a la prensa y a la población:

- Providencia declara cerrados los colegios. No volveremos a intentar retomar los recintos. Tampoco serán desalojados nuevamente, no se luchará más por recuperar físicamente los colegios. Sólo seguirán en clases (de manera virtual o en otros recintos) aquellos alumnos que se inscribieron en el plan "Salvemos el año escolar". Los que no, perderán el año sin contemplación.

El episodio me hizo recordar la respuesta que me dio Labbé cuando, siendo mechón de Periodismo, lo entrevisté sobre las críticas a sus órdenes de desalojo a colegios. El ex CNI, mientras acariciaba la superficie de su imponente escritorio, cubierto de motivos militares y vigilado por fotos de Pinochet, me contestó:

- ¿Y qué? ¡Si los colegios son míos!

Los escolares respondieron a la violencia del ex coronel esa misma tarde, con una lluvia de huevos sobre el Palacio Falabella, sede del municipio, y con una marcha ciudadana el lunes siguiente. El 8 de noviembre la Corte de Apelaciones aceptó un recurso de protección interpuesto para prohibir la aplicación de las medidas anunciadas.

Al Gobierno, entre la espada estudiantil y la pared ultraderechista, no le quedó más que descartarse sutilmente del ex coronel. “Su decisión es completamente autónoma y de su

responsabilidad”, señaló el vocero Chadwick, como quien le hace la desconocida a un pariente lejano caído en la demencia.

La revuelta estudiantil tomó por esos días la forma de una eterna montaña rusa. Ya no se sabía qué nos deparaban los próximos metros. Visto desde fuera podía ser un inesperado tirabuzón en subida, pero desde dentro, se veía mucho más probable una muy empinada y agresiva caída.

Con la primavera llegó el invierno para el movimiento. No pudimos convertir los errores del Gobierno y la derecha en oportunidades porque nuestras heridas eran más profundas que las de ellos. Gran parte de la burocracia estudiantil, en especial el extremo izquierdo de la Confech y la ACES, mantuvieron un radicalismo sin base material de sustento.

Con el desgaste producido por la extensión del conflicto, en la gran mayoría de los colegios y las universidades los estudiantes comenzaron a bajar las tomas o bien a dejarlas abandonadas, quedando en ellas minúsculos grupos auto concebidos como “consecuentes”. En tanto que los paros, mientras acaloradas recriminaciones mareaban a la Confech, comenzaron a bajarse de forma espontánea y fragmentada.

Ya en la sesión del 15 de septiembre, en la Universidad de Valparaíso, 20 de las 38 federaciones de la Confech habían cerrado el primer semestre y estaban próximas a iniciar las clases del segundo. Todo el resto tenía a sus bases divididas, entre los que querían reiniciar las clases, o ya las habían iniciado sin atender resoluciones universales, y los que permanecían en paro o con sus facultades tomadas. Los segundos eran menos, salvo en las universidades de Playa Ancha, de Chile, de Concepción y Católica de Valparaíso. La semana siguiente, en Coquimbo, comprobamos que esta tendencia se agudizó, ya porque algunas habían votado volver a clases o porque otras habían sido forzadas por sus autoridades o desalojadas. Para la sesión extraordinaria celebrada en el campus Lo Contador de la Católica el 27, nuestro poder de movilización estaba disminuido a una mínima expresión.

En Valparaíso condenamos la intransigencia del Gobierno para con las garantías de negociación exigidas y en Lo Contador decidimos participar en las mesas de diálogo. Sabíamos que La Moneda no se lo esperaba. Pero desmoronadas las columnas que unían a

la organización dirigente del movimiento con las bases estudiantiles, a la burocracia comenzó a fallarle la puntería.

En el bando apartidista se habían hecho con la conducción los más izquierdistas, la que consiguieron más por cansancio que por mayoría. Disociados totalmente de la situación real de fuerzas –incluso de la propia, pues ni sus universidades estaban movilizadas– forzaron un llamado a no iniciar el segundo semestre, en circunstancias que el 70 por ciento de las bases de la Confech estaba ya próximo a iniciarlo o ya lo había hecho. El anuncio hizo quedar en ridículo a los voceros y enfureció al ministro. Insistieron, además, en que la gratuidad a secas y sin matices ni plan alguno debía ser el primer punto a negociar. El objetivo era evidente: producir el quiebre de la mesa.

El bando de los partidos, en tanto, estaba en la práctica anulado. A los comunistas y la Concertación dejó de importarles el éxito de la negociación. En parte porque no podían hacer mucho al respecto, pero sobretodo porque no expondrían a sus dirigentes a un papelón. El fracaso del diálogo les permitía además levantar el relato según el cual todo era culpa de la derecha. Así, además, habría más paño que cortar en el Parlamento, espacio en el cual serían los protagonistas. Mientras que la FEUC seguía alojando la esperanza –a esas alturas un tanto ingenua– de poder conducir una negociación medianamente decente.

En un abrir y cerrar de ojos, los autónomos nos encontramos junto a la FEUC y algunos independientes de izquierda en la posición más pro-negociación. Al extremo izquierdo, por intermedio nuestro y de los libertarios, le hicimos ver que cegados por su antipartidismo visceral habían terminado trabajando para la Concertación. A los comunistas, mientras tanto, la FEUC insistía en sumarlos a un esfuerzo por conducir razonablemente la negociación. Pronto nos descubrimos incapaces de modificar el equilibrio de fuerzas, por lo que nos concentramos en ejecutar la decisión que habíamos tomado tras la sesión de Valparaíso: el repliegue.

Las mesas de diálogo nacieron muertas. Ninguna de las partes las enfrentó con unidad de propósitos. Bulnes, después de un tire y afloja concedió un inicio de las negociaciones no sujeto al regreso a clases en la primera reunión, el 29 de septiembre. Pero el 3 de octubre, dos días antes del inicio formal de las mesas, Hinzpeter envió un proyecto de ley que tipificaba las tomas de colegios y universidades como un delito con penas de

cárcel. La intención era evidente: agitarle las aguas al movimiento para entorpecer que se concentrara en la negociación.

Resolvimos no atender el voladero de luces y asistir a la reunión del 5, que era lo que La Moneda esperaba que no hiciéramos. Pero en cosa de minutos, lograron su cometido. El representante de los liceos técnicos secundado por los representantes ACES, decidieron, de mutuo propio y sin previo acuerdo ni con universitarios ni con profesores, salir de la reunión y declarar la mesa “quebrada”.

A los pocos meses el dirigente secundario de los liceos técnicos se asumió concertacionista, lanzándose en 2012 como candidato a concejal por el Partido Radical. Ahí estaba la “ultra” de los medios.

Con ese desenlace ya no existían condiciones para una negociación directa movimiento-Gobierno. Las facciones de la Confech que no la deseaban se plegaron a los secundarios, arguyendo que la instancia no podía continuar sin ellos, mientras que el Gobierno endureció su postura. Las mesas llegaron a su fin en medio de un confuso incidente sin que nadie expusiera con claridad por qué. Había ocurrido lo peor: las rigideces del Gobierno, que obviamente gravitaron y mucho, se diluyeron, y nuestro tartamudeo y silencio fue ensombrecido por la versión de La Moneda: la falta de seriedad y el maximalismo estudiantil condujeron el diálogo al fracaso.

No es descabellado afirmar que, si entendemos por movimiento la sinergia entre la acción estudiantil de masas y la conducción consciente de su energía y burocracia, la implosión del enfrentamiento Confech-Gobierno marcó el fin del movimiento estudiantil de 2011. De allí en adelante, la tendencia a la dispersión no hizo sino acentuarse, mientras que la gestión de la burocracia confederada se disoció de la deliberación de los espacios de base. Se pueden contar algunas escaramuzas, como también presiones ejercidas por la dirigencia estudiantil en el Parlamento para tratar de incidir en la Ley de Presupuestos 2012 y contener ciertos ajustes neoliberales. Pero estos hechos ya no guardaron mucha relación entre sí.

El grueso del contingente estudiantil se volcó en octubre a gestionar lo mejor posible el retorno a clases y a contener los conflictos locales desencadenados tras cinco meses de paralización y tomas. La ocupación de la Casa Central de la Chile, sin ir más lejos, se extendió hasta el 18 de diciembre, pero divorciada de la decisión de los

estudiantes: estuvo poco más de un mes tomada por un reducido grupo que pretendía permanecer hasta la llegada de la educación gratuita. Mi última gestión como vicepresidente FECH, de hecho, fue parlamentar con ellos para devolver la soberanía del edificio, como habían resuelto los estudiantes, a la universidad. Dinámicas de ese tipo marcaron el fin del año en muchas universidades.

## **A las trincheras**

La magnitud de lo que estábamos haciendo me atropelló de súbito en dos ocasiones durante 2011. La primera, en el cumpleaños de mi madre, a fines de julio, cuando encontré a toda mi familia enterada de los pormenores del movimiento. La segunda, entre el 13 y el 19 de octubre, durante la gira que junto a Camila Vallejo y Giorgio Jackson emprendimos a Europa, donde pudimos comprobar que el impacto internacional de la revuelta superaba los límites de lo que éramos capaces de imaginar.

En el otoño del hemisferio norte, en París, Ginebra y Bruselas la movilización estudiantil chilena era el gran tema de interés entre los chilenos residentes, el movimiento estudiantil local y la izquierda que miraba a América Latina. Invitados por la Fundación Edgar Morin, pudimos recorrer estas tres ciudades y entrevistarnos con asociaciones estudiantiles europeas, la división de Derecho a la Educación de la UNESCO, el Parlamento Europeo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Expusimos nuestras demandas y las deudas del Estado chileno en cuanto a garantías del derecho a la educación y a la no discriminación, así como la violación sistemática de las libertades de expresión y manifestación.

Lo más sorprendente fue la recepción de la gente. Los chilenos, la mayoría de ellos exiliados en dictadura o hijos de esa oleada de emigración forzada, nos acogieron como verdaderos héroes nacionales. Recibieron nuestros discursos entre llantos y cerrados aplausos. Envueltos en todo ese cariño y atención, nos hicieron sentir hijos de una familia enorme, una familia que había encontrado en la causa democrática y emancipadora de los estudiantes una razón para reunirse. En sus zapatos, no era para menos. Los recuerdos que

guardaban de Chile eran de sufrimiento y obediencia, mientras las nuevas generaciones manejaban la imagen del país arrodillado ante los ídolos del neoliberalismo.

Los estudiantes locales, en tanto, veían en la lucha de sus congéneres chilenos un referente a seguir para las suyas. Tanto por las prácticas y dinámicas, alejadas del burocratismo que paralizaba sus organizaciones, como por el contenido político de nuestras demandas. Con el pretexto de la crisis, las elites neoliberales europeas, de derechas y socialdemócratas, han emprendido el desmantelamiento de los Estados de Bienestar, comenzando en varios casos con la progresiva mercadización de la educación. Sabían que nosotros vivimos eso hace más de 30 años y que ahora luchábamos contra sus consecuencias. De ahí que vieran nuestra movilización como un arma contra las pretensiones de sus adversarios.

Hasta Edgar Morin, filósofo de talla mundial, y Stephane Hessel, redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 e inspirador de los Indignados, estaban maravillados con la revuelta estudiantil chilena.

Con esta tremenda experiencia a cuestas volvimos a Chile más conscientes de “la mansa cagadita” -como nos dijo un chileno-francés en París-, que habíamos dejado. Claro que al Gobierno y a la derecha la gira no les pareció nada de simpática. Parlamentarios de la UDI nos acusaron de viajar “a ensuciar la imagen de Chile” y de que nos habíamos “pegado unas vacacioncitas”. Lo segundo era falso, pero en lo primero no dejaba de haber algo de verdad. Salvo que no era la imagen de Chile la sucia sino la del modelo. Nosotros cumplimos sólo con avisar; nunca es bueno comer nada después de su fecha de vencimiento.

Pero a fines de 2011 las principales preocupaciones del movimiento estudiantil giraban ya no en torno al conflicto con La Moneda sino a sus desafíos internos. En especial el recambio de las dirigencias.

Después de las históricas movilizaciones del año que se acababa, las elecciones federativas se perfilaban como las de mayor relevancia política en mucho tiempo. Serían un indicador del balance que los estudiantes hacían del año y de las perspectivas que asumían para el próximo, y sus resultados arrojarían un nuevo equilibrio político de fuerzas en el movimiento. En Izquierda Autónoma, sin embargo, sentíamos que había algo más en juego: el legado político de la más importante movilización estudiantil.

Con esa convicción en mente salimos la segunda mitad de noviembre a disputar la presidencia de la FECH. No la teníamos fácil. Nuestros principales adversarios, los comunistas, llevaban a la reelección a Camila, quien a esas alturas ya era la dirigente estudiantil más popular en la historia del país. Pero teníamos a nuestro favor haber reclutado a los mejores dirigentes de la movilización. Logrando que el estudiantado comprendiera las implicancias políticas de los resultados y evitando que el debate se gremializara, la elección era ganable.

Fueron las elecciones más votadas en la historia de la FECH y una de las que mayor atención nacional concitó. Más de 13 mil estudiantes acudieron a las urnas y los debates entre las principales opciones a la conducción ocuparon planas en diarios y horas en radios y televisión. También fueron de las más crudas. Encarnizadas discusiones relativas al uso político que la próxima Federación daría al capital de la movilización reemplazaron las monótonas e insulsas divagaciones de antaño. Dejar o no dejarse instrumentalizar por la vieja política, ese era el dilema.

Contra los pronósticos de todos los observadores externos y la sensación instalada por la cobertura de los grandes medios, ganamos.

La campaña fue agotadora, pero lo más difícil estaba por venir. 2011 dejaba enormes expectativas cifradas en el movimiento estudiantil, pero también un profundo y extendido desgaste en su base. El Gobierno mostraba signos de recuperación y en la Concertación se reducía el umbral de tolerancia hacia las demandas y críticas planteadas desde la protesta.

En noviembre y diciembre las facciones más conservadoras de todos los partidos, oficialistas y de oposición, avanzaban sobre la causa estudiantil para declararla muerta. Tras ellas no tardaron en reaparecer las altaneras figuras de la tecnocracia para secundarlas con sus opiniones “especializadas”.

Ni un mes había pasado desde las últimas marchas cuando expertos y líderes de la oposición ya hacían causa común con el llamado de La Moneda para que todo volviera a la normalidad.

El 20 de noviembre, el ex presidente Eduardo Frei, primero en saltar al compás del movimiento cuando éste atacaba a Piñera, sentenciaba: “ya no hay tiempo para buscar la opinión del movimiento estudiantil”<sup>36</sup>.



Esa misma semana expertos y ex ministros de Educación de la Concertación como José Joaquín Brunner, Mariana Aylwin y Mónica Jiménez confluían con expertos pro-gobierno como Harald Beyer y Patricia Matte en criticar que “nuestros líderes políticos (...) estén pensando en extender una política amplia de gratuidad en la educación superior”<sup>37</sup>.

La movilización estudiantil había logrado poner a la derecha en su histórica posición de minoría, lo que nos granjeó la compañía –auténtica en algunos casos, oportunista en la mayoría- de la Concertación. Pero en el minuto en que disparamos a la médula del modelo educativo, perturbando los consensos de la transición, el partido transversal del arcoíris no sólo le dio la espalda a la movilización; salió a trancarla.

Cuestionado el régimen, moros y cristianos salieron en su auxilio. Lo mismo había ocurrido, pero a la inversa, frente la “revolución pingüina” a fines de 2006. Entonces la derecha comenzó apoyándola para deslegitimar al gobierno de Bachelet, pero apenas el movimiento levantó demandas sustantivas fue frontalmente atacado por ambas coaliciones.

Así las cosas, apenas ganamos la FECH nos dimos cuenta que la cuesta de 2012 iba a estar más empinada que la de 2011. La Moneda no cometería los mismos errores, la Concertación se iba a mantener dividida entre el apoyo testimonial al movimiento y la colaboración con el Gobierno y en la vereda estudiantil campearía el cansancio. Se avecinaba además la nube de las elecciones municipales, que detrás de la sonajera electoral escondería una desatada medición de fuerzas de cara a la negociación por cupos parlamentarios y reparticiones en el nuevo gobierno.

Estos factores ya habían resultado decisivos en el desenlace del choque de octubre, con el quiebre de la mesa de negociación como momento más vistoso. Si bien los desencuentros en la franja dirigente de la Confech y las maniobras del gabinete de Piñera desempeñaron un papel, fue sólo el de decorar una situación ya configurada por el cierre de filas de las elites políticas y económicas ante la revuelta estudiantil.

2012 no se podía enfrentar igual que 2011, nuestras condiciones eran distintas y también las de nuestros contrarios. Las posiciones conquistadas, por lo demás, eran demasiado importantes como para ponerlas en peligro. La transversal condena social al lucro con la educación y la exigencia de un nuevo tipo de derechos y ciudadanía rebasaban con creces la reivindicación sectorial: contenían el germen del reclamo por nuevas representaciones políticas y un nuevo tipo de Estado.

La conquista de nuevos territorios a costa del retroceso de nuestros adversarios fue el impulso que nos movilizó en 2011. La defensa de las posiciones conquistadas y el asedio intermitente a las filas enemigas el ímpetu que nos debía unir en 2012. Hasta que recuperáramos fuerzas y el invierno, que había sido nuestra primavera, causara estragos en las envalentonadas columnas de la vieja política.

No narraré aquí los hechos de 2012, aunque corresponden a una prolongación de la lucha iniciada el año que acabo de relatar. Un adecuado balance de la revuelta estaría incompleto si ignora esa extensión, pero no soy el más indicado para hacerlo. Los encargados de defender la causa estudiantil en la primera línea esta vez fueron otros. Es su punto de vista el más valioso.

Sin embargo, para efectos de aclarar que lo que aquí acaba es mi relato y no la revuelta como tal, una gruesa pincelada sobre los hechos generales que siguieron no viene mal.

Para enfrentar 2012, el Gobierno cambió al agotado Bulnes por el imperturbable Harald Beyer, tenido no por interesado político sino por objetivo experto. Desplegó una tenaz propaganda para hacer creer que el movimiento había sido capturado por una irracional “ultraizquierda”. Y clamó, junto a los opositores por conveniencia, por el retorno a los sensatos acuerdos entre los políticos profesionales y la gente bien.

2012 fue menos espectacular que 2011, pero mantuvo su parecido a una montaña rusa. El movimiento protagonizó enormes movilizaciones que sellaron la vigencia de sus demandas y fuerza, pero también atravesó momentos de incertidumbre. Fue arrinconado por unas semanas junto a la violencia marginal, pero se unificó tras demandas coherentes que certificaron que no eran los estudiantes los que jugaban al “todo o nada” sino las elites al “nada o nada”.

La Moneda descansó en la transversal autoridad de Beyer sobre asuntos educativos, pero la ultraderecha impuso sus términos y de técnico al ministro le quedaron los puros anteojos. Fue pillado en soberbias contradicciones. De afirmar en julio de 2011 que “las universidades con fines de lucro nunca van a ser buenas universidades”<sup>38</sup>, a asegurar que “no hay universidades que lucren”<sup>39</sup> en mayo de 2012. Pasó a la historia como el

funcionario de Estado peor evaluado por la población durante la era Piñera, con 69 por ciento de desaprobación en septiembre de 2012<sup>40</sup>.

Fracasó también en su intento de contener lo incontenible: la idea de que el mercado educativo podía “autorregularse” se hizo trizas con la comprobación de una extendida mafia de compra y venta de acreditaciones institucionales de educación superior. Al terminar el año, una universidad completa debió ser cerrada y otras privadas de reconocimiento estatal.

En 2012, la vieja política recuperó terreno, pero nuevas movilizaciones sociales coparon la agenda pública. De los trabajadores pesqueros, de los habitantes de Aysén y del poblado de Freirina. Los estudiantes continuaron en las calles con el respaldo irrestricto de 7 de cada 10 chilenos.

- Todo ello es prueba –afirmaba Andrés Fielbaum en su discurso de ascenso a la presidencia de la FECH 2013- de que en Chile las mayorías están, lenta pero decididamente, reapropiándose de la política. Como esto vaya a finalizar, sigue en juego.

Si bien esta frase de Rigoberta Menchú –agregó para finalizar- responde a un contexto muy diferente, me parece que refleja muy bien lo que el movimiento estudiantil y social hoy representa: *No vamos a cambiar el país en poco tiempo, pero se hará con nosotros, no sin nosotros.*

## Epílogo

“En plena edad del plástico, seremos fuerza, seremos cambio”, cantaban Los Prisioneros allá por 1984, recién salidos del liceo. *La voz de los '80* era un llamado directo a la acción contra la opresión militar, pero sobre todo el grito de guerra de una juventud deseosa de libertad y derechos. Representaba, como ningún otro artefacto cultural o discurso político de la época, la convicción de que nada nuevo emergería sino era sobre las ruinas de lo viejo. La buena intención de hippies y punks había muerto “en las garras de la comercialización” y las juventudes que “pidieron comprensión, amor y paz con frases hechas muchos años atrás”, ya no convencían “ni por sólo un instante”.

*La voz de los '80* confiaba que el cambio nacería de las propias entrañas del presente, con autonomía de los sermones de los dueños del país, por más desfavorables que se presentaran las condiciones. A diferencia de otras de sus canciones, pero con la misma fuerza iconoclasta, destilaba optimismo y confianza en el ímpetu de la juventud.

Ese espíritu rebelde que Los Prisioneros representaban en la música y la cultura popular era el mismo que llevó a vastos sectores del pueblo a alzarse contra la injusticia cuando la política estaba devastada por la represión y no tenía mucho que ofrecerles. Fue refugio para la dignidad de millones y pavimentó el derrumbe de la dictadura, cuando al oponérsele se corría el riesgo no sólo de recibir una paliza, como hoy, sino de perder la vida.

Pero las voces de los '80 fueron traicionadas. Cuando vieron a las mayorías reclamar protagonismo, a las elites militares y civiles les entró el pánico. Y en ese pánico encontraron justificación para unirse. Así, como un pacto contra la movilización popular, fue que se selló el Acuerdo Nacional y el plan que la propia dictadura había tramado para seguir mandando en democracia.

El espíritu de las movilizaciones sociales de la última década, en especial de las estudiantiles, guarda mucha relación con la potencia de la rebeldía juvenil de los '80. Por su amplitud social, su desobediencia cultural y, sobre todo, su autonomía política.

Después de la histórica revuelta estudiantil de 2011 el descontento de la sociedad chilena y sus conflictivas expresiones han ocupado el centro de la discusión política. Abrió la puerta para que diversos actores sociales, de los cuales el movimiento estudiantil sigue siendo el más fresco y articulado, levantaran decididos reclamos a la extrema mercantilización de nuestras vidas y a la sordera de un sistema político que parece no preocuparse más que de mantener las cosas tal cual.

En la medida que la protesta fue capaz de superar la demanda gremial para poner en entredicho el paradigma de derechos imperante, puso contra la pared la privatización de la vida de los chilenos y el modelo de Estado que lo ampara. El conflicto que instaló entre el principio de la focalización del gasto social y el de universalidad de los derechos anunció el nuevo tipo de ciudadanía y Estado que los anhelos del Chile actual exigen como respuesta.

En definitiva, la irrupción estudiantil levantó un enorme reclamo por la superación del legado social y político de la dictadura militar y los falsos consensos que lo han estabilizado durante estos 20 años. En enfrentar ese desafío, sorteando los obstáculos que ponen la vieja política y el autoritario manejo tecnocrático de las decisiones, parece descansar la posibilidad de invertir ese potencial en la apertura de un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.

Esa opción está allí, instalada frente a nuestras narices, pero nada garantiza que se vuelva realidad. Su aborto a manos de una política conservadora, que con llamativas contorsiones mantenga las cosas igual, es un riesgo agazapado a la vuelta de la esquina.

“El viejo mundo –decía Gramsci- ha muerto. Pero el nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. La advertencia del revolucionario italiano, aunque hecha hace mucho y desde muy lejos, cobra plena vigencia en nuestros días. El ímpetu transformador de las luchas estudiantiles todavía no logra proyectarse a las disputas que definen el futuro de la sociedad chilena. Mientras tanto, la vieja política recupera terreno.

Es fácil emborracharse con la espectacularidad de la revuelta y olvidar que las voces de los 2000, como las de los ‘80, también pueden ser ahogadas.

El movimiento estudiantil emplazó a la política a evaluar críticamente no sólo las perversiones de la transición, sino su esencia: la destrucción de los derechos y la exclusión política de las mayorías. En ese sentido, le presentó la oportunidad de reencontrarse con la

sociedad. A juzgar por el comportamiento del sistema de partidos durante y después de la movilización, es válido preguntarse si acaso la aprovechó.

Pero agotada en pugnas de poder por el poder, en un espectáculo que no logra hacer sentido al chileno de a pie, la política oficial fue sobrepasada. El debate de fondo planteado por los estudiantes no encontró eco en su agenda. Es más: se dio con su espalda, con su soberbia autoreferencia, con su hipocresía.

Las elecciones municipales celebradas en octubre de 2012, pocos meses después de una nueva oleada de protestas estudiantiles, ofrecieron una nueva ocasión a la política para enmendar su rumbo. Allí, de nuevo, los intentos por eludir las discusiones de fondo fueron castigados por la ciudadanía.

El histórico índice de abstención, que alcanzó el 60 por ciento, vino a reforzar lo que la movilización estudiantil ya había estampado: el grave déficit de legitimidad del sistema político chileno. Fue un nuevo golpe a la vieja política, que a pesar de haber celebrado el indecoroso trámite de presentar como triunfadores a los que habían perdido menos votos, tampoco acusó recibo del rechazo ciudadano.

Pero las municipales mostraron también otra cosa, tanto o más preocupante para quienes protagonizaron o apoyaron la revuelta estudiantil. Los nuevos movimientos pueden expandir los horizontes de lo políticamente posible en tiempos de movilización, pero cuando decae un poco su energía o se avecinan coyunturas más favorables para sus contrarios, como las electorales, se reducen a la negación, delegando por acción u omisión su representación a los actores políticos ya constituidos.

El llamado de la ACES a no participar en los comicios, con su campaña #YoNoPrestoElVoto, fue de lo más intrépido planteado desde la vereda estudiantil, pero no pasó de un testimonial saludo ideológico a la bandera. La Confech, por su parte, quedó paralizada por la pugna entre quienes forcejeaban por socorrer al sistema político y quienes proponían apoyar sólo a los auténticos esfuerzos de cambio.

Votos más votos menos, los viejos actores de la política mostraron una nada despreciable capacidad de copar la agenda pública, aparentar vitalidad y volver a delinear los límites de lo que se debía y podía hacer en el país. Después de todo, las elecciones son su forma favorita de relacionarse con la sociedad, y a estas alturas, una de las últimas que les va quedando.

Los guardianes de la vieja política saben que siempre podrán trancar el avance de los nuevos movimientos cuando la protesta amaine y se avecinen procesos electorales. De ahí que para sortear esas resistencias, mantener la protesta social resulte fundamental, pero no suficiente.

Todo parece indicar que si la respuesta de los nuevos movimientos en los próximos momentos decisivos es el silencio o la pura negación, estarán delegando su futuro a los mismos que los han aplastado. Y la buena intención de los estudiantes, como la de los hippies y los punks en la canción, morirá en las garras, esta vez, de la cooptación o el olvido.

Poco han ayudado para enfrentar este problema antes, durante y después de 2011, las inclinaciones a la auto marginación, al escondite en los territorios “protegidos” de los grandes desafíos. Es justamente lo que pretenden los poderosos. Que las fuerzas del movimiento no se hagan cargo de la situación que crearon con su movilización y deleguen lo que viene en ellos.

Mala cosa. Esa es justamente la disyuntiva a la que la vieja política quiere someter a los nuevos movimientos para dejarlos sin escapatoria: fundirse con ella o dejar de existir. Muchos serán convocados, bajo esa amenaza, a adornar las coaliciones de la vieja política para alargar su agonía. Y maquillarán su decrepitud con el polvillo de nuestra fragmentación. Esa ya es historia conocida. Si se repite, ya no será como tragedia, sino peor, como comedia.

La única alternativa consistente para proyectar el potencial transformador de la revuelta estudiantil es que los nuevos movimientos asuman el desafío de construir cabeza y voz propias, de forjar una política propia. Y con ella tejer una amplia alianza social y política, que articule los intereses que no caben en los estrechos márgenes de la política de la transición y se haga presente justamente allí donde esos intereses no son bienvenidos.

Seremos fuerza y seremos cambio, en definitiva, sólo a condición de tomarnos en serio la interpelación de *La voz de los '80*, de resistir ser relegados a los estantes de la historia y reimaginar con creatividad el papel que nos asignó la mezquina transición. De negarnos a dejar la rebeldía que cultivamos en las calles y las universidades en el baúl de los recuerdos. De encarar con audacia las situaciones difíciles, en principio desfavorables,

para no ser nunca más espectadores. Ese es el desafío al que nos empuja la histórica gesta de la revuelta estudiantil.

\*



---

## Referencias y bibliografía

### CAPÍTULO I

<sup>1</sup> RUIZ, Carlos (2010, 8 de noviembre): *Llegó el original, salió la copia*, La Tercera.

<sup>2</sup> SÁNCHEZ, Julio; y DELGADO, Felipe (2010, 31 de marzo): *Sin licitación pública Gobierno elige a 3 empresas como únicas proveedoras para la reconstrucción*, Radio Bío-Bío. En: [www.biobiochile.cl](http://www.biobiochile.cl) [Consultado en 01-06-12]

### CAPÍTULO II

<sup>3</sup> RUIZ, Carlos (2012): “El fin de los silencios de la transición”, en *Debates y Combates* N°2, Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.

<sup>4</sup> TIRONI, Eugenio (2011, 21 de junio): *¿Qué está pasando?*, El Mercurio.

<sup>5</sup> TIRONI. *Ibid.*

<sup>6</sup> MOULIAN, Tomás (2002): *Chile Actual. Anatomía de un mito*, Editorial LOM, Santiago de Chile. P. 141

<sup>7</sup> KREMERMANN, Marco (2012, 6 de enero): *PIB per cápita de 16 mil dólares ¿Nos quejamos de llenos?*, Fundación SOL, El Mostrador [Consultado en 28-06-12]

<sup>8</sup> OCDE (2011): *Perspectivas económicas de América Latina 2011. En qué medida es clase media América Latina*. Publicaciones OCDE. P. 19

<sup>9</sup> OCDE. *Ibid.*: 24-25

<sup>10</sup> RUIZ, Carlos, y ORELLANA, Víctor (2011): “Panorama social de Chile en el Bicentenario”, en *Revista Análisis del Año 2010*, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago.

---

### CAPÍTULO III

<sup>11</sup> MUÑOZ, Constanza (2011, 4 de abril): *Universidad Central: Estudiantes en paro indefinido*, La Nación.

<sup>12</sup> MUÑOZ, Alejandra (2011, 28 de abril): *Rector de U. de Chile acusa a planteles privados de hacer lobby para acceder a fondos públicos*, El Mercurio.

<sup>13</sup> EMOL (2011, 27 de mayo): *Alumnos de instituciones privadas se organizan y exigen fondo único de crédito*. En: [www.emol.com](http://www.emol.com) [Consultado en 01-06-12]

<sup>14</sup> GARRETÓN, Manuel Antonio, y MARTÍNEZ, Javier (1985): *El movimiento estudiantil: conceptos e historia. Tomo 4*, Ediciones SUR, Santiago de Chile. En: [www.sitiosur.cl](http://www.sitiosur.cl) [Consultado en 01-10-12]

<sup>15</sup> BRUNNER, José Joaquín (1985): “El movimiento estudiantil ha muerto. Nacen los movimientos estudiantiles”. Material de discusión, Número 71, FLACSO, Santiago de Chile. P. 19. En: [www.cronopio.flacso.cl](http://www.cronopio.flacso.cl) [Consultado en 01-02-13]

### CAPÍTULO IV

<sup>16</sup> GARRETÓN, Manuel Antonio, y MARTÍNEZ, Javier (1985): *Op. cit.*

<sup>17</sup> ORELLANA, Víctor (2010): *Apuntes para una historia del movimiento estudiantil entre 2000 y 2010*. En: [www.izquierdaautonoma.cl](http://www.izquierdaautonoma.cl) [Consultado en 01-10-12]

<sup>18</sup> ORELLANA. *Ibid.*

<sup>19</sup> ATRIA, Fernando (2012): *La mala educación. Ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile*, Editorial Catalonia / Centro de Investigación Periodística CIPER, Santiago de Chile.

<sup>20</sup> OCDE / Banco Mundial (2009): *Revisión de Políticas Nacionales de Educación. La Educación Superior en Chile*. Ministerio de Educación, Chile.

<sup>21</sup> OCDE (2010): “La OCDE y la educación en Chile”. En [www.ceoc.cl](http://www.ceoc.cl) [Consultado en 29-01-13]

---

<sup>22</sup> MELLER, Patricio (2011): *Universitarios, el problema no es el Lucro, es el Mercado*, Uqbar Editores, Santiago de Chile.

<sup>23</sup> RIESCO, Manuel (2011, 3 de junio): *¡CAE!*, El Mostrador. En [www.elmostrador.cl](http://www.elmostrador.cl) [Consultado en 20-08-12]

<sup>24</sup> TORRES, Verónica (2011, 13 de octubre): *Las reveladoras actas de acreditación de institutos profesionales y centros de formación técnica*, CIPER. En [www.ciperchile.cl](http://www.ciperchile.cl) [Consultado en 25-08-12]

<sup>25</sup> Cámara de Diputados (2012, junio): Informe de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior. En [www.camara.cl](http://www.camara.cl) [Consultado en 29-01-13]

<sup>26</sup> REDONDO, Jesús, et al (2007): “Cuando la suerte está echada: estudio cuantitativo de los factores asociados al rendimiento en la PSU”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago de Chile.

<sup>27</sup> ORELLANA, Víctor (2011): “Nuevos estudiantes y tendencias emergentes en la educación superior: una mirada al Chile del mañana”; en JIMÉNEZ, Mónica, y LAGOS, Felipe: *Nueva geografía de la educación superior y de los estudiantes*, Aequalis, Santiago de Chile. P. 107

<sup>28</sup> URZÚA, Sergio (2012): “La rentabilidad de la educación superior en Chile: ¿educación superior para Chile?”, Documento de Trabajo N°386, Centro de Estudios Públicos CEP, Santiago de Chile. En [www.cepchile.cl](http://www.cepchile.cl) [Consultado en 20-08-12]

<sup>29</sup> OSSANDÓN, José (2012, 23 de abril): *¿El CAE está volviendo más pobres a los pobres?*, CIPER. En [www.ciperchile.cl](http://www.ciperchile.cl) [Consultado en 27-08-12]

## **CAPÍTULO VI**

<sup>30</sup> CORTÉS TERZI, Antonio (2000): *El circuito extrainstitucional del poder*, Ediciones ChileAmérica, Centro de Estudios Sociales (CESOC), Santiago de Chile.

<sup>31</sup> ORELLANA, Víctor (2012): “Crisis educacional: cuando los árboles no dejan ver el bosque. La centralidad de la tensión entre Estado subsidiario y derechos universales”.

---

Dossier seminario *Chile tras la revuelta estudiantil, ¿y ahora qué?*, Fundación Nodo XXI.

En: [www.nodoxxi.cl](http://www.nodoxxi.cl) [Consultado en 29-12-12]

<sup>32</sup> MATAMALA, Daniel (2012, 26 de enero): *Ricardo Lagos: “¿Y por qué tengo que hacer una autocrítica?*, Qué Pasa.

<sup>33</sup> BRUNNER, José Joaquín (2012, 16 de diciembre): *El sinuoso camino de la acreditación*, La Tercera.

<sup>34</sup> FONTAINE, Denise (2012, 7 de diciembre): *Harald Beyer: “En el fondo, esta preocupación por la educación al final es una mentira, un gran bluff”*, El Pulso.

<sup>35</sup> Cooperativa (2011, 31 de agosto): *Arturo Martínez: “Los profesores de filosofía están detrás de la violencia de las marchas”*. En: [www.cooperativa.cl](http://www.cooperativa.cl) [Consultado en 06-02-13]

## CAPÍTULO VII

<sup>36</sup> FAÚNDEZ, Gloria (2011, 20 de noviembre): *Eduardo Frei: “Ya no hay tiempo para escuchar al movimiento estudiantil”*, La Tercera.

<sup>37</sup> AYLWIN, Mariana; Matte, Patricia; Brunner, José Joaquín; y otros (2011, 23 de noviembre): *Prioridades en educación*, Carta al director, El Mercurio.

<sup>38</sup> AHUMADA, Ricardo (2011, 12 de julio): *Harald Beyer y el debate en educación: “Nunca una universidad con fines de lucro va a ser una buena universidad”*, The Clinic.

<sup>39</sup> La Tercera (2012, 14 de mayo): *Boric interpela a ministro Beyer y le solicita terminar con el lucro en las universidades*.

<sup>40</sup> Encuesta: Evaluación gestión del Gobierno (2012, septiembre), Informe Mensual, Adimark.